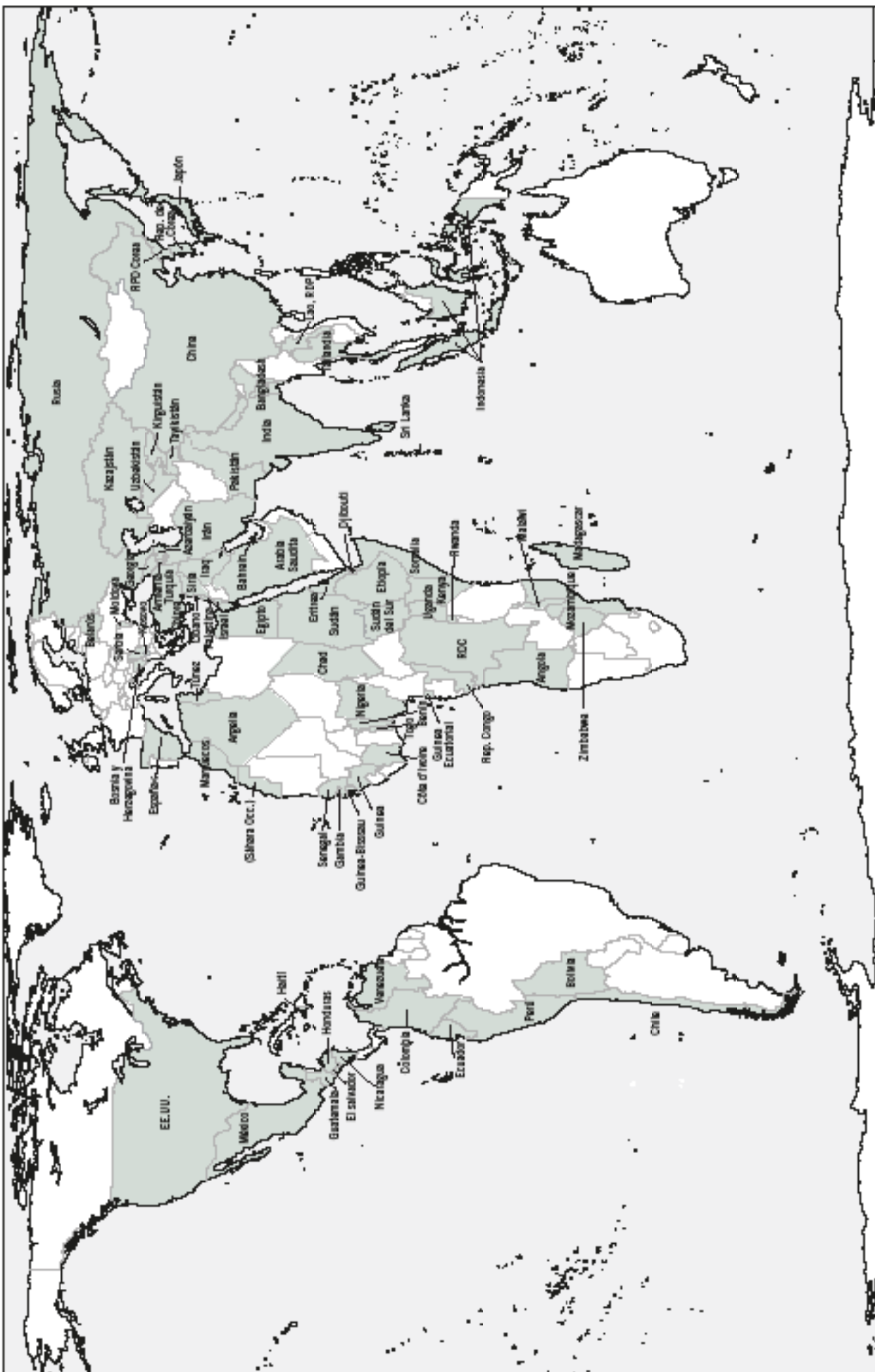


Mapa 2.1 Tensiones



Países con situaciones de tensión en 2019

2. Tensiones

- Durante 2019 se registraron 94 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (36) y Asia (23), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en América (12), Oriente Medio (12) y Europa (11).
- Además del conflicto en la región del Lago Chad, en Nigeria se produjo un incremento de la violencia de grupos criminales en el noroeste, sumado al clima de violencia intercomunitaria del cinturón central y a la inestabilidad derivada del proceso electoral.
- Chad se vio afectado por una grave crisis económica y política, inestabilidad en el norte y este del país, ataques vinculados a violencia intercomunitaria, así como acciones de Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad.
- Durante el año se deterioró gravemente la relación entre Rwanda y Uganda así como entre Rwanda y Burundi y se produjeron acciones por parte de la insurgencia de origen rwandés FDLR, desde su feudo en RDC.
- Después de tres décadas en el poder el presidente Omar al-Bashir fue derrocado debido a las fuertes movilizaciones populares en el país, abriendo un nuevo escenario de transición en Sudán.
- En América Latina estallaron o se incrementaron protestas en varios países, como Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Ecuador o Venezuela.
- La región indonesia de Papúa Occidental vivió el incremento de protestas y episodios de violencia más importante de las últimas décadas.
- Varios atentados simultáneos en iglesias cristianas y hoteles de lujo en Sri Lanka causaron la muerte de más de 320 personas el domingo de Pascua.
- Se agravó la situación en la India tras la aprobación de una nueva legislación de ciudadanía discriminatoria con la población musulmana que derivó en intensas protestas sociales en las que murieron más de 20 personas.
- Mejoró la situación en torno a la Línea de Contacto en Nagorno-Karabaj, con un descenso de las violaciones del alto el fuego y de las víctimas del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
- Multitudinarias protestas en Irán a partir de noviembre motivaron una durísima represión por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas.
- Iraq fue escenario de masivas protestas contra la corrupción y el nepotismo de la clase dirigente que fueron duramente reprimidas, resultando en la muerte de más de 400 personas.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2019. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2019. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan Los países afectados por situaciones de tensión durante 2019.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2019

Tensión ²	Tipología ³	Actores principales	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
África⁵			
África Central (LRA)	Internacional	Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, grupos armados de RCA, grupo armado LRA	1
	Recursos		=
Angola (Cabinda)	Interna	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo	1
	Autogobierno, Recursos		↑
Argelia	Interna	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak	2
	Gobierno		↑
Benin	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Chad	Interna	Gobierno, grupos armados (UFR, UFDD), oposición política y social, milicias comunitarias	3
	Gobierno, Recursos, Territorio		↑
Congo, Rep. del	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Costa de Marfil	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	1
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↓
Eritrea – Etiopía ⁶	Internacional	Gobierno de Eritrea, Gobierno de Etiopía	1
	Territorio		↓
Etiopía	Interna	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		=
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno de Etiopía, gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		=
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	2
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		=

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2019 con la del año 2018 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2019 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.
5. Las situaciones de tensión relativas a Camerún, Chad y Níger presentes en 2016 debidas a la inestabilidad generada por el conflicto armado de Boko Haram se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Lago Chad (Boko Haram). A su vez, las situaciones de tensión relativas a Níger y Burkina Faso presentes en 2017 debidas a la inestabilidad generada por la presencia de insurgencia yihadista se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Sahel Occidental.
6. Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenia	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↓
Malawi	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Madagascar	Interna	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas	1
	Gobierno, Recursos		=
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁷	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Mozambique	Interna	Gobierno, RENAMO	2
	Gobierno, sistema		=
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	2
	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↓
RDC – Rwanda ⁸	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda ⁹	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente	2
	Gobierno, Identidad		↑
Rwanda - Burundi	Internacional	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados	2
	Gobierno		↑
Rwanda - Uganda	Internacional	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Uganda	2
	Gobierno		↑
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	1
	Autogobierno		=
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	2
	Territorio		=
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		↓

7. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

8. Esta denominación hace referencia a la tensión internacional RDC-Rwanda-Uganda aparecida en ediciones anteriores del informe *Alerta!* Aunque comparten características similares, a partir del informe *Alerta 2016* se analizan de forma separada RDC-Rwanda y RDC-Uganda.

9. Ibid.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Togo	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	1
	Gobierno, Sistema		↓
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
América			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Chile	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Colombia	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	2
	Gobierno		↓
Ecuador	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		=
Haití	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas	3
	Gobierno		↑
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	2
	Gobierno		↓
México	Interna	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición	3
	Gobierno, Recursos		↑
Nicaragua	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↓
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	1
	Gobierno, Recursos		=
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Asia			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)	2
	Gobierno		↓
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
China (Hong Kong)	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
China – Japón	Internacional	China, Japón	1
	Territorio, Recursos		=
China – Taiwán	Internacional	China – Japón	1
	Territorio, Recursos		↑
Corea, RPD –EEUU, Japón, Rep. de Corea¹⁰	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	2
	Gobierno		↑
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	1
	Sistema		=
India	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Sistema, Gobierno		↑
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(ICS), KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	2
	Autogobierno, Identidad		=
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↑
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Kazajstán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	1
	Sistema, Gobierno		↑
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Lao, RDP	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		=
Mar de la China Meridional	Internacional	China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei Darussalam	1
	Territorio, Recursos		↑
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	2
	Gobierno, Sistema		=
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles, grupo armado National Towheed Jamaat (NTJ)	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=

10. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		↓
Europa			
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Belarús	Interna	Gobierno, oposición social y política	1
	Gobierno		=
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Chipre	Interna internacionalizada	Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
España (Cataluña)	Interna	Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, partidos políticos independentistas y no independentistas, actores de la sociedad civil, poder judicial	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Rusia (norte del Cáucaso)¹¹	Interno	Gobierno federal ruso, gobiernos de las república de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		↓
Serbia – Kosovo	Internacional ¹²	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		=
Oriente Medio¹³			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	1
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)	2
	Autogobierno, Identidad		↓

11. En anteriores ediciones de este informe se analizaban por separado las tensiones Rusia (Daguestán) y Rusia (Chechenia).

12. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

13. Respecto a Yemen (sur), los acontecimientos relativos a esta disputa han dejado de ser analizados como tensión –como en pasadas ediciones del informe– y el análisis se ha integrado en el caso de conflicto armado Yemen (al-houthistas).

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán – EEUU, Israel¹⁴	Internacional	Irán, EEUU, Israel	3
	Sistema, Gobierno		↑
Iraq	Interno internacionalizado	Gobierno, oposición política y social, Irán, EEUU	3
	Gobierno		↑
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Israel – Siria – Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán	3
	Sistema, Recursos, Territorio		↑
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahi al-Sham	2
	Gobierno, Sistema		↑
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
 †: escalada de la tensión; ‡: reducción de la tensión; =: sin cambios.
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2019

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2019, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2019 se identificaron 94 escenarios de tensión a nivel mundial, lo cual implica un incremento del 12% en relación al 2018, cuando se identificaron 83 escenarios. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 36 casos, seguida de Asia (23), Oriente Medio y América Latina (12 casos en cada región) y Europa (11). Cabe destacar la identificación de 16 nuevos escenarios de tensión. Cinco de ellos se registraron en África: en Benín y Malawi debido al incremento de las protestas y movilizaciones ciudadanas contra los respectivos gobiernos en el marco de la celebración de elecciones; en Argelia, debido a las dinámicas de tensión que se manifestaron durante el año en masivas movilizaciones contra el régimen; y otros dos casos de tensión interestatal correspondientes al deterioro de las relaciones entre los

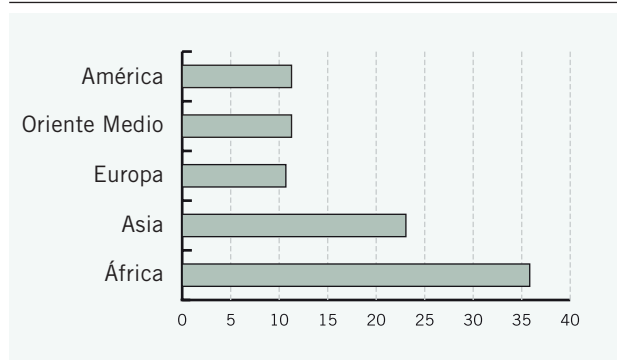
Durante 2019 se identificaron 94 escenarios de tensión, 36 en África, 23 en Asia, 12 en Oriente Medio, 12 en América Latina y 11 en Europa

Ejecutivos de Rwanda y Burundi y de Rwanda y Uganda. En América se identificaron tres nuevos casos –Chile, Colombia y Ecuador– donde se registraron las protestas populares más importantes de la última década contra los diferentes gobiernos así como significativas denuncias sobre violaciones de los derechos humanos respecto de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Cinco nuevos casos de crisis sociopolíticas se ubicaron en Asia, correspondientes a China-Taiwán, Kazajistán, Mar de China Meridional, China (Hong Kong) e India, estos dos últimos vinculados a fuertes protestas populares contra los respectivos gobiernos. En Europa destacó el incremento de la tensión en Cataluña (España) debido a las repercusiones de la sentencia judicial contra líderes políticos y sociales independentistas, mientras que en Oriente Medio destacó Iraq debido al deterioro de la situación política en el país. A su vez, durante el 2019, los casos de Rusia (Daguestán) y Rusia (Chechenia), analizados en anteriores ediciones de este informe por separado, pasaron a convertirse en una única tensión bajo la denominación de Rusia (Norte del Cáucaso). Por otra parte, tres casos considerados en años anteriores tensiones dejaron de serlo en 2019, debido a la mejora de la situación política en Yibuti, Lesotho y Armenia.

Si bien las situaciones de tensión pueden atribuirse a múltiples factores, el análisis del panorama de crisis

14. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2019



en 2019 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con los datos observados en años precedentes, **a nivel global un 71% de las tensiones tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** (Gobierno)– lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados (Sistema). En América Latina, por ejemplo, todas las tensiones identificadas estuvieron vinculadas a alguna de estas dos variables. A su vez, **el 40% de las tensiones a nivel mundial tuvo como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias, siendo este porcentaje claramente superior en Europa (más del 82%, nueve de los 11 casos registrados) o muy inferior en América (8%, uno de los 12 casos)**. Cabe destacar que en alrededor de una tercera parte de las tensiones (31%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

Un 71% de las tensiones tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados

En línea con años anteriores, **algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvo un carácter interno (51 casos o un 54%)**, siendo especialmente paradigmático el caso de América Latina, en el que nuevamente la práctica totalidad de los casos (excepto Haití) fueron de este tipo. Por otra parte, **casi una tercera parte de las tensiones a escala global fueron internas internacionalizadas (25 situaciones o casi un 27%)**, siendo este porcentaje claramente superior en regiones como Oriente Medio (la mitad de las crisis) o Europa (55%) y significativamente inferior en África (14%) y América Latina, únicamente con el caso de Haití. Finalmente, **una quinta parte de las tensiones fueron internacionales (18 casos o casi un 19%)**, concentrándose en Asia (26%) y África (22%). En cuanto a la **evolución de las tensiones**, en un 37% de los contextos (35 casos) no se experimentó cambios significativos, mientras que **en 41 casos (44%) se registró un deterioro con respecto a 2018**, y solo en un **19% de los escenarios se observó una cierta mejoría de las crisis** (18 casos). En América, el 58% de los

casos presentó un empeoramiento de la situación (siete de 12), mientras que África concentró casi la mitad de los casos de mejora a nivel global (ocho de los 18). Respecto de la **intensidad de las crisis sociopolíticas**, durante 2019 la mitad de las mismas presentaron una intensidad baja (49%, un porcentaje similar al 51% que se registró en 2018), un tercio registró una intensidad media (34%, equivalente a la cifra del año pasado) y solo el 18% de los casos tuvo altos niveles de tensión (17 casos), 11 de los cuales se produjeron en África (seis) y Oriente Medio (cinco).

En términos comparativos con años anteriores, **la cifra de tensiones graves siguió la tendencia a la baja** de los últimos años –aunque con un pequeño desvío en relación al 2018– representando un 18% en 2019, un 15% en 2018, un 20% en 2017 y un 24% en 2016. Varios contextos que en 2018 habían experimentado altos niveles de tensión desescalaron durante 2019 pasando a ser tensiones de media o baja intensidad. Fue el caso de RDC, Nicaragua o Irán (noroeste). Sin embargo, también hubo seis escenarios que habían registrado niveles medios o bajos de tensión en 2018 y años anteriores, cuyos niveles de conflictividad se incrementaron sustancialmente y fueron considerados de alta intensidad en 2019: Sudán, Haití, Indonesia (Papúa Occidental), Sri Lanka, Irán e Irán – EEUU, Israel. Cabe señalar que durante 2019, a diferencia de 2018 cuando tres escenarios de crisis sociopolíticas escalaron y pasaron a convertirse en conflicto armado –Camerún (Ambazonia/ North West y South West), norte de Níger y de Burkina Faso–, **tan solo el escenario de tensión en el norte de Mozambique**, provocado, en parte, por el accionar de grupos insurgentes que presentan agendas yihadistas, **evolucionó negativamente hasta llegar a considerarse conflicto armado**.

Oriente Medio concentró el mayor número de tensiones de alta intensidad por región, con cinco casos de los 12 registrados (42% de las tensiones de la zona), destacando la tensión en **Egipto** –donde por un año más se prolongó el clima de tensión interna caracterizado por la deriva autoritaria del Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi y la persistente persecución y represión a la disidencia, vulneraciones a los derechos humanos, abusos de las fuerzas de seguridad y la aplicación de medidas de excepción–; **Iraq** –como consecuencia de masivas protestas contra el sistema político, la corrupción y el nepotismo que fueron duramente reprimidas, así como por la escalada de hostilidades entre Washington y Teherán a finales de año que se materializó en una serie de hechos violentos en Iraq–; **Irán** –donde se registraron multitudinarias protestas populares contra el Gobierno que fueron duramente reprimidas por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas–; **Irán-EEUU, Israel** –tensión vinculada al programa nuclear iraní influida por una serie de inci-

dentes en Oriente Medio que propiciaron un escenario volátil y peligrosamente favorable a una escalada militar–; e **Israel-Siria-Líbano** –donde se mantuvo un año más la situación de tensión, en parte como consecuencia de dinámicas vinculadas al conflicto armado sirio.

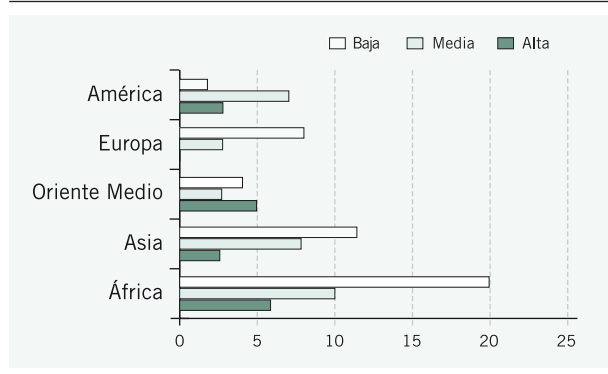
En África, las seis tensiones de mayor gravedad en 2019 fueron **Chad** –que mantuvo durante el año el clima de inestabilidad política y social y la escalada de la violencia debido diferentes escenarios de tensión presentes en el norte del país (región de Tibesti, vinculada, entre otras cuestiones, a la minería ilegal) y este (provincias de Ouaddai y Sila, debido a brotes de violencia intercomunitaria)–; **Etiopía y Etiopía (Oromiya)** –donde a pesar de los cambios acontecidos en el país con el Gobierno de Abiy Ahmed, persistió un elevado clima de violencia, principalmente en el noroeste (región Amhara), el noreste y el centro-sur (Oromiya), debido a numerosas tensiones intercomunitarias y agravios históricos que afloraron en el marco de las reformas políticas emprendidas por el Gobierno–; **Kenia** –donde un año más persistieron los actos de violencia intercomunitaria, así como las acciones del grupo armado somalí al-Shabaab en el norte y en el este, aunque estas con menor intensidad que el año 2018–; **Nigeria** –donde, además del conflicto armado presente en la región noreste (Boko Haram),¹⁵ se mantienen abiertos diferentes escenarios de tensión en el país que han repercutido en un incremento de la violencia y la inestabilidad: actividades de grupos criminales en el noroeste del país (Kaduna y Zamfara); violencia intercomunitaria en el cinturón central (Middle Belt); inestabilidad vinculada al proceso electoral nacional; y tensiones en la región sureña de Biafra y en el delta del Níger¹⁶–; y **Sudán** –que mantuvo durante el año un elevado clima de tensión producto de las importantes movilizaciones populares que fueron duramente reprimidas y lograron la caída del presidente Omar al-Bashir y la apertura de un proceso de transición que inicialmente fue usurpado por una Junta Militar.

En lo que respecta al resto de regiones las tensiones de máxima intensidad tuvieron lugar en **Haití** –que registró un empeoramiento de la crisis política, institucional, social, económica y humanitaria durante el año–; **México** –donde se volvieron a superar los registros de homicidios, convirtiéndose en el año más violento desde que se tienen registros públicos; feminicidios; secuestros; actos de extorsión o trata de personas en relación al año anterior–; **Venezuela** –país en donde se mantuvo el clima de inestabilidad, movilizaciones y protestas sociales, agudizado por la crisis institucional y la

La mitad de las tensiones en todo el mundo fueron de intensidad baja

Las crisis más graves del continente africano se localizaron en Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, Nigeria y Sudán

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



autoproclamación de Juan Guaidó como presidente nacional, que generó momentos de riesgo de confrontación militar–; **India-Pakistán** –donde se deterioraron gravemente las relaciones entre los Gobiernos como consecuencia de diferentes episodios de violencia en el estado indio de Jammu y Cachemira–; **Indonesia (Papúa Occidental)** –donde se incrementaron los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición OPM y las Fuerzas Armadas, así como debido a las protestas y disturbios en la región de Papúa–; y **Sri Lanka** –cuya situación de seguridad sufrió un grave deterioro debido a varios atentados simultáneos que costaron la vida a más de 320 personas y dejaron heridas a otras 500.

2.2.2. Tendencias regionales

Como en años previos, en 2019 **África** se mantuvo como principal escenario de las crisis socio-políticas a nivel global, albergando un 38% de los casos (36 de 94, una cifra relativamente similar a la de años anteriores (33 en 2018, 37 en 2017, 34 en 2016). Se incluyeron cinco nuevos casos respecto al año anterior (Argelia, Benín, Malawi, Rwanda-Burundi y Rwanda-Uganda) mientras que dos de ellos dejaron de ser considerados crisis sociopolíticas por la disminución de los niveles de tensión (Yibuti y Lesotho). Como se mencionó anteriormente, **el 35% de las crisis de alta intensidad en todo el mundo –seis sobre un total de 17– se concentraron en el continente africano en 2019: Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, Nigeria y Sudán.** Esta cifra es similar a la registrada el año anterior en el continente africano, con la única excepción de la reducción de la alta intensidad de la tensión en la RDC y el aumento de la misma en Sudán. En paralelo, se produjo un **incremento de la violencia en el norte de Mozambique**, provincia de Cabo Delgado, que pasó a

15. Véase el resumen de Región Lago Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados).

16. La situación en la región del Delta del Níger, en Nigeria, corresponde a otro contexto de tensión. Véase la Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en el año 2019.

17. Véase el resumen de Mozambique (Norte) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

ser considerado conflicto armado,¹⁷ manteniéndose, en otras lógicas, la tensión entre el Gobierno de FRELIMO y el grupo opositor RENAMO en el país. Asimismo, cabe señalar que el 56% de las tensiones registradas en África (20 de 36 casos) fueron de **intensidad baja**. Por otro lado, el 39% de los casos de crisis sociopolíticas en el continente (14 casos) experimentó un deterioro, cifra que se amplió respecto al año 2018 (10 casos). En cambio, **se observó una mejora relativa en la situación de tensión en ocho casos**: Rep. del Congo, Eritrea, Eritrea-Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenia, RDC, Sudán-Sudán del Sur y Túnez. De todos ellos son reseñables los casos de Etiopía (Oromiya) y Kenia, ya que si bien se produjo un descenso de la situación de tensión en relación al año anterior, siguen siendo considerados casos de alta intensidad. Cabe destacar que en el 39% de los casos (14) **no se registraron cambios significativos**.

Por otra parte, la gran mayoría de las tensiones en África (23 casos) **fueron de carácter interno (64%)**, en líneas similares al año anterior (67% en 2018). Algo menos de una sexta parte de las crisis presentó **elementos de internacionalización** (14%, cifra similar al 2018), entre ellos la influencia de actores foráneos, ya fueran actores armados no estatales de diverso tipo –como la organización armada al-Shabaab (originaria de Somalia) en Kenia–, las acciones de grupos yihadistas regionales o globales –como las filiales de ISIS y AQMI en Túnez y Argelia–, la presencia de tropas internacionales –como la ONUCI en Costa de Marfil o la MONUSCO en RDC– o la influencia de sectores de la diáspora y grupos armados locales presentes en territorios vecinos –como por ejemplo en los casos de Eritrea o Rwanda. Solo **ocho de las 36 tensiones en África tuvieron un carácter internacional, la mayor parte de ellas en la región de Grandes Lagos**: África Central (LRA), Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Rwanda, RDC-Uganda, Rwanda-Burundi, Rwanda-Uganda y Sudán-Sudán del Sur. De entre estos, se constató un incremento de la tensión durante 2019 en los casos de Rwanda-Burundi y Rwanda-Uganda – que pasaron a ser considerados nuevos escenarios de tensión en el continente debido al deterioro de las relaciones entre los diversos ejecutivos y al clima de acusaciones y amenazas–, mientras que evolucionaron positivamente los casos de Eritrea-Etiopía y Sudán-Sudán del Sur debido a cambios en la conformación de gobierno de alguno de los Estados implicados.

En cuanto a las causas de fondo de las tensiones, las crisis tuvieron una dimensión multicausal, en consonancia con la tendencia a nivel global. **Dos tercios de las crisis sociopolíticas acontecidas en África (26 de los 36 casos, un 72%) estuvieron vinculadas a la oposición al gobierno** y en tres casos –Kenia,

En América Latina, el 58% de las tensiones registradas en 2019 padeció un empeoramiento de la situación

Asia registró cinco nuevos escenarios de tensión durante el 2019: China (Hong Kong), China-Taiwán, India, Kazajistán y Mar de China Meridional

Mozambique y Túnez– a la vez se observó la **oposición al sistema**. Por otra parte, el 33% de las tensiones en África tuvo como una de sus causas principales **demandas identitarias y/o de autogobierno**, confluyeron ambas variables en cuatro contextos –Kenia, Eritrea, Etiopía (Oromiya) y Marruecos-Sáhara Occidental.

Adicionalmente, cabe destacar que la lucha por el **control de los recursos y/o el territorio** también fue un elemento relevante en África en más de una tercera parte (concretamente un 39%, 14 casos) de las tensiones en el continente.

América padeció un incremento en el número de tensiones, pasando de las nueve registradas en 2018 a las 12 en 2019, representando un 13% del total a nivel mundial. Los **tres nuevos escenarios de tensión** se sitúan en **Chile, Colombia y Ecuador**, y se relacionan con el incremento de las movilizaciones populares y la grave represión de las protestas. **En Chile**, por ejemplo, **se experimentaron las protestas más virulentas y masivas de las últimas décadas, con un saldo de 26 personas fallecidas, 12.600 heridas y miles de personas detenidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)**. En relación a la intensidad de las crisis en el continente, en dos casos las tensiones fueron de baja intensidad – **Guatemala y Perú**–, mientras que tres de ellas –**Haití, México y Venezuela**– fueron de alta intensidad. En el resto de casos (57%) la intensidad registrada fue media. Sin embargo, como en años anteriores, aunque América Latina y el Caribe continuó siendo una de las regiones del mundo con menor número de tensiones y conflictos armados, de forma paralela, presenta las **tasas de homicidios más altas del mundo, registrando 11 de los 12 primeros países del ranking** (excepto Sudáfrica).

Por otra parte, todas las tensiones en América Latina fueron de carácter interno, con la excepción de Haití, por el papel que las misiones de Naciones Unidas han desempeñado en el país en los últimos años. En cuanto a **la evolución de las tensiones** en América, se registró un **empeoramiento de la situación en el 58% de los casos** (siete) –Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, México y Venezuela–, frente a los tres casos registrados en 2018. **Las 12 tensiones identificadas en América Latina tuvieron entre sus causas principales la oposición a políticas gubernamentales**, que se materializó en protestas de diversa intensidad y carácter y en la grave represión de estas en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Haití o Venezuela. En algunos casos, ese factor se dio en combinación con otras causas, como las **demandas de autogobierno** –Bolivia– o las **disputas en torno al acceso o uso de recursos** –Bolivia, México y Perú.

En **Asia** se registraron 23 tensiones (24% del total), **cinco escenarios más que los observados en 2018** (18):

China (Hong Kong), China-Taiwán, India, Kazajstán y Mar de China Meridional. Entre ellas, **un 13% de los casos (tres) fueron de alta intensidad durante 2019 –India y Pakistán, Indonesia (Papúa Occidental) y Sri Lanka– mientras que en el 52% de los casos (12) la intensidad fue baja** –China (Xinjiang), China-Japón, RPD Corea-Rep. de Corea, India (Manipur y Nagalandia), Kazajstán, Kirguistán, RDP Lao, Mar de China Meridional, Tailandia y Uzbekistán. En relación a la evolución de las tensiones en el continente asiático, en el **43% de los casos (10) se observó un empeoramiento de la situación** que fue especialmente grave en los escenarios de mayor intensidad de la violencia, como lo representan los casos de las tensiones entre India y Pakistán, Indonesia (Papúa Occidental) y Sri Lanka. **A su vez, solamente en cuatro casos (17%) se produjo una mejora de la situación – Bangladesh, India (Manipur y Nagalandia) y Uzbekistán– frente a los siete casos (37%) observados durante el año anterior,** mientras que en nueve casos (39%) no hubo cambios significativos.

Al igual que en 2018, Asia continuó siendo el continente con un mayor porcentaje de tensiones internacionales, seis de las cuales se situaban en Asia Nororiental, concretamente en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu), la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico, la tensión entre China-Taiwán y la crisis en el Mar de la China Meridional que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam. La otra tensión internacional fue la disputa histórica entre India y Pakistán. **Un 43% de las tensiones (10 casos) tuvieron un carácter interno, y un 30% (siete casos) presentaron una clara dimensión internacional,** ya sea por la presencia de grupos armados regionales y tensiones fronterizas, como en tres de los países de Asia Central –Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán– o bien los vínculos transnacionales de organizaciones armadas locales –como en la provincia china de Xinjiang o el estado indio de Assam, o bien por la presencia de organizaciones armadas en los países vecinos –como en el caso de RDP Lao.

En cuanto a las causas de fondo, **14 de las 23 tensiones de la región (61%) estuvieron vinculadas a la oposición al sistema o al gobierno.** En seis de ellas –India, Pakistán y las cuatro ex repúblicas soviéticas de Asia Central: Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán– coincidieron ambas variables, mientras que en otras cinco –las provincias de Tíbet y Xinjiang, en China, así como Hong Kong, la disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur y la situación de la comunidad hmong en RDP Lao– se identificó la oposición al sistema como uno de los ejes fundamentales de la tensión, junto a otros ejes.

Por otra parte, las **aspiraciones identitarias y/o demandas de autogobierno** se observaron en 11 contextos (48%), mientras que la dimensión relativa al **control de los recursos y el territorio** también fue un factor presente en una tercera parte (35%) de las tensiones en Asia.

En Europa se registraron 11 casos de tensiones sociopolíticas, en donde resalta la inclusión de un nuevo escenario en 2019 relativo al deterioro del conflicto político entre Cataluña y España, así como el fin de la situación de crisis en Armenia, que dejó de considerarse escenario de tensión. Siguiendo la tendencia de años anteriores, **el conjunto de los casos de tensión registrados en Europa fue de baja intensidad (73%), no constatándose ningún caso de intensidad elevada.** Por otra parte, en lo concerniente a la **evolución de las crisis sociopolíticas,** cabe destacar

En Europa, cabe destacar que el conjunto de los casos de tensión registrados fue de baja intensidad (73%), no constatándose ningún caso de intensidad elevada

el incremento de la tensión en cuatro casos –Chipre, España (Cataluña) y en las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur–, la mejora de la situación en dos de los 11 casos –Rusia (Norte del Cáucaso) y Armenia–Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)– mientras que en el resto de casos (45%) no se percibieron cambios significativos. Entre los casos en los que se redujo la tensión, cabe destacar la **mejora de la situación en torno a la Línea de Contacto en Nagorno-Karabaj,** con un descenso de las violaciones del alto el fuego y de las víctimas del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Por el contrario, en las situaciones que registraron un deterioro, se destaca el **incremento la tensión en torno al conflicto sobre el estatus de Cataluña en España, principalmente como consecuencia de la sentencia dictada contra líderes sociales y políticos independentistas, entre otros elementos.**

En relación a las causas de fondo, cabe destacar que Europa siguió siendo la región a nivel mundial en la que tuvieron una mayor incidencia las disputas vinculadas con las **demandas identitarias y/o de autogobierno, con el 82% de los casos** vinculados a estos factores (nueve casos de 12), porcentaje similar a años anteriores. También cabe destacar que en el 55% de las tensiones que tuvieron lugar en Europa también se relacionan con causas vinculadas a la **oposición** de determinados colectivos a las políticas del Gobierno o bien al **sistema** en su conjunto. En paralelo, en la línea de años anteriores, el **control del territorio** fue un factor presente en dos de las tensiones más prolongadas de la región: la disputa entre el Gobierno de Chipre y la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre y el contencioso por la región de Nagorno-Karabakh entre Armenia y Azerbaiyán. Por último, en relación al ámbito geográfico de actuación e influencia de los actores presentes en la tensión, se mantiene la tendencia de años anteriores. La mitad de las crisis sociopolíticas que transcurrieron en Europa (55%) fueron **internas internacionalizadas, destacando el rol que gobiernos foráneos juegan en determinados**

contextos, en especial el papel que desempeña Rusia en algunas regiones autoproclamadas independientes en el marco de países que habían formado parte de la URSS: Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, Transdniestria en la República de Moldova. Casi un tercio de los casos (27%) fueron tensiones **internas**, mientras que dos casos fueron considerados tensiones **internacionales**: Armenia-Azerbaiján (Nagorno-Karabaj) y Serbia-Kosovo.

Por último, en **Oriente Medio** se registraron 12 tensiones, una más que la registrada en 2018. La nueva tensión se ubica en **Iraq**, que fue escenario de masivas protestas contra la corrupción y el nepotismo de la clase dirigente que fueron duramente reprimidas, resultando en la muerte de más de 400 personas. Cabe destacar que **Oriente Medio fue la región del mundo con mayor porcentaje de tensiones de alta intensidad** (cinco casos, que supone el 42%, cifra superior al año anterior cuando se registraron tres casos, un 27%). Las crisis sociopolíticas de mayor intensidad se registraron en Egipto, Irán, Irán-EEUU, Israel, Iraq y la crisis que afecta a Israel en relación con Siria y Líbano. Por otro lado, se observaron cuatro tensiones de intensidad baja (33%) y tres (25%) de intensidad media. En relación con la **evolución** de las crisis, **tan solo se identificó un caso en el que se constató una relativa mejora de la situación con respecto a 2018: Irán (noroeste)**. En cinco casos la situación no experimentó cambios destacables respecto el año anterior mientras que **en la mitad de las tensiones (seis casos) se produjo un deterioro de la tensión**, entre las que destaca la situación en **Iraq**, las multitudinarias protestas registradas en **Irán** a finales de año que motivaron una durísima represión por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas, o la escalada de la tensión entre **Irán y EEUU**, vinculada al programa nuclear iraní, en un contexto volátil y peligrosamente favorable a una escalada militar en Oriente Medio.

En lo concerniente a las causas de las disputas, el **75% de las tensiones** registradas en la región (nueve de 12 casos) **tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno o al sistema**. En casi la mitad de las crisis (cinco casos que representan el 42%) el factor de demandas identitarias y/o de autogobierno fue también una de las motivaciones destacadas. En paralelo, cuatro de las tensiones en la región fueron de **carácter interno**, cinco **internas internacionalizadas** y dos de carácter **internacional**: la disputa entre Irán y EEUU e Israel en torno al programa nuclear iraní y el caso de Israel-Siria-Líbano, vinculado a las dinámicas y consecuencias regionales del conflicto árabe-israelí y, más recientemente, influido también por la guerra en Siria.

La violencia criminal en los estados de Zamfara, Sokoto, Katsina y Kaduna en Nigeria se cobró 2.000 víctimas mortales en 2019

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Occidental

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB

Síntesis:

Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

En Nigeria se produjo un incremento de la violencia y de la inestabilidad más allá del conflicto vinculado a las acciones de Boko Haram que afecta a las provincias del noreste del país y la cuenca del Lago Chad.¹⁸ Este aumento tuvo lugar en el noroeste del país, centrado en las actividades de grupos criminales, que se suma al clima permanente de violencia intercomunitaria del cinturón central y a la inestabilidad vinculada al proceso electoral. Así, en primer lugar, hubo un incremento de la violencia política vinculada al ciclo electoral en el país

que tuvo lugar durante el primer trimestre del año. El 23 de febrero se celebraron las elecciones presidenciales y legislativas federales y el 9 de marzo las elecciones a gobernador y las legislativas estatales. En la mayoría de estados se produjo un incremento de la violencia política entre partidarios de los diferentes partidos que se disputaban los gobiernos de estos estados y principalmente entre los seguidores del partido en el poder, el All Progressive Congress (APC) del presidente Muhammadu Buhari, y seguidores del principal partido rival, el People's Democratic Party (PDP) de Atiku Abubakar. El 27 de febrero la comisión electoral dio la victoria al candidato y actual presidente Buhari con el 56%, mientras que Atiku rechazó los resultados. La violencia política se cobró en febrero

18. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

al menos 40 víctimas mortales y decenas de heridos, la mitad de ellos durante la jornada electoral en los estados de Rivers y Akwa Ibom. Se produjeron una decena de incidentes de gravedad en los que grupos de mercenarios y saboteadores a sueldo atacaron oficinas y vehículos de partidos, mítines y concentraciones. A la vez, algunos estados celebraron sus elecciones estatales en diferentes momentos, lo que prolongó el clima de violencia política durante todo el año en diferentes partes del país y las críticas de los observadores internacionales ante las condiciones de intimidación y violencia en que transcurrieron los comicios.

En segundo lugar, **se produjo un aumento de las acciones de grupos criminales en el noroeste del país desde 2018** que se prolongó durante todo el año, principalmente en los estados de Zamfara, Sokoto, Katsina y Kaduna, que ejecutaron a centenares de civiles, cometieron secuestros para obtener rescates, saquearon e incendiaron decenas de localidades, todo lo cual provocó el despliegue de operativos militares para hacer frente a las acciones de saqueo. **El balance anual solo en estos cuatro estados fue de más de 2.000 víctimas mortales como consecuencia de las acciones de los grupos criminales**, de los cuerpos de seguridad y también de las milicias de autodefensa de civiles. En los últimos años se han ido organizando grupos de autodefensa civil para intentar hacer frente a este incremento de la criminalidad. Las acciones de las milicias de autodefensa provocaron un agravamiento de la violencia por cometer ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de formar parte de los grupos criminales que a su vez provocaron nuevas espirales de represalia de unos y otros ante los ataques. **ACNUR alertó a finales de septiembre que la escalada de la violencia había provocado el desplazamiento de 40.000 personas que se vieron forzadas a huir a la vecina Níger** en los últimos 10 meses. Amnistía Internacional ya había publicado un informe sobre el estado de Zamfara en julio de 2018, el más afectado por la violencia de las bandas, afirmando que este estado se encontraba a merced de los grupos criminales que habían asesinado centenares de personas en los últimos dos años en localidades remotas y de difícil acceso para los cuerpos de seguridad. No obstante, cabe destacar que en julio, las autoridades del estado de Zamfara alcanzaron un acuerdo de paz con los grupos criminales para poner fin a la violencia, que incluía la entrega de sus armas a cambio de concederles la amnistía. El acuerdo iba a ser replicado en el vecino estado de Katsina donde el gobierno inició conversaciones de paz con los grupos criminales para frenar sus ataques. Estos procesos de diálogo redujeron la violencia en octubre, aunque persistió un clima de violencia de baja intensidad.

Esta oleada de crímenes se sumó a la histórica confrontación intercomunitaria **entre pastores nómadas procedentes del norte de Nigeria y las comunidades agrícolas del centro y sur del país** que se produce en los estados centrales del país conocidos como “middle belt”. Se constataron enfrentamientos comunales en

espirales de acción-reacción que exacerbaban el clima de violencia, incluyendo los saqueos e incendios de campos y robos y ejecuciones de cabezas de ganado. Los estados más afectados fueron Kaduna, Plateau, Benue, Taraba y Adamawa, con centenares de víctimas mortales como consecuencia de los enfrentamientos intercomunitarios. La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de la ACNUDH, Agnès Callamard, presentó un informe en el que acusaba al Gobierno nigeriano de pasividad y de no poner fin a la violencia entre agricultores y ganaderos que afecta al centro del país desde hace varios años así como a los secuestros y la criminalidad en el noroeste que se ha cobrado miles de víctimas mortales en el último año. El Gobierno rechazó el informe, que también señalaba las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad en el país. Organizaciones locales e internacionales como HRW y Amnistía Internacional también responsabilizaron a los cuerpos de seguridad del Estado de cometer numerosos abusos y ejecuciones extrajudiciales de sospechosos bajo custodia policial. Cabe añadir que en los estados del Delta del Níger, ricos en petróleo, se ha generalizado el secuestro para pedir rescates por los trabajadores expatriados vinculados a las corporaciones petroleras y de nigerianos ricos, situación que también se ha incrementado en el norte de Nigeria en los últimos años, donde localidades enteras se han desplazado para evitar secuestros y ataques por bandas criminales. Por último, en relación a la situación en Biafra, en 2019 se conmemoró el 50º aniversario de la guerra y el desastre humanitario que comportó, con estimaciones de entre uno y cinco millones de personas muertas por el bloqueo humanitario al que fue sometida la región para ahogar el movimiento de autodeterminación. Diversas organizaciones locales e internacionales de defensa de derechos humanos señalaron que durante 2019 persistió la violenta persecución de actores sociales y población civil sospechosa de ser simpatizante del movimiento independentista, considerado terrorista por el Estado nigeriano.

Cuerno de África

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un

creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles.

El año 2019 se vio marcado por el proceso de reformas iniciado por el primer ministro Abiy Ahmed y el rechazo por parte de actores políticos y sectores de la sociedad civil a los cambios emprendidos por parte del Gobierno que tuvo su expresión en brotes de violencia intercomunitaria. Este clima de violencia se cobró centenares de víctimas mortales durante todo el año. Numerosas tensiones intercomunitarias y agravios ignorados por los gobiernos previos afloraron en el marco de las reformas políticas emprendidas por el Gobierno de Abiy Ahmed. **En mayo el fiscal general federal acusó in absentia al antiguo jefe del servicio de inteligencia NISS, Getachew Assefa, y otros 25 cargos del NISS de graves violaciones de derechos humanos cometidos durante su mandato.** El gobierno de la región de Tigray continuó ocultando a Getachew, que a su vez era consejero de presidencia y alto cargo del partido TPLF. También fue arrestado y deportado a Etiopía en mayo el comandante de la prisión de Jijiga (capital de la región de Ogadén) acusado de graves violaciones de los derechos humanos en dicha prisión.

Las zonas del país más afectadas por la violencia intercomunitaria fueron el noroeste (región Amhara), el noreste y el centro-sur (Oromiya). Entre las acciones más destacadas cabe remarcar la muerte a principios de mayo de 200 personas de la comunidad gumuz en la zona Agi Agew (Amhara) en represalia por ataques en la región Benishangul-Gumuz en los que murieron 18 personas entre el 26 y el 28 de abril. En junio se produjeron asesinatos de altos cargos del gobierno de la región de Amhara, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado contra esta región, interviniendo el Gobierno federal para controlar la situación, llevando

a cabo acciones represivas contra la oposición política amhara. El 22 de junio fue asesinado el presidente de la región, Ambachew Mekonnen, y dos de sus asesores en la capital, Bahir Dar. Horas después fue asesinado en Addis Abeba el jefe del Estado Mayor, el general Seare Mekonnen, y un oficial retirado. El Gobierno afirmó que estos asesinatos estaban conectados y eran parte de un complot orquestrado por el brigadier general Asaminew Tsige, quien el 24 de junio fue localizado y ejecutado en un tiroteo cerca de Bahir Dar. Ese mismo día murieron 50 personas a manos de un grupo de asaltantes que podría estar vinculado al intento de golpe de Estado. Tras el ataque, la Policía arrestó a cerca de 250 sospechosos de haber participado en el complot, entre miembros de los cuerpos de seguridad, líderes opositores y seguidores del partido etno-nacionalista amhara National Movement of Amhara. Por último, cabe destacar la muerte de 86 personas durante las protestas que tuvieron lugar en octubre en Addis Abeba y otras partes del estado de Oromiya en protesta por la acusación de un activista, Jawar Mohammed, quien había sido uno de los artífices de las protestas que contribuyeron a encumbrar a Abiy al poder en 2018, y que posteriormente le acusó de volver a actuar autoritariamente como sus antecesores. La influyente Iglesia ortodoxa criticó la respuesta del primer ministro a los enfrentamientos el 27 de octubre, afirmando que había fracasado a la hora de proteger a los miembros de la congregación, debido a que la Iglesia ortodoxa Tewahedo, que se vincula a la comunidad amhara, sufrió diversos ataques en algunas de sus sedes. Por último la campaña de desarme forzoso emprendida por el Gobierno en el Lower Omo Valley (en el estado sureño Southern Nations, Nationalities and People's State, SNNPS) causó decenas de víctimas mortales por el rechazo de la población local. En noviembre la ONU alertó de la existencia de dos millones de personas desplazadas internas como consecuencia del clima de violencia intercomunitaria que sacudía al país.

En el ámbito político, cabe destacar la formación de un nuevo partido en mayo, el partido Ethiopian Citizens for Social Justice (ECSJ), que une a siete grupos opositores y que estará liderado por el veterano líder opositor Berhanu Nega. El 30 de julio el Parlamento decidió posponer las elecciones locales y de distrito para celebrarlas conjuntamente con las elecciones legislativas y regionales de 2020. En noviembre tuvieron lugar dos importantes cuestiones. En primer lugar, la coalición en el poder, formada por cuatro partidos de base étnica, el EPRDF, creada a finales de los ochenta para derrocar la dictadura de Mengistu y que ha gobernado el país desde 1991, decidió fundirse en un único partido de cara a competir con mejores garantías en las elecciones previstas para el 16 de agosto de 2020, a iniciativa del primer ministro Abiy Ahmed. El objetivo de la creación del partido también responde a un intento de reducir la tensión étnica y las divisiones étnicas que han contribuido a definir el país, buscando fomentar la unidad nacional y la integración de las etnias en un proyecto común. Tres de los cuatro partidos (el amhara ADP, el oromo ODP y el multiétnico SEPDM) acordaron

el 21 de noviembre fusionarse y crear el nuevo partido, que se llamará Prosperity Party (PP), mientras que el partido que ha dominado la coalición hasta la llegada al poder de Abiy Ahmed, el TPLF, de la minoría tigré, rechazó unirse al nuevo proyecto, temiendo ver limitada su influencia. Bajo el Gobierno de Abiy, el TPLF ha visto reducirse su poder, y diversos analistas han señalado que la enemistad entre el TPLF y el Gobierno de Abiy ha llevado a que la coalición exista solamente en el papel.

En segundo lugar, **la población de la comunidad sidama, en el sur del país, votó en referéndum el 20 de noviembre para decidir si la región se convertía en un estado federal semi autónomo.** La fecha del referéndum se pospuso durante el año, por lo que se produjo una escalada de movilizaciones en julio en demanda de mayor autonomía para la comunidad sidama que causaron decenas de víctimas mortales, ante el retraso en la celebración del referéndum. La comisión electoral dictaminó que el 98,5% de la gente que participó en el referéndum votó a favor de la creación del nuevo estado, en un proceso que transcurrió en un clima de libertad y normalidad democrática. La comunidad sidama representa el 4% de la población del país, siendo la quinta comunidad nacional más amplia, y la principal en el estado Southern Nations, Nationalities and People's State (SNNPS) del que se dividirá. Históricamente sectores de la comunidad sidama han reclamado disponer de un estado propio, lo que ha provocado tensiones en la región SNNPS, que acoge a 56 grupos étnicos. Diversos analistas señalaron que este paso, que convertirá la región sidama en el décimo estado, puede ser un acicate para que otras comunidades (wolayta, hadiya, gurage, keffa, entre otras) pretendan disponer de su propio estado en términos étnicos. Tras el referéndum se debía iniciar todo un complejo proceso de creación de la nueva administración estatal que tendrá capacidad impositiva, el control de escuelas, policía, salud y otros servicios. Se generó un clima de preocupación entre la población no sidama del nuevo estado, especialmente en la localidad de Hawassa.

Etiopía (Oromiya)	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de rechazo del poder central desde los años setenta. El movimiento político-militar Oromo Liberation Front (OLF) surge entre 1973 y 1974 en la región etíope de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista

oromo participan junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, el OLF se desmarca en 1992 del Gobierno de transición liderado por el partido TPLF de Meles Zenawi, que controla la coalición en el poder, el Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), y desde entonces inicia la lucha armada contra el Gobierno central y contra otros movimientos políticos oromos progubernamentales exigiendo la independencia de la comunidad oromo. En paralelo, la región de Oromiya ha vivido un ciclo de protestas iniciadas por el movimiento estudiantil en 2014 contra el régimen etíope debido a reivindicaciones vinculadas a la percepción de marginación del pueblo oromo, que fueron fuertemente reprimidas. También cabe destacar la recurrencia de los brotes de violencia entre comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo a lo largo de la frontera entre las regiones de Oromiya y de Somalí por la competencia de recursos y por la demarcación entre los territorios de ambas comunidades y en zonas remotas de ambas regiones y la intervención represiva de la Policía Liyu, que contribuye a exacerbar la situación e incrementar la violencia. Por último, la movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles.

En la región de Oromiya se produjeron violentos enfrentamientos intercomunitarios y fuertes tensiones entre sectores oromo en competencia por el poder,

en paralelo al inicio de la desmovilización del OLF. Entre el 12 y el 13 de enero el Ejército llevó a cabo ataques aéreos en la zona occidental de Oromiya contra miembros del OLF que habían rechazado el acuerdo de paz, ejecutando a siete civiles. El Gobierno federal desmintió haber llevado a cabo ataques aéreos, pero afirmó que habían realizado una operación de estabilización tras una petición del gobierno regional.

El 24 de enero el gobierno regional y el grupo armado OLF firmaron un acuerdo de alto el fuego,

según el cual los combatientes del OLF se comprometieron a concentrarse en campos de acantonamiento para proceder a su desarme, desmovilización y reintegración (DDR). Sin embargo, posteriormente se produjo un ataque por parte del OLF el 28 de enero que causó la muerte de dos granjeros en el distrito Amaro. Tras esto, se produjeron nuevos enfrentamientos entre el OLF y los cuerpos de seguridad federales. El Gobierno anunció que 1.000 rebeldes del OLF entregaron sus armas y se acantonaron en campos de DDR. Algunos sectores del OLF cometieron hechos esporádicos de violencia, según informaron algunos medios que no pudieron ser confirmados, pero en general se redujo la violencia.

A finales de mayo el OLF liderado por Dawud Ibsa acordó trabajar conjuntamente con el principal partido oromo en el poder, el Oromo Democratic Party (ODP) y el gobierno de la región. El OLF se comprometió a dar apoyo a las iniciativas para que el gobierno regional recupere el control de la situación. En una declaración conjunta del presidente de la región de Oromiya, Shimeles Abdissa, Dawud Ibsa, y el jefe adjunto del

Estado Mayor, Berhanu Jula, el OLF anunció que nunca más dispondría de un grupo armado. Además, se formó un comité de reconciliación compuesto por ancianos líderes con el objetivo de mediar entre el OLF y el ODP. Este comité presentó un informe en el que se destacaba el trabajo realizado para acantonar a los milicianos del OLF con el objetivo de proceder a su rehabilitación y formación y promover su integración en la sociedad. En paralelo, también en mayo hubo noticias en torno a la fusión entre el OLF y el Oromo Federalist Congress (OFC), liderado por el profesor Merera Gudina.

Kenia	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS

Síntesis:

La política y la economía de Kenia han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007 aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenia en Somalia –que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenia y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenia, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le sumó en 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

Persistieron los actos de violencia intercomunitaria durante el año, así como las acciones del grupo armado somalí al-Shabaab en el norte y en el este, aunque se constató una reducción del número de acciones y de su virulencia. Junio fue el periodo del año en el que al-Shabaab estuvo más activo, mes en el que atacaron puestos militares y de Policía y puestos de control fronterizo. El hecho más destacado del año fue el ataque a un hotel en el área de Westlands, en Nairobi, el 15 de enero, en el que tras 17 horas de asedio murieron 21 civiles, los seis miembros de al-Shabaab y se produjeron al menos 30 heridos. En segundo lugar, cabe destacar la muerte de entre ocho y diez policías, según las fuentes, por la detonación de un explosivo al paso del vehículo en el que circulaban por la zona fronteriza con Somalia, en el condado de Wajir, el 15 de junio. El 19 de junio un tribunal de Nairobi declaró culpables a tres personas por colaborar con el grupo armado para realizar el atentado que tuvo lugar en la universidad de Garissa en 2015 y que causó la muerte de 148 personas.

ACLED elevó a más de 200 las víctimas mortales vinculadas a acciones de al-Shabaab y a la violencia intercomunitaria, cifra sensiblemente inferior a los 406 registrados en 2018 y a los 730 de 2017. En este sentido, cabe destacar la reducción del número de muertes a manos de la Policía en el año 2019 según desveló Deadly Force en comparación con los años anteriores.¹⁹ En 2015 murieron 143 personas a manos de la Policía, pasando a 205 personas en 2016, 256 en 2017, 219 en 2018, cifra que se vio reducida a 105 personas en 2019 (hasta 30 de septiembre), lo que supone una reducción del 47% en un año. La escalada de la violencia policial en 2017 coincide con el ciclo electoral que vivió el país. Por último, cabe destacar los enfrentamientos entre milicias vinculadas a diferentes comunidades durante todo el año en la zona norte del país, por robo de ganado, demarcaciones fronterizas entre territorios de diferentes comunidades, represalias por ataques previos en torno a cuestiones vinculadas a la propiedad de la tierra, entre las principales cuestiones.

Por otra parte, cabe destacar el incremento de la tensión entre Kenia y Somalia a raíz del descubrimiento de yacimientos de hidrocarburos en una zona marítima en disputa entre ambos países. El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya pospuso la audiencia sobre esta cuestión inicialmente establecida para septiembre a noviembre y, posteriormente, a junio de 2020. En noviembre los presidentes de ambos países se reunieron y decidieron normalizar las relaciones, tras una escalada de la tensión entre ambos durante gran parte del año, en la que se interrumpieron los vuelos directos entre ambos países y se llamaron a los embajadores a consultas, entre diversas medidas de presión.

19. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto del rotativo keniano Daily Nation, Nation Newsplex, busca registrar todas las muertes resultantes de operaciones policiales en Kenia, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado. La base está configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority, otras agencias gubernamentales y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Somalia (Somalilandia – Puntlandia)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Territorio Interna
Actores:	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo

Síntesis:

Ambos Gobiernos mantienen una disputa por el control de las regiones fronterizas de Sool, Sanaag y Cayn desde 1998. Estas tres regiones, que forman la administración SSC (por sus iniciales) se encuentran geográficamente dentro de las fronteras de Somalilandia, aunque la mayoría de clanes de la región se encuentran asociados a los de Puntlandia. Desde entonces se han producido choques esporádicos e intentos de mediación. En 2012 estas regiones crearon el estado de Khatumo, lo que añadió más complejidad a la situación. En 2016 la administración de Khatumo y Somalilandia iniciaron conversaciones de paz, pero el presidente y el vicepresidente de Khatumo se enfrentaron y crearon dos administraciones separadas que reclamaban ser el legítimo gobierno. Una de ellas acabó negociando su inclusión en Somalilandia.

La tensa relación entre ambas administraciones enfrentadas en torno al control de la región de Sool, Sanaag y Cayn (SSC) persistió durante el año, produciéndose enfrentamientos esporádicos entre milicias y cuerpos de seguridad respectivos. Los intentos de negociación entre Somalilandia y Somalia con el objetivo de integrar a la primera en una Somalia federal fueron el telón de fondo de la tensión. En la región de Sanaag, milicias clánicas rivales se enfrentaron en Duud Arraale y en El Afweyn entre el 7 y el 8 de julio provocando la muerte de 25 personas. También en Sanaag, las fuerzas de Somalilandia se enfrentaron con las tropas del coronel Arre el 10 de julio, que había desertado de Somalilandia a Puntlandia en 2018, dejando un saldo de tres soldados de Somalilandia y uno de Arre muertos. Tras la toma de la localidad de Karin por parte de las tropas de Arre el 26 de julio, se desencadenaron enfrentamientos al día siguiente que causaron la muerte de dos soldados de Somalilandia. En agosto se reunieron ancianos líderes de la zona para mediar entre el Gobierno de Somalilandia y el coronel Arre, aliado de Puntlandia, y acordaron un cese de hostilidades y el inicio de negociaciones. El 6 de octubre el presidente de Somalilandia acordó frenar las hostilidades en Sanaag contra la milicia de Arre. No obstante, en noviembre, en las disputadas regiones fronterizas de Sool y Sanaag, entre Puntlandia y Somalilandia, continuaron las tensiones y se registraron varios enfrentamientos armados entre grupos afines a una parte o a la otra. En agosto y en octubre, dos líderes de milicias del clan warsangeli junto a sus tropas desertaron del Ejército de Somalilandia a Puntlandia. Esa fue la tercera desertión importante de militares de los cuerpos de seguridad de Somalilandia a Puntlandia en 2019. El 18 de septiembre, en Ceel Afwayn, en la

región de Sanaag, la violencia entre los subclanes habar yunis y habar jeclo del clan isaq volvió a estallar y dejó un saldo de diversas víctimas mortales.

Grandes Lagos y África Central

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (UFR, UFDD), oposición política y social, milicias comunitarias

Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas janjaweed. Estas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria. Tras las elecciones de 2016, ganadas sin sorpresas por Idriss Déby, persistió el clima de inestabilidad social. Por último, cabe destacar las intervenciones militares en el norte contra grupos con base en Libia y contra la minería ilegal, y contra Boko Haram en la región del Lago Chad, así como periódicos enfrentamientos intercomunitarios por la propiedad y usos de la tierra.

Persistió la inestabilidad en el norte y este de Chad, los ataques y actos de represalia en otras partes del país vinculados a violencia intercomunitaria, así como las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad.²⁰ En el ámbito militar, cabe destacar la intervención militar aérea francesa entre el 3 y el 6 de febrero contra una columna rebelde de la coalición de grupos armados Union des Forces de la Résistance (UFR) formada por 50 vehículos procedentes del noreste, con origen en el sur de Libia, que se dirigía a N'Djamena. A petición del presidente Idriss Déby, los cazas franceses intervinieron en apoyo del Ejército chadiano y destruyeron alrededor de 20 vehículos. El UFR es un grupo liderado por Timan Erdimi, sobrino del presidente Idriss Déby y antiguo jefe del Estado Mayor con residencia actual en Qatar. El 9 de febrero el Ejército

20. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

anunció que habían destruido unos 40 vehículos y arrestado a 250 rebeldes. La oposición y sectores de la sociedad civil criticaron la intervención francesa como una prueba más de su apoyo incondicional a Déby. Por otra parte, centenares de militantes desertaron o abandonaron la coalición rebelde Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD) en marzo.

En relación a los **brotes de violencia en las provincias del este (Ouaddai y Sila), el Gobierno estableció el estado de emergencia en agosto** y lo prolongó durante

el resto del año a raíz de la escalada de los enfrentamientos entre agricultores locales y ganaderos nómadas de origen árabe. Al estado de emergencia se añadió el toque de queda, con el objetivo de desarmar de forma forzosa a la población civil. Por otra parte, **el brote de violencia existente durante el último año en las zonas mineras de la región de Tibesti en el extremo norte del país causó decenas de víctimas mortales y diversos intentos de promover el diálogo entre las partes.**

El Gobierno extendió a Tibesti el estado de emergencia establecido en agosto en el este del país. En agosto también anunció el despliegue de 5.000 soldados en las tres provincias para hacer frente a la situación de inestabilidad, y el cierre de las fronteras con Sudán, RCA y Libia. Finalmente, el 2 de noviembre, el Gobierno y la milicia de autodefensa responsable de la situación alcanzaron un preacuerdo que establecía un alto el fuego. El Gobierno debía levantar el bloqueo sobre la localidad de Miski y liberar a los milicianos del grupo, mientras que la milicia debía entregar sus armas. El 5 de noviembre el presidente reinstauró a los jefes de cantón que fueron expulsados por oponerse a la decisión gubernamental de agosto de 2018 de modificar las fronteras internas por la cual Miski dejó de formar parte de la región de Tibesti, y se integró en Borkou. El acuerdo definitivo se alcanzó el 11 de noviembre, cuando la milicia acordó un cese de hostilidades definitivo y el Gobierno aceptó establecer un mecanismo para gestionar la explotación de oro que comportará el retorno a nivel local de los beneficios derivados de la explotación.

En el ámbito político y social, el Gobierno restringió el espacio público prohibiendo actos de protesta contra los recortes en el suministro del gas butano y el uso del franco CFA. Por otra parte, el 23 de abril el Gobierno rechazó la petición del movimiento opositor Les Transformateurs, de convertirse en partido político –organización creada en 2018 que pretende irrumpir en el escenario político de la mano de Succès Masra, joven ex economista del Banco Africano de Desarrollo. Diferentes acciones organizadas por este movimiento fueron reprimidas durante el año. No obstante, ante la situación del vecino Sudán, donde las protestas por el alto coste de la vida derivaron en la caída de su presidente, Omar al-Bashir, el Gobierno el 10 de mayo

retiró las tasas a la importación de productos básicos como el arroz, la harina, el aceite de cocina y los dátiles para reducir el precio y apaciguar las protestas en el país para evitar una situación de tensión como la vivida en el país vecino. La renovación de los miembros del Cadre National de Dialogue Politique (CNDP), espacio de coordinación entre la mayoría presidencial, la oposición política y la sociedad civil, estuvo pendiente durante todo el año por divergencias en el seno de la oposición política para pactar sus representantes y finalmente fue

renovado en agosto. Este espacio, presidido por Mahamat Zene Bada, secretario general del partido en el poder, el MPS de Idriss Déby, mantuvo conversaciones durante todo el año para acordar el calendario electoral. En mayo, el CNDP decidió posponer las elecciones legislativas previstas para ese mes para finales de año, en una fecha por determinar. Déby celebró reuniones entre el 10 y el 16 de julio con los partidos políticos para discutir sobre las elecciones.

Países de la comunidad internacional presionaron al Gobierno para que acelerara el calendario, autorizara a los partidos políticos a poder desempeñar con libertad sus actividades y la organización de mítines. El presidente, Idriss Déby, presionó a los organismos electorales para acelerar la celebración de elecciones en enero de 2020, rechazando la propuesta de la comisión electoral de realizarlas en abril o noviembre de 2020, debido a la necesidad de revisar la ley electoral y organizar un nuevo censo, tal y como plantea la oposición, que denunció la interferencia del Gobierno y amenazó con boicotear el proceso electoral de no aceptar sus demandas. La muerte de un taxista el 4 de noviembre a manos de los guardaespaldas del presidente de la Asamblea Nacional cuando habilitaban el paso por las carreteras en N'Djamena provocó un fuerte rechazo social y la movilización de miles de personas el 23 de noviembre en el marco de su funeral, acción en la que los cuerpos de seguridad intervinieron causando la muerte de una persona.

El Gobierno chadiano restringió el espacio público prohibiendo actos de protesta contra los recortes en el suministro del gas butano y por el uso del franco CFA

RDC	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada “primera guerra mundial africana”.²¹ La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A

21. Véase la síntesis de RDC (este) y RDC (este - ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

partir de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en diciembre de 2005. En 2006 se celebraron elecciones presidenciales para poner fin a la transición, en las que Kabila fue elegido presidente, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad. La prolongación del mandato del presidente Kabila, que debía expirar en las elecciones de 2016 que fueron pospuestas hasta finales de 2018, contribuyó a exacerbar la inestabilidad y la movilización política y social en contra de su permanencia en el poder, que fue reprimida con dureza.

La grave crisis política y social a nivel nacional que ha afectado al país como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016 y su prolongación hasta la celebración de las elecciones en diciembre de 2018, tal y como se había acordado en el acuerdo de San Silvestre de diciembre de 2016, **culminó con la celebración de las elecciones en un clima generalmente pacífico en la mayoría del país, que dieron la victoria a Félix Tshisekedi, en lo que supuso la primera transición pacífica de poder en la historia del país.** No obstante, cabe destacar que entre el 16 y el 17 de diciembre de 2018, en las vísperas de las elecciones, se había producido una masacre en cuatro localidades de Yumbi, en la provincia de Mai-Ndombe (oeste del país) que pasó desapercibida al coincidir con el proceso electoral, en la que murieron, según la ONU, hasta 535 civiles de la comunidad banunu a manos de milicias de la comunidad batende. En esta matanza estarían implicados cuerpos de seguridad y actores políticos locales, incentivada por actores políticos, cuerpos de seguridad y de la administración local del Estado en la zona. Otras fuentes elevaron esta cifra a más de 900 víctimas mortales. Dicha masacre se habría visto precedida por una disputa en torno al entierro de un líder comunitario de la comunidad banunu. La ONU llevó a cabo una investigación en la que determinó que podrían haberse producido crímenes contra la humanidad. El nuevo Gobierno abrió una investigación, colaboró con la ONU, inició procedimientos judiciales y sustituyó a numerosos cargos de los cuerpos de seguridad y de la administración local.

El 24 de enero de 2019 Félix Tshisekedi asumió el cargo de nuevo presidente del país, tras su victoria en las controvertidas elecciones presidenciales y legislativas nacionales y provinciales del 30 de diciembre, bajo la sospecha de irregularidades y supuesto fraude electoral. Además, durante el año se constató una apertura del espacio político y una mejora de la situación de seguridad, en comparación con el incremento de la violencia política y de acciones

La grave crisis política y social a nivel nacional que ha afectado a RDC en los últimos años culminó con la celebración de elecciones a finales de 2018 que dieron la victoria a Félix Tshisekedi, lo que supuso en 2019 la primera transición pacífica de poder en la historia del país

insurgentes en el este. La implementación del acuerdo de paz de diciembre de 2016 se vio afectada por la división de la oposición como consecuencia de la ausencia de liderazgo tras la muerte del histórico líder opositor Étienne Tshisekedi, líder del partido opositor UDPS, a principios de 2017.

Las elecciones presidenciales, legislativas nacionales y provinciales se llevaron a cabo el 30 de diciembre de 2018, una semana después de lo previsto (23 de diciembre) porque un incendio destruyó unas 8.000 máquinas electrónicas de recuento almacenadas en un local de la comisión electoral. En medio de acusaciones de fraude electoral por parte de Martin Fayulu y su coalición Lamuka, **el Tribunal Constitucional el 19 de enero confirmó la victoria de Félix Tshisekedi por un estrecho margen** sobre el segundo candidato, Martin Fayulu, quedando en tercera posición el candidato oficialista Emmanuel Ramazani Shadary. La SACD y diversos países africanos como Egipto –país que en febrero asumió la presidencia de la UA–, avalaron el anuncio celebrando el traspaso de poder. Tanto Tshisekedi como Kabila dieron por buenos los resultados (en lo que algunas fuentes especularon sobre un posible acuerdo entre ellos), pero Martin Fayulu presentó una petición ante el Tribunal Constitucional alegando fraude electoral y afirmando que él habría recibido el 62% de los votos y Tshisekedi un 18%, según sus estimaciones y las de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO). Esta, que desplegó a 40.000 observadores electorales, declaró públicamente que los resultados oficiales no coincidían con sus propias conclusiones. Algunos gobiernos y fuentes diplomáticas cuestionaron los resultados oficiales.

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) también anunció los resultados de las elecciones legislativas sobre la base de los cuales la coalición oficialista Frente Común para el Congo (FCC) mantuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, así como en las asambleas provinciales, en medio de duras acusaciones de fraude y protestas en diversas ciudades, en especial en Kikwit (provincia de Kwilu, feudo de Martin Fayulu), y de menor intensidad en Kisangani, Mbandaka, Goma y Kinshasa. La CENI aplazó la votación hasta marzo de 2019 en cuatro circunscripciones, el territorio de Beni, la ciudad de Beni, Butembo y Yumbi, debido al brote de ébola y a las preocupaciones relacionadas con la seguridad. Finalmente, el partido oficialista del presidente Kabila FCC consiguió 361 de los 485 escaños del Parlamento, mientras que la coalición en la que estaba el UDPS de Félix Tshisekedi, el Cap pour

le Changement (CACH), consiguió solo 49 diputados, frente a los 90 correspondientes a la coalición Lamuka. En consecuencia, Tshisekedi no logró apoyos suficientes para escoger un primer ministro ya que el FCC de Kabila bloqueó sus propuestas, lo que derivó en nuevas

negociaciones entre ambos bloques que acabaron con el anuncio el 6 de marzo de un acuerdo para la formación de un Gobierno de coalición y con un primer ministro del FCC. Sylvestre Ilunga Ilunkamba fue nombrado primer ministro el 20 de mayo. El nuevo primer ministro había ocupado diversos cargos de responsabilidad durante los gobiernos de Mobutu Sese Seko. Es miembro del Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia, uno de los principales partidos que conforman el FCC. El nuevo Gobierno está formando por 67 miembros: el primer ministro, cinco vice primeros ministros, 10 ministros de Estado, 31 ministros, tres ministros delegados y 17 viceministros. En el Consejo de Ministros, el CACH obtuvo 23 puestos, mientras que el FCC obtuvo 42. Más del 70% del Gobierno está formado por ministros que lo son por primera vez. La representación de las mujeres es del 17%, pero estas ocupan cargos ministeriales clave, como Relaciones Exteriores y Planificación. En conjunto, los escaños ocupados por el FCC en la Asamblea Nacional y en el Senado representan una mayoría de más de tres quintos y confieren a la coalición amplias facultades legislativas, por lo que tal y como señalaron diversas fuentes, la transición en el poder del país seguía en manos de Kabila y sus acólitos. En las provincias el FCC tenía mayoría en 25 de las 26 asambleas, mientras que en Kivu Norte la mayor parte de los escaños corresponde a Lamuka. Además, el FCC preside 24 asambleas, y 23 gobernadores proceden de sus filas. Lamuka preside dos asambleas provinciales y el CACH preside una. El 24 de abril, la Asamblea Nacional eligió a su Mesa, encabezada por primera vez por una mujer, Jeanine Mabunda, perteneciente a la coalición FCC. El 3 de septiembre, Ilunkamba presentó el programa del Gobierno a la Asamblea Nacional y se hizo efectiva la toma de posesión del Gobierno de coalición.

Tras una reunión de sus miembros fundadores celebrada en Bruselas a finales de marzo, la coalición electoral Lamuka se transformó en una plataforma política dentro de la cual se nombró a Moïse Katumbi primer coordinador, cargo rotativo cada tres meses. En medio de acusaciones de disensiones internas, el candidato presidencial de Lamuka en las elecciones, Martin Fayulu, siguió exigiendo que se respetara “la verdad de las urnas” y organizó multitudinarios actos públicos en Kisangani y Kinshasa. Una de las primeras medidas que puso en marcha el presidente Félix Tshisekedi, en el marco de su denominado “programa de emergencia de 100 días” y de conformidad con el acuerdo político del 31 de diciembre de 2016, fue la concesión del indulto en marzo a unos 700 presos políticos, entre ellos el abogado Firmin Yangambi y el líder de la oposición Franck Diongo. La mejora del clima político facilitó el regreso de líderes de la oposición a la RDC, hecho que contribuyó positivamente al incipiente equilibrio de poderes entre las fuerzas políticas del país. Entre mayo y junio regresaron tres históricos líderes políticos

integrados en Lamuka: Moïse Katumbi (dos años de exilio), Antipas Mbusa Nyamwisi (siete años de exilio) y Jean-Pierre Bemba. El regreso de Katumbi fue posible tras la anulación de una condena de tres años de encarcelamiento por fraude relacionado con la propiedad y la suspensión de todas las acciones judiciales pendientes emprendidas contra él. Katumbi celebró los logros alcanzados por el presidente Tshisekedi, en particular respecto de la apertura del espacio político, y prometió adoptar un enfoque pragmático, promover la cohesión nacional y trabajar de forma constructiva en calidad de miembro de la “oposición republicana”.

Rwanda	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente

Síntesis:

La llegada del colonialismo belga en 1916 exacerbó las diferencias étnicas entre la comunidad mayoritaria hutu y la minoría tutsi. Esta última fue considerada superior y ocupó el poder político, económico y social en el país de la mano de Bélgica en detrimento de la mayoría de la población. Esta situación provocó un fuerte resentimiento y ya en 1959 se produjeron los primeros brotes de violencia etnopolítica contra la comunidad tutsi. Tras la independencia en 1962, la comunidad hutu tomó el poder. En 1990 se inició un conflicto armado entre el grupo armado RPF, liderado por la comunidad tutsi de Uganda, huidos en 1959, y el Gobierno hutu, que alcanzaron un acuerdo en 1993. Este acuerdo no fue respetado y sectores extremistas hutus llevaron a cabo un genocidio entre abril y junio de 1994 de cerca de un millón de personas en su mayoría tutsis pero también sectores hutus moderados, ante la inacción de la comunidad internacional, que retiró la misión de la ONU que debía supervisar el acuerdo. El RPF consiguió derrocar y expulsar al Gobierno genocida, cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Incluso hay sectores que hablan de un segundo genocidio interno, además de los crímenes cometidos por el RPF en suelo congolés en persecución de los responsables del genocidio de 1994 –las antiguas Fuerzas Armadas rwandesas y las milicias Interahamwe, rebautizadas como FDLR– y de los dos millones de refugiados rwandeses huidos a RDC. Desde entonces el presidente Paul Kagame ha gobernado de forma autoritaria, reprimiendo la disidencia política.

Durante el año se deterioró gravemente la relación entre Rwanda y Uganda,²² así como entre Rwanda y Burundi²³ y se produjeron acciones por parte de la insurgencia de origen rwandés FDLR, desde su feudo en RDC. Se produjo un brote de violencia a principios de octubre en el norte del país, cerca de la frontera con RDC, en

22. Véase el resumen sobre Rwanda – Uganda en este capítulo.

23. Véase el resumen sobre Rwanda – Burundi en este capítulo.

el que murieron 33 personas. Un grupo perteneciente a la insurgencia FDLR penetró desde RDC y atacó la localidad de Kinigi, en el distrito de Musanze, causando la muerte de 14 personas. Los cuerpos de seguridad rwandeses persiguieron a los asaltantes, ejecutaron a 19 y capturaron a cinco. La Policía arrestó a la líder del partido opositor no registrado FDU-Inkingi, Victoire Ingabire, acusada de estar involucrada en los ataques de Kinigi.

Además, el Gobierno de Rwanda continuó restringiendo el espacio político y la libertad de expresión en el país. En septiembre, dos asaltantes no identificados apuñalaron y mataron a un alto cargo del partido FDU-Inkingi, y las autoridades arrestaron a dos personas en conexión con el crimen, aunque la líder del partido señaló que el asesinato era un nuevo intento del Gobierno por intimidar a la oposición. Posteriormente, la líder opositora, Victoire Ingabire, anunció el 9 de noviembre la creación de un nuevo partido opositor, el partido Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umurinzi). En enero se inició en Sudáfrica la investigación judicial en torno al asesinato del antiguo jefe de inteligencia de Rwanda, Patrick Karegeya, que fue encontrado muerto en la habitación de su hotel en Johannesburgo en diciembre de 2013. Karegeya, compañero del presidente Paul Kagame durante la rebelión del RPF que derrocó al Gobierno genocida en 1994 y que a su vez cometió graves atrocidades en el país y en la vecina RDC en persecución de los responsables del genocidio, había caído en desgracia para el régimen, fue encarcelado en 2005 y 2006, y en 2007 se exilió junto al antiguo jefe del Estado Mayor, Faustin Kayumba Nyamwasa, con el que fundó el movimiento opositor Rwandan National Congress (RNC), y en 2011 un tribunal rwandés los condenó *in absentia* por ofensas contra el Estado. Ambos en Sudáfrica sufrieron numerosos intentos de asesinato, que derivaron en la expulsión de diplomáticos rwandeses, a pesar de que Rwanda siempre negó su implicación. Cuatro sospechosos rwandeses estaban implicados en el asesinato de Karegeya, pero abandonaron Sudáfrica y no se produjo su extradición. En paralelo, el fiscal jefe de Rwanda en diciembre de 2018 había anunciado que apelaría la sentencia en la que la disidente Diane Rwigara fue absuelta junto a su madre, Adeline, y otras cuatro personas, por parte del Tribunal Supremo rwandés de los cargos de falsificación e incitación a la rebelión el 6 de ese mes. Rwigara es hermana de Assinapol Rwigara, un industrial que en los noventa fue un importante donante del partido en el poder RPF. Posteriormente se convirtió en una voz crítica al régimen e intentó presentarse a las elecciones en agosto de 2017, pero su candidatura fue desestimada por supuestas irregularidades. En septiembre de 2017 fue arrestada y encarcelada a la espera de juicio. Por último, cabe destacar que la justicia francesa abandonó

Durante el año se deterioró gravemente la relación entre Rwanda y Uganda así como entre Rwanda y Burundi y se produjeron acciones por parte de la insurgencia FDLR, desde su feudo en RDC

en diciembre de 2018 la investigación sobre la muerte del presidente rwandés, Juvénal Habyarimana, por falta de evidencias, situación que había deteriorado las relaciones entre ambos países ya que la investigación incluía la participación del presidente Kagame, por aquel entonces líder del grupo insurgente RPF, en el lanzamiento del misil que derribó el avión en el que viajaba y que desencadenó el posterior genocidio. Investigaciones balísticas en 2012 señalaron la posibilidad de que el misil perteneciera a la guardia presidencial de Habyarimana, y una investigación rwandesa en 2009 dictaminó que habrían sido los sectores hutus extremistas los que habrían asesinado a Habyarimana por su voluntad de alcanzar un acuerdo con la minoría tutsi.

Rwanda – Burundi	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados

Síntesis:
El final de los conflictos armados respectivos en Rwanda en 1994 y en Burundi en 2004 revirtió el dominio político y étnico surgido en la independencia. En Rwanda, la revolución de 1959 derrocó la monarquía tutsi y llevó a las élites hutus al poder, que fueron expulsadas tras el genocidio de 1994 por los refugiados tutsis procedentes de Uganda, y que encumbraron al RPF liderado por el general tutsi Paul Kagame en el Gobierno del país. En Burundi, 40 años de regímenes militares tutsis terminaron con un conflicto armado y la victoria del movimiento pro hutu más importante de la rebelión armada, el CNDD-FDD. Su líder, Pierre Nkurunziza, consiguió tejer una red de equilibrios en su seno para encumbrarse en el poder. Ambos se han convertido en los “hombres fuertes” de la región para promover el desarrollo de sus países y poner fin a los conflictos en la zona. Rwanda, con el FPR en el poder, financió la campaña electoral de Nkurunziza, que es visto como moderado porque marginó a otros sectores de la rebelión hutu burundesa (las FNL de Agathon Rwaswa) con conexiones con su enemigo hutu rwandés FDLR. Nkurunziza y Kagame han intercambiado apoyos en torno a la persecución de sus respectivas insurgencias. No obstante, en 2013 esta relación se truncó cuando se produjo la derrota de la rebelión pro rwandesa del M23 en DRC (enemiga de las FDLR). Rwanda acusó a su vecino burundés de ser el refugio seguro para los combatientes cuya presencia en DRC había justificado la intervención de Rwanda hasta entonces.

Persistió el deterioro de la relación entre Rwanda y Burundi, vínculo que ha empeorado en los últimos años a raíz de la grave crisis que padece Burundi, ya que Rwanda presionó a su vecino para que abriera el espacio político de cara a reducir el clima de violencia en el país.

A su vez, Burundi ha acusado al régimen rwandés de autoritario, de reprimir la oposición política y de apoyar la insurgencia burundesa.²⁴ Las informaciones filtradas en diciembre de 2018 en torno a las denuncias de Refugees International, que señaló que en los campos de refugiados burundeses de Rwanda diversos grupos armados burundeses, como las FNL e Imbogoraburundi, estaban reclutando por la fuerza a combatientes, y que podría existir no sólo la aquiescencia de las autoridades rwandesas sino su colaboración activa, contribuyó todavía más a agravar las relaciones entre ambos países. Posteriormente, a finales de febrero de 2019, una decena de cuerpos sin vida fueron encontrados en la parte burundesa del Lago Rweru que separa Burundi de Rwanda, y las autoridades burundesas afirmaron que estos cuerpos procedían de la parte rwandesa, acusación que fue negada por Rwanda. La tensión persistió durante el año. En este sentido, cabe destacar que en noviembre de 2019 grupos armados no identificados procedentes de Burundi atacaron posiciones militares en el distrito de Bweyeye (Rwanda). Posteriormente, tras un ataque mortal en Burundi por un grupo no identificado, el Gobierno burundés el 28 de noviembre acusó al Ejército rwandés de haber perpetrado ataques y amenazó con tomar represalias en caso de que Rwanda continuara con las hostilidades. Kagame insinuó ante el Parlamento rwandés que países vecinos habían estado involucrados en patrocinar ataques transfronterizos contra Rwanda. Semanas antes, los jefes de Estado Mayor de Rwanda, RDC, Burundi, Uganda y Tanzania se reunieron en RDC el 24 y el 25 de octubre para discutir sobre la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares conjuntas contra los grupos armados en el este de RDC.

Rwanda – Uganda	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Uganda

Síntesis:

Ambos Gobiernos han sido históricamente aliados y han jugado un papel muy importante en la evolución política del otro. El Gobierno ugandés, liderado por Yoweri Museveni y su National Resistance Movement, alcanzó el poder en 1986 con el apoyo militar de la comunidad refugiada tutsi entre la cual se encontraba Paul Kagame. A su vez, la Uganda de Museveni facilitó la creación a finales de los ochenta del Rwandan Patriotic Front (RPF), grupo que desde Uganda lanzó la fracasada ofensiva en 1990 para vencer al Gobierno hutu y que acabó derrocándolo tras el genocidio de 1994. Desde entonces, ambos regímenes han combatido del mismo lado en diversas ocasiones durante las guerras en RDC. Desde el fin de la II guerra en RDC, cuando ambos países se retiraron de territorio congolés, su relación

ha sido desigual, aunque han tenido la capacidad y voluntad de negociar diversos conflictos. No obstante, durante el último año la relación se ha deteriorado gravemente como consecuencia de diversos factores, principalmente por el supuesto apoyo de Uganda a la disidencia rwandesa.

Se deterioró gravemente la relación entre Rwanda y Uganda. Durante todo el año se produjo una escalada de acciones y de represalias entre ambos países que hizo temer el peor escenario, según diversos análisis. El 5 de marzo de 2019 el ministro de Exteriores rwandés anunció que cerraría la frontera con Uganda y aconsejó a los rwandeses residentes en Uganda que abandonaran el país, acusando a este país de arrestar rwandeses de forma arbitraria, de dificultar y poner trabas al comercio regional y, sobre todo, de proporcionar apoyo y cobijo a grupos opositores armados rwandeses, acusaciones que fueron desmentidas por Uganda. Específicamente, Rwanda acusó a Uganda de dar apoyo al movimiento Rwanda National Congress (RNC) y especialmente, al grupo armado Forces Démocratiques pour la Libération de Ruanda (FDLR).²⁵ Ambas organizaciones supuestamente pretenden derrocar al Gobierno rwandés actual y se las señala por revivir las tensiones étnicas que condujeron al genocidio de 1994. Entre abril y agosto ambos países adoptaron medidas punitivas contra los ciudadanos del otro país residentes en el propio, como deportaciones o ejecuciones de personas en tránsito fronterizo acusadas de contrabando o de espionaje y cierre temporal de pasos fronterizos.

En julio, se celebró una cumbre en la capital angolana, Luanda, entre los presidentes de Rwanda, Uganda, DRC y Angola, en la que decidieron nombrar como mediadora entre ambos países a Angola con el apoyo congolés. **Finalmente, los presidentes Kagame y Museveni firmaron un acuerdo el 21 de agosto en Luanda para normalizar las relaciones entre ambos países en el que se comprometieron a respetar la soberanía respectiva, a abstenerse de realizar acciones desestabilizantes, a respetar los derechos y libertades de sus ciudadanos y a reanudar las actividades transfronterizas.** En septiembre una delegación de alto nivel ugandesa visitó Kigali para discutir la implementación del acuerdo. Por otra parte, aunque indirectamente relacionado con todo lo anterior, los jefes de Estado Mayor de Rwanda, RDC, Burundi, Uganda y Tanzania se reunieron en DRC entre el 24 y el 25 de octubre para discutir sobre la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares conjuntas contra los grupos armados en el este de RDC. No obstante, continuaron registrándose incidentes de seguridad entre Rwanda y Uganda, en concreto, disparos a nacionales de ambos países en la zona fronteriza, incluyendo la muerte de dos ugandeses acusados de contrabando de tabaco hacia Rwanda, lo que provocó la condena por parte de Uganda, el arresto de 35 rwandeses por entrada ilegal en Uganda y la deportación de 32.

24. Ya en julio de 2018 se constataron ataques transfronterizos, cuando un grupo armado no identificado procedente de Burundi atacó la localidad rwandesa de Cyamuzi, ataques que ya se habían producido en junio. Ya en ese momento el presidente rwandés, Paul Kagame, alertó que su Ejército estaba preparado para defender la integridad del país. The East African, *No end to Rwanda-Burundi spat*, 25 de agosto de 2018.

25. Clement Uwiringiyimana, "Rwanda accuses Uganda of supporting rebels", Reuters, 5 de marzo de 2019.

Sudán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce un duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que, a principios de 2019 conllevan la caída del régimen de al-Bashir.

Tras 30 años en el poder, el 11 de abril Omar al-Bashir fue derrocado como consecuencia de las movilizaciones y protestas populares, cuya última ola emergió en diciembre de 2018. La caída de al-Bashir –que no implicaba necesariamente la superación del régimen–, generó importantes desafíos y oportunidades para la construcción del nuevo escenario político del país, marcado por las incertidumbres sobre la capacidad del nuevo gobierno de transición para afrontar y resolver los importantes retos que afronta el estado sudanés. Entre estos, los estragos que la crisis económica estaba generando en la población más vulnerable o las tensiones y agravios históricos entre el centro y la periferia, que se manifestaban a través de diferentes escenarios de violencia presentes en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul. Las protestas ciudadanas que habían emergido a finales de 2018 solicitando la dimisión del presidente sudanés, Omar al-Bashir, debido a la crisis económica, se intensificaron al inicio de 2019, extendiéndose a varios puntos del país. Estas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad sudanesas, siendo denunciado por grupos de derechos humanos que registraron al menos 40 personas asesinadas y alrededor de dos mil detenidos. La intensificación de las protestas llevó al Gobierno de Omar al-Bashir a anunciar diferentes decretos para tratar de sofocar el descontento popular, entre ellos la disolución del Gobierno federal y los 18 gobiernos estatales del país –poniendo a la cabeza de estos últimos a miembros de las fuerzas de seguridad–; el retraso de la reforma constitucional para permitirle una nueva postulación presidencial; y el decreto del estado

de emergencia en todo el país por un año –medida que no se tomaba desde 1999. A su vez, posteriormente también anunció nuevos decretos relativos al estado de emergencia: se incrementaron las facultades y poder de las fuerzas regulares; se prohibieron las reuniones, manifestaciones y huelgas no autorizadas; se amplió el control sobre la salida de divisas del país; se prohibió la distribución, venta y transporte de combustible fuera de los canales oficiales; se autorizó al fiscal general a establecer tribunales de emergencia por todo el país. A mediados de marzo, la Asamblea Nacional ratificó el estado de emergencia decretado por el Gobierno, aunque redujo su duración a seis meses. De forma paralela, al-Bashir traspasó la presidencia del National Congress Party (NCP) a Ahmed Harun (sobre quien pesaba una orden de detención de la CPI por crímenes cometidos en Darfur) en un intento de volver a postularse y ser elegido presidente en la conferencia del partido prevista para abril. Sin embargo, y pese a las medidas decretadas por el Gobierno, las protestas se mantuvieron e intensificaron en el país.

La presión popular finalmente generó que el día 11 de abril, el ministro de Defensa, Awad Mohamed Ahmed Ibn Ouf, anunciara el derrocamiento y detención de al-Bashir por parte del Ejército, informando de la creación de un Consejo Militar de Transición (TMC) que estaría en el poder durante dos años. A la par, se suspendió la Constitución y se declararon tres meses de estado de emergencia. Abdel Fattah Burhan fue nombrado presidente del TMC. La sociedad civil sudanesa rechazó la creación de la Junta Militar y reclamó la entrega del poder a la ciudadanía. La Unión Africana (UA) reaccionó dando al TMC 15 días para entregar el poder a la población bajo amenaza de expulsión del organismo, ampliándose posteriormente a tres meses. En ese momento se iniciaron conversaciones entre el TMC y la coalición opositora liderada por el movimiento Forces for Freedom and Change (FFC) con el fin de acordar un gobierno de transición compartido y liderado por civiles. La tensión se intensificó como consecuencia del incremento de la represión y ataques a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo las fuerzas paramilitares Rapid Support Forces (RSF). El día 3 de junio se registraron los peores ataques represivos contra las personas manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, que dejaron un balance estimado, según el Comité Central de Médicos Sudaneses, de al menos 108 personas asesinadas y más de 500 heridas. La represión fue condenada por las Naciones Unidas y múltiples países, si bien el bloqueo de China y Rusia impidió una resolución condenatoria de la misma por parte del Consejo de Seguridad de la ONU el 4 de junio. EEUU condenó la represión y condicionó la retirada de Sudán como país “patrocinador de terrorismo” a la implementación de un acuerdo para compartir el poder con los civiles. Por su parte, la UA reaccionó el 6 de junio suspendiendo a Sudán del organismo y exigiendo la creación de un gobierno de transición encabezado por civiles.

Tras meses de negociaciones mediadas por la UA y Etiopía, plagadas de tensiones, movilizaciones, represión, presiones e incidentes, el 17 de julio el Consejo Militar (TMC) y la coalición opositora (FFC) lograron un acuerdo político para la **creación de un gobierno de transición**. Dicho acuerdo político fue consagrado como un acuerdo constitucional el 4 de agosto, y el día 17 se celebró la ceremonia formal de firma del mismo en Jartum. Los principales puntos del pacto eran los siguientes: el período de transición durará 39 meses antes de celebrar elecciones; el Consejo Soberano gobernante estará compuesto por 11 miembros (seis civiles y cinco militares) y estará dirigido por un general durante los primeros 21 meses, y por un civil durante los últimos 18 meses; el primer ministro será nominado por el FFC y confirmado por el Consejo Soberano; el gabinete de gobierno estará compuesto por no más de 20 ministros elegidos por el primer ministro, salvo las carteras de Interior y Defensa que serán elegidas por los miembros militares del Consejo Soberano; el cuerpo legislativo se formará dentro de los primeros 90 días a partir de la firma del acuerdo, cuya composición no superará las 300 personas, de las cuales, al menos el 40% de los escaños deberían asignarse a mujeres; la alianza del FFC tendrá el 67% de los escaños y el 33% restante será para otros partidos políticos no vinculados a al-Bashir; las Fuerzas Armadas de Sudán y el cuerpo paramilitar RSF son parte de la institución militar bajo el mando del jefe de las Fuerzas Armadas; **el Gobierno tendrá como prioridad durante los primeros seis meses del período de transición traer paz en las regiones en guerra: Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul**; el Gobierno de transición trabajará en la elaboración de reformas legales y económicas, así como en delinear una política exterior equilibrada.

El 21 de agosto el economista Abdalla Hamdok asumió el cargo como primer ministro del Gobierno de transición nominado por el FFC y el jefe general de TMC, Abdel-Fattah Burhan, asumió el cargo de presidente del Consejo Soberano. En una declaración conjunta del 21 de agosto, los países de la Troika – Reino Unido, EEUU y Noruega– dieron la bienvenida al nombramiento de Hamdok. De forma paralela, el 19 de agosto, el Tribunal de Justicia de Sudán inició juicio contra el expresidente al-Bashir, acusándolo de cargos de corrupción y posesión ilegal de fondos extranjeros, siendo sentenciado posteriormente a dos años de prisión. Bashir también enfrenta cargos relacionados con el golpe de estado de 1989 que lo llevó al poder y por organizar la violencia contra los manifestantes a principios de 2019. La composición del gabinete de

Tras tres décadas en el poder el presidente sudanés Omar al-Bashir fue derrocado debido a las fuertes movilizaciones populares en el país, abriendo un nuevo escenario de transición en Sudán

gobierno se realizó tratando de incluir a representantes de todas las regiones del país para obtener mayor legitimidad. Fruto de los avances en la conformación del Gobierno de transición civil, la UA, mediante su Consejo de Paz y Seguridad, levantó la suspensión del organismo a Sudán el 6 de septiembre. El día 22 del mismo mes, Hamdok anunció la creación de un comité de investigación independiente sobre la muerte de manifestantes prodemocráticos en junio, el cual debía presentar su informe después de tres meses. La Comisión de Derechos Humanos de Sudán cifró, a partir de los registros policiales, en un total de 85 las personas asesinadas en la represión entre el 3 y el 12 de junio en Jartum, mientras que el FFC mantenía que al menos 127 manifestantes fueron asesinados y cientos más heridos. Paralelamente, miles de sudaneses se manifestaron en varias ciudades el 21 de octubre instando a las nuevas autoridades del país a disolver el antiguo partido gobernante del derrocado Omar al-Bashir (NCP). A finales de noviembre el Gobierno arrestó y encarceló a Ali al-Haj, secretario general del partido, y aprobó un proyecto de ley para dismantelar el antiguo régimen, incluida la disolución del NCP. A su vez, las nuevas autoridades aprobaron reformas legales para aumentar la protección de las libertades civiles.

Por otro lado, durante el año, y sobre todo a partir de las negociaciones abiertas entre el TMC y los grupos civiles opositores al régimen para la conformación del gobierno de transición en el país, se dieron diferentes pasos para desescalar la violencia en las regiones en guerra y lograr la reapertura del proceso de paz.²⁶

En otros aspectos destacados, a finales de octubre el jefe de las fuerzas paramilitares RSF, Mohamed Hamdan “Hemedti”, anunció la retirada y regreso a Sudán de unos 10.000 soldados de la RSF de la campaña militar liderada por Arabia Saudita en Yemen, informando el Gobierno que únicamente quedaban desplegados 5.000 unidades. El primer ministro Hamdok fue designado por el bloque regional Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) para ocupar el cargo de presidente durante un año a partir de febrero de 2020, asumiendo el cargo que Etiopía ocupó desde 2010. Finalmente resaltar que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU en Sudán alertó a finales de año que 9,3 millones de personas en el país, es decir, casi una de cada cuatro, necesitarán asistencia en 2020, de los cuales cinco millones necesitarán asistencia humanitaria, entre ellos 2,4 millones de menores que padecen desnutrición aguda.²⁷

26. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 1 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

27. OCHA, SUDAN. Situation Report. Last updated: 12 Dec 2019.

Norte de África - Magreb

Argelia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak

Síntesis:

En la presidencia de Argelia sin contestación desde 1999, Abdelaziz Bouteflika se había mantenido en el cargo a pesar de padecer una grave enfermedad que le había supuesto estar al margen de la escena pública desde 2013. Una opaca coalición de figuras políticas y militares ha mantenido las riendas del poder en las sombras, identificada popularmente entre la población argelina como “le pouvoir”. En 2019 el anuncio de que Bouteflika (82 años) se presentaría a un quinto mandato alentó masivas movilizaciones populares de una intensidad no registrada desde la independencia del país en 1962. La presión popular forzó su dimisión y, desde entonces, el poder militar ha intentado controlar la transición y ha promovido medidas como la persecución y arresto de algunas figuras asociadas al antiguo régimen. El movimiento de protesta pacífico Hirak ha persistido en sus movilizaciones contra la corrupción, la influencia del poder militar sobre la política y contra la clase dirigente en general, insistiendo en sus demandas de cambio a un sistema genuinamente democrático capaz de impulsar reformas políticas, sociales y económicas.

Durante 2019 Argelia fue escenario de una profunda convulsión y de movilizaciones populares masivas y persistentes contra el Gobierno y la cúpula del poder a unos niveles no vistos desde la independencia del país en 1962. **Las protestas se activaron en febrero, cuando a pesar de su frágil salud y escasas apariciones públicas en los últimos años, el presidente Abdelaziz Bouteflika (82 años) anunció que se presentaría a un quinto mandato** en las elecciones previstas para abril. A principios de marzo las protestas congregaron a unas 800.000 personas en la capital, Argel, y a dos millones más en distintas localidades del país. En los meses siguientes continuaron registrándose multitudinarias manifestaciones, principalmente los viernes, en el marco de un movimiento pacífico (Hirak) movilizadas bajo el mensaje de rechazo a un quinto mandato. Bouteflika intentó apaciguar el clamor popular contra su reelección prometiendo que, de resultar vencedor, impulsaría una serie de medidas, entre ellas una conferencia nacional inclusiva independiente para adoptar reformas constitucionales, políticas y económicas; un referéndum constitucional y un mecanismo independiente para organizar nuevos comicios presidenciales anticipados. Sin embargo, estos anuncios no disuadieron las movilizaciones. Así, a mediados de marzo el mandatario decidió retirar su candidatura y postergar las elecciones. Poco más tarde,

El anuncio de que Abdelaziz Bouteflika se presentaría a un quinto mandato motivó masivas movilizaciones pacíficas en Argelia contra el Gobierno y la cúpula de poder en la sombra, desencadenando la dimisión del mandatario

el 2 de abril, se vio obligado a renunciar –tras dos décadas en el cargo–, después de que el Ejército liderado por el poderoso jefe del Estado Mayor, Gaïd Salah, y el partido oficialista FLN activaran un mecanismo constitucional para declararlo no apto para el puesto. Pese a la dimisión de Bouteflika y a la creciente represión, las protestas continuaron congregando a decenas de miles de personas que exigieron el desmantelamiento del viejo régimen y denunciaron los intentos del poder militar por intentar controlar la transición. El hasta entonces líder de la Cámara Alta del Parlamento, Abdelbaker Bensalah, fue designado presidente interino hasta la celebración de elecciones en julio, pero diversos sectores sociales y políticos de la oposición –desde islamistas a grupos de centroizquierda– anunciaron un boicot a los comicios y exigieron la conformación de una comisión electoral independiente, entre otras demandas. Amplios sectores expresaron su rechazo a cualquier iniciativa promovida por Bensalah y otros actores vinculados al antiguo régimen, incluyendo una propuesta de diálogo nacional que fue recibida con escepticismo y como un intento por cooptar a partidos y asociaciones críticas. Algunos análisis resaltaron que las autoridades argelinas intentaban aprovechar la ausencia de un liderazgo claro en las movilizaciones y la no articulación de un pliego común de demandas. Al mismo tiempo, sin embargo, se destacó el carácter pacífico de las movilizaciones y la unidad en el llamamiento a un cambio de régimen. **En este contexto, y en un reflejo de las pugnas internas en el seno del antiguo régimen, el Ejército y el Gobierno interino promovieron la detención de numerosas personas del entorno de Bouteflika**, entre ellas su hermano, Said Bouteflika –considerado como una de las principales figuras en el poder en la sombra en los últimos años–, el ex jefe de inteligencia Mohamed Mediene, dos ex primeros ministros y varios parlamentarios, entre otras personas.

En los meses siguientes las autoridades argelinas también intensificaron la represión a través de la dispersión de protestas de carácter pacífico, obstáculos para el arribo de manifestantes a las periódicas protestas en la capital, el bloqueo de reuniones de grupos políticos y de derechos humanos y arrestos de voces críticas, entre ellas un activista bereber que murió en prisión en mayo mientras realizaba una huelga de hambre. Se informó de la muerte de otras dos personas vinculadas a las protestas, aunque las circunstancias no estaban claras, así como de cerca de 200 personas heridas. Según la ONG Human Rights Watch **centenares de personas fueron detenidas en 2019 desde el inicio de las movilizaciones, algunas de ellas liberadas sin cargos, pero otras fueron encausadas por ofensa o conspiración contra instituciones del Estado, debilitamiento de la autoridad o moral del Ejército, entre otros delitos**. Otras formas de represión e intimidación incluyeron cierres de webs, detenciones de periodistas y de activistas pro-derechos humanos. Ante la imposibilidad de celebrar

elecciones en julio, el Ejecutivo interino de Bensalah intentó ofrecer algunas concesiones e insistió en la puesta en marcha un diálogo nacional entre el Gobierno y la sociedad civil. Ello, en un contexto en el que se habían articulado diferentes iniciativas de sectores de la sociedad civil y organizaciones afines a partidos políticos que intentaron hacer propuestas y delinear hojas de ruta para una transición. Sectores de la oposición, incluyendo seculares e islamistas y del movimiento estudiantil, mantuvieron su desconfianza y rechazo a participar en los paneles preparatorios del diálogo. Las demandas de las movilizaciones continuaron centradas en la marcha de Bensalah, en el fin del poder de facto de los militares liderados por Gaïd Salah y en el establecimiento de una asamblea constituyente para reformar radicalmente el sistema político argelino. En septiembre, el informe final del comité sobre el diálogo promovido por el Gobierno recomendó la celebración de elecciones presidenciales, que fueron programadas para finales de año. No obstante, diversas fuerzas políticas y sectores sociales hicieron llamamientos al boicot, que se intensificaron tras conocerse que todos los candidatos eran figuras vinculadas al antiguo régimen. Los comicios se celebraron el 12 de diciembre y en ellos resultó electo el ex primer ministro Abdelmadjid Tebboune, con el 58% de los votos. Oficialmente se informó de una participación del 39% del electorado, pero observadores aseguraron que había sido de un 15%. Las elecciones tuvieron lugar en un clima de protestas y de nuevas detenciones de centenares de manifestantes. Al finalizar el año se anunció la muerte del general Gaïd Salah a causa de un ataque al corazón, hecho que añadió incertidumbre al futuro escenario político argelino.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

El Salvador	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

Tras el fin de un conflicto armado (1980-1992), que dejó un balance de alrededor de 75.000 muertes, la situación en El Salvador se ha caracterizado por altos niveles de pobreza y desigualdad, por la proliferación de pandillas juveniles y otras estructuras de crimen organizado, así como por unas altas tasas de homicidios que han convertido al país en uno de los más violentos de la región y del mundo. Durante el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que comportó una reducción significativa en la tasa de homicidios, pero la llegada a

la presidencia de Sánchez Cerén en 2015 comportó un endurecimiento de las políticas de seguridad y un sustancial incremento en los niveles de violencia, generando ello una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas.

En consonancia con la tendencia observada en los últimos años, la tasa de homicidios en 2019 se redujo sustancialmente respecto de la del año anterior. Tras alcanzar un máximo histórico en 2015 (103 homicidios cada 100.000 habitantes, tasa que convirtió a El Salvador en el país con mayores índices de violencia del planeta), la tasa de homicidios se ha reducido de manera ininterrumpida –81 en 2016, 60 en 2017, 51 en 2018 y 35 en 2019. **Según datos oficiales, en 2019 se registraron 2.383 homicidios, un 29% menos que el año anterior.** El descenso en dicha tasa fue especialmente notable a partir de junio, tras la asunción del nuevo presidente, Nayib Bukele, antiguo alcalde de San Salvador que ganó en primera vuelta las elecciones presidenciales del mes de febrero, siendo el primero en la historia reciente del país en no concurrir con las siglas de ARENA o el FMLN. Según algunos estudios, el número de homicidios diarios tras su asunción del cargo se redujo de nueve a cuatro. En este sentido, el Gobierno señaló que el mes de agosto había sido el menos violento del siglo XXI, mientras que el mes de octubre lo había sido desde el fin de la guerra civil en 1992. Si bien algunos expertos en seguridad sostienen que el periodo de tiempo es muy breve como para establecer correlación alguna entre el descenso en el número de homicidios y las políticas del nuevo Gobierno, y que el número de homicidios ya había disminuido sustancialmente en el primer semestre del año (un 13%, según algunos datos), la Administración de Bukele sostiene que es evidente que su estrategia contra el crimen y la inseguridad ciudadana, denominada Plan Control Territorial, estaba dando sus frutos.

Tras asumir el cargo, Bukele descartó públicamente cualquier tipo de acuerdo o tregua con las maras y, además, anunció el endurecimiento de las medidas contra estas. Poco después, recibió numerosas críticas por haber nombrado como jefe de la Policía a una persona que había sido acusada anteriormente de ordenar ejecuciones extrajudiciales. Según el propio Gobierno, el Plan Control Territorial quiere incidir especialmente en el control de los líderes mareros encarcelados (minimizando sus comunicaciones con el exterior), el corte de la financiación de las maras, y el fortalecimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De este modo, un mes después del inicio de su mandato, Bukele anunció el reclutamiento de 3.000 nuevos soldados, así como la mejora y renovación del equipamiento tecnológico de las Fuerzas Armadas y la Policía. Para tratar de contrarrestar las críticas que algunas de sus actuaciones generaron entre organizaciones de derechos humanos, el Gobierno anunció en la segunda mitad del año la aceptación de una visita por parte de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la puesta en funcionamiento de la Comisión Internacional

contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que tendrá el respaldo de la OEA y Naciones Unidas y tendrá como jefe al guatemalteco Ronalht Ochaeta.

Haití	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas

Síntesis:

La actual crisis que atraviesa el país, con movilizaciones masivas y numerosos episodios de violencia registrados en 2019, está vinculada con las acusaciones de corrupción, fraude electoral y negligencia en la acción de gobierno del Presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, la situación de parálisis institucional, fragilidad económica y crisis sociopolítica empezó a agudizarse tras la salida forzada del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional y posteriormente de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH, sustituida por MINUJUSTH en 2017 y por BINUH en 2019) y la mayor implicación y coordinación de la comunidad internacional en la normalización del país han propiciado avances en determinados ámbitos de la gobernabilidad del país, pero no han conseguido lograr una estabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar completamente el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

Si bien a finales de 2018 ya se habían producido protestas antigubernamentales significativas, la crisis política, institucional, social y económica que atraviesa el país alcanzó su punto más álgido durante el 2019. Como consecuencia de las protestas prácticamente continuas que se registraron durante todo el año, con enfrentamientos frecuentes entre manifestantes y Policía, más de 70 personas habían muerto y más de un centenar habían resultado heridas hasta principios de noviembre. En paralelo, se incrementó de manera notable la violencia vinculada a grupos armados que operan en determinados barrios de Puerto Príncipe y otras ciudades. Además, el empeoramiento de la situación económica agudizó la crisis humanitaria que padece el país. En noviembre, **Naciones Unidas alertó de que más de 3,7 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria de manera urgente.** Por su parte, la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos advirtió sobre el riesgo de muerte por inanición de los más de 11.000 reos en el país. A finales del mes de noviembre, una delegación del FMI que visitó el país señaló que Haití se enfrentaba a una crisis económica

Naciones Unidas declaró a principios de noviembre que solamente desde el 15 de septiembre como mínimo 42 personas habían muerto y otras 86 habían resultado heridas

sin precedentes de consecuencias devastadoras y señaló que si persistía la crisis social, existía el riesgo de una recesión económica de más del 1,9% del PIB en 2019. Ante esta situación, a mediados de noviembre el Gobierno se vio obligado a pedir ayuda a la comunidad internacional para paliar la crisis humanitaria que padece el país.

Si bien entre octubre y noviembre de 2018 ya se habían registrado importantes protestas en las que 12 personas habían muerto y más de 50 resultado heridas, las protestas se tornaron multitudinarias y continuas a partir de principios de febrero de 2019, después de que trascendiera un informe del que se desprendía que el Gobierno y el propio presidente, Jovenel Moïse, podrían estar involucrados en el desvío y malversación de importantes cantidades de dinero (más de 2.000 millones de dólares) del fondo PetroCaribe, que permitía el acceso a petróleo venezolano a bajos tipos de interés a varios países de la región. Según varios medios, la agudización de la crisis económica y la creciente escasez de combustible y otros bienes, o la percepción de que el Gobierno incumplía sus promesas electorales, también contribuyeron decisivamente a que miles de personas, convocadas por la oposición, salieran a la calle para exigir la dimisión del presidente. Ya en el mes de febrero 26 personas murieron en el marco de los enfrentamientos y los actos de pillaje que se registraron. A pesar de que Moïse anunció la creación de un comité para un diálogo nacional a finales de febrero, de que el Gobierno presentó ya a mediados del mismo mes un paquete de medidas para atajar la crisis económica y de que Moïse destituyó en mayo al primer ministro, Jean-Henry Céant, las protestas y las peticiones de dimisión continuaron a lo largo del año, con continuos bloqueos, actos de vandalismo, y enfrentamientos entre manifestantes y Policía. En un contexto de creciente escasez de productos básicos a medida que avanzaba el año, las protestas incrementaron especialmente de intensidad a mediados de septiembre.

El 1 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró que solamente desde el 15 de septiembre como mínimo 42 personas habían muerto y otras 86 habían resultado heridas. En los meses de noviembre y diciembre las protestas fueron algo menos concurridas, y las escuelas y los comercios retomaron su actividad después de prácticamente dos meses de parálisis, pero siguieron registrándose abusos policiales –según la oposición– y episodios significativos de violencia y actos de vandalismo y pillaje en los que varias personas resultaron heridas y cuantioso mobiliario urbano dañado.

La crisis social, económica y humanitaria se vio además afectada por la tensión entre el Gobierno y la oposición y por la situación de parálisis institucional que se produjo durante todo el año. **Solamente en 2019, Moïse nombró**

a tres primeros ministros –el tercero de ellos, Fritz-Willian Michel, a finales de año todavía no había sido ratificado en el cargo, después de que trascendiera un intento de sobornar a congresistas para que votaran a su favor– y tuvo que hacer frente a una moción de censura que finalmente no prosperó por pocos votos. Finalmente, cabe destacar que durante el año también se incrementó de manera notable la violencia asociada a bandas delictivas que operan en varias ciudades del país. Según algunos análisis, dichos grupos son utilizados tanto por el Gobierno como por determinados sectores de la oposición para amedrentar a la disidencia o bien para alentar disturbios e inestabilidad. De hecho, durante el año trascendió que algunos oficiales del Gobierno y policías habían estado involucrados en una masacre que se produjo en noviembre de 2018 en el barrio de La Saline (Puerto Príncipe) en la que como mínimo 26 personas fueron asesinadas. Aunque no trascendió el número de víctimas mortales asociadas a este tipo de actores, los enfrentamientos entre bandas rivales fueron constantes y frecuentes durante todo el año. La Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos denunció que en 2019 más de 40 policías habían sido asesinados, mientras que en el 2018 fueron 17.

Honduras	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

La situación política y social del país se caracteriza principalmente por las altas tasas de homicidios de Honduras, que en los últimos años suele considerarse entre los países más violentos del mundo, así como por la polarización social y política que se produjo tras la llegada al poder de Manuel Zelaya en 2006. Las críticas de amplios sectores de la población por su intención de convocar un referéndum para reformar la Constitución y poder presentarse así a un nuevo mandato o bien por su relación con los Gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en especial con Venezuela, desembocaron en un golpe de Estado en 2009 que provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya, que le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2009. A pesar de que Zelaya pudo regresar al país en 2011, desde entonces ha persistido una importante polarización política y social en el país. La actual fase de la crisis, que ha desembocado en movilizaciones antigubernamentales masivas y en graves episodios de violencia, se agudizó tras los comicios presidenciales de 2017 entre el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, y Salvador Nasralla, un candidato muy cercano políticamente a Zelaya, en los que Hernández, finalmente reelecto por un estrecho margen de votos, fue acusado de fraude electoral.

Siguieron registrándose protestas antigubernamentales durante todo el año, aunque de una intensidad menor

a las del año anterior, pero según los datos disponibles a principios de 2020 la tasa de homicidios se incrementó ligeramente, después de varios años en que esta se había reducido paulatinamente. Según datos oficiales, que coinciden bastante con los ofrecidos por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, en 2019 se registraron 3.996 homicidios, un 7,1% más que año anterior. Estos datos rompen la tendencia a la baja que se observaba desde el 2014, año en el que Honduras fue el país con una tasa de homicidios más alta del mundo (87 homicidios cada 100.000 habitantes). En 2017, por ejemplo, estos se redujeron en un 26% respecto del año 2016, mientras que en 2018 se redujeron otro 6% respecto del año anterior. Sin embargo, Honduras sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Según el Estudio Global de Homicidios 2019 publicado por Naciones Unidas –que utiliza datos del 2017– Honduras tenía la tercera tasa más alta del mundo por detrás de El Salvador y Jamaica. En 2019, los departamentos con tasas de homicidios más altas fueron Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida. El 55% de las personas asesinadas eran menores de 30 años. Según el Observatorio de la Violencia, en 2019 también se incrementaron el número de masacres (62 a lo largo de todo el año, una cifra significativamente superior a las 33 que se registraron en 2018) y de feminicidios (319 mujeres asesinadas entre enero y octubre, con un total de 5.555 desde 2006). La comisionada de derechos humanos denunció que el 90% de los feminicidios queda impune.

Durante todo el año, de manera prácticamente ininterrumpida, se produjeron protestas contra el presidente Hernández. Si bien no trascendieron cifras sobre personas fallecidas, heridas o detenidas en el marco de las mencionadas protestas, se estima que estas fueron de menor intensidad que las del año pasado, en el que, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 31 personas murieron, más de 1.600 fueron detenidas e incluso se impuso temporalmente el estado de emergencia. En el mes de enero, coincidiendo con el aniversario de la toma de posesión del cargo de Hernández, miles de personas se manifestaron en todo el país exigiendo su renuncia. Sin embargo, las protestas se incrementaron notablemente a partir del mes de abril, después de que el Gobierno aprobara dos decretos de reforma del sistema de sanidad y educación que, según la oposición, abrían la puerta a la privatización de servicios y al despido masivo de personal. A pesar de que el 2 de junio el Gobierno revocó dichos decretos, las protestas, enfrentamientos y disturbios (se quemaron varios edificios en la capital) continuaron. **A finales de junio, el Ejecutivo desplegó a las Fuerzas Armadas en todo el país de manera indefinida para auxiliar a la Policía en el mantenimiento del orden público.** Las protestas volvieron a escalar en el mes de octubre, poco después de que un tribunal federal de EEUU condenara al hermano del presidente por narcotráfico y otros cargos. En el mes de agosto, este mismo tribunal había acusado a Hernández de haber recibido 1,5 millones de

dólares provenientes del narcotráfico para su campaña electoral de los comicios presidenciales de 2013. Ante tal escenario, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país y los principales líderes de la oposición, incluyendo al ex presidente Manuel Zelaya –derrocado en golpe de Estado– y Salvador Nasralla –rival de Hernández en las elecciones presidenciales de 2017 que desataron la crisis política que vive el país actualmente– formaron una coalición para forzar la dimisión del presidente. Otro de los factores que durante el año provocó tensión entre el Gobierno y la oposición fue el intento de reforma del código penal, que la oposición considera podría conllevar un endurecimiento de penas para opositores al Gobierno. A pesar de estos hechos, también cabe destacar que durante el año se llevaron a cabo numerosas negociaciones para implementar los acuerdos alcanzados durante el llamado Diálogo Nacional auspiciado por Naciones Unidas, y que finalizó en diciembre de 2018. Cabe destacar especialmente los avances en materia de reforma electoral –composición de la Corte Suprema Electoral, establecimiento de una segunda vuelta en las elecciones, entre otros ámbitos–, que contaron con el apoyo técnico de la OEA.

México	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición

Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra al narcotráfico”, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la “guerra contra el narcotráfico” había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

Según los datos hechos públicos por la Secretaría de Seguridad Pública a principios de 2020, **el número de homicidios en 2019 fue de 35.588, superando ligeramente al del año anterior (34.655) y convirtiéndose así en el año más violento desde que se tienen registros públicos sobre homicidios.** Estos datos confirman una tendencia al alza en los últimos años en cuanto al número de homicidios, que se incrementaron de manera drástica desde que a finales de 2006 el ex presidente Felipe Calderón iniciara la llamada “guerra

contra el narcotráfico”. Según datos oficiales, desde diciembre de 2006 hasta abril de 2018 se habían registrado 250.547 homicidios en México, de modo que a finales de 2019 el número total de homicidios probablemente habría superado los 300.000. La tasa de homicidios en 2019 (27 asesinatos cada 100.000 habitantes) también superó a la que se había incluido en el Estudio Global de Homicidios 2019 de Naciones Unidas (24,8, con datos referentes al 2017). Según este informe México tendría la 12ª tasa de homicidios más alta del mundo (24,8, homicidios cada 100.000 habitantes cuando en tiempos de Calderón era inferior a 10), por encima de países como Filipinas o Afganistán. Cabe señalar que 10 de las 11 tasas de homicidios superiores a México (todas excepto Sudáfrica) eran de países de América Latina y el Caribe.

Los datos publicados por el Gobierno, que coinciden en general con los publicados por centros como la organización Causa en Común, también identificaron un incremento en **otras formas de violencia, como los feminicidios (1.006 en 2019, 912 el año anterior), secuestros (de 1.559 en 2018 a 1.614 en 2019), los actos de extorsión (8.523, un 29% más) o la trata de personas (un 12% más que el año anterior).** En números absolutos, los estados con mayor número de homicidios fueron Guanajuato, México, Michoacán, Jalisco y Baja California, mientras que en términos relativos lo fueron Colima (107 homicidios cada 100.000 habitantes), Baja California, Chihuahua, Morelos y Guanajuato. En algunos estados, el incremento de los homicidios respecto del año anterior fue muy notable, como en Sonora (un 57%), Hidalgo o Aguascalientes (un 32%). A nivel nacional, la tasa de homicidios se incrementó de manera notable en los primeros seis meses del año y se estabilizó (aunque sin disminuir) en el segundo semestre.

En enero de 2020 el Gobierno también hizo público un informe según el cual en México habían desaparecido 61.637 personas en la llamada “guerra contra el narcotráfico” desde el año 2006, una cifra significativamente superior a los aproximadamente 40.000 casos que el Ejecutivo había reconocido en 2018. Según el Gobierno, solamente en ese año unas 9.000 personas desaparecieron. El informe, elaborado a partir de datos recopilados por la Fiscalía, señala que la mayor parte de las desapariciones se concentraron en 10 estados, particularmente en los de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Durante el primer año de mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se descubrieron unas 800 fosas clandestinas con más de 1.120 cadáveres, lo que eleva la cifra a 3.631 desde el año 2006.

López Obrador inició el año señalando que su Plan Nacional de Paz y Seguridad se centraría en atajar las causas de la violencia, poniendo el acento en temas de educación, sanidad o empleo, y distanciándose del enfoque estrictamente securitario de sus antecesores en el cargo. Sin embargo, a medida que avanzó el año

el debate se centró en la creación y despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de unos 70.000 efectivos conformado principalmente por agentes del Ejército y la Marina, y dirigido por un ex general. Este hecho comportó numerosas críticas al Gobierno por parte de organizaciones de la sociedad civil que consideran que la creación de la Guardia Nacional comporta la militarización de la seguridad ciudadana en México. Tras varios debates y trámites parlamentarios para garantizar que las Fuerzas Armadas puedan prestar servicio en cuestiones de seguridad pública, la Guardia Nacional inició sus operaciones en mayo y fue desplegándose por todo el territorio a lo largo del año. A pesar de ello, durante 2019 se incrementaron los enfrentamientos tanto entre cárteles de la droga como entre estos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como prueba de ello, hasta el mes de noviembre, 382 policías habían fallecido en el marco de dichos enfrentamientos. Durante el año también se registraron numerosas masacres y episodios de violencia de alta intensidad, la mayoría vinculada a la rivalidad entre grupos por el control de mercados y rutas de narcotráfico, robo de combustible –una de las prioridades del Gobierno durante el año, que desplegó miles de efectivos militares para proteger oleoductos–, extorsión, secuestro o incluso el sector del aguacate. Los enfrentamientos estuvieron protagonizados por decenas de grupos, entre los que destacaron el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa. Algunos de los episodios que generaron mayor atención mediática durante el año fueron el asesinato de 19 personas en agosto por parte del CJNG en Uruapán como respuesta al despliegue de la Guardia Nacional en la región; el asesinato de 23 personas en Guanajuato entre el 7 y el 9 de junio por el control del mercado del petróleo; el asesinato de 28 personas a finales de agosto en el estado de Veracruz por una venganza entre grupos de crimen organizado; el asesinato de 13 policías por parte del CJNG el 14 de octubre en Michoacán; la muerte de 14 miembros de un cártel el 16 de octubre en el estado de Guerrero; o el asesinato de 26 personas en Ciudad Juárez a principios de noviembre por parte del grupo Mexicles, en un episodio de violencia en el que 35 vehículos fueron calcinados y se registraron varias amenazas de bombas. Sin embargo, uno de los episodios que tuvo mayores repercusiones políticas durante el año fue la detención por parte de la Guardia Nacional de Ovidio Guzmán –hijo del “Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa– a mediados de octubre en Culiacán, capital de Sinaloa. Después de que el Cártel de Sinaloa desplegara decenas de efectivos en la ciudad y que ocho personas fallecieran por los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad del Estado, el Gobierno decidió liberar a Ovidio Guzmán en prevención de una mayor escalada de la violencia. También cabe destacar que durante todo el año siguieron produciéndose ataques selectivos contra líderes sociales o periodistas.

En México se registraron 35.588 homicidios en 2019, convirtiéndose así en el año más violento desde que se tienen registros públicos sobre asesinatos

Nicaragua	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En abril de 2018, a raíz del intento por parte del Gobierno de reformar el sistema de la seguridad social, se iniciaron una serie de protestas en todo el país que sumieron al país en la peor crisis sociopolítica de las últimas décadas, en la que cientos de personas murieron, miles resultaron heridas y decenas de miles de personas abandonaron el país. Ante la preocupación nacional e internacional que generaron las protestas, la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y los enfrentamientos entre partidarios y opositores del Gobierno, en mayo se inició el llamado Diálogo Nacional –con la participación del Gobierno y varios sectores de la oposición y con la facilitación de la Iglesia Católica–, pero éste se vio interrumpido por las dinámicas políticas y de violencia de la crisis y no logró una salida negociada al conflicto.

A pesar de que disminuyó significativamente la intensidad de la violencia asociada a la crisis política y social que se inició en abril de 2018, durante todo el año se produjeron de manera prácticamente ininterrumpida protestas antigubernamentales, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad o colectivos pro-gubernamentales armados, así como constantes denuncias sobre violaciones masivas de los derechos humanos. Las cifras sobre el impacto y la magnitud de la crisis difieren sensiblemente según las fuentes. Así, a

principios de octubre la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos declaró que entre **abril de 2018 y finales de septiembre de 2019 habían muerto 651 personas, 4.922 habían resultado heridas, 516 habían sido secuestradas y 853 permanecían desaparecidas**. Si se comparan estos datos con los ofrecidos al finalizar el 2018, se puede inferir que según esta asociación en los nueve primeros meses del año 2019 habrían muerto unas 90 personas y que otras 344 habrían resultado heridas. Estas

cifras son algo superiores a las ofrecidas por otras organizaciones, como la Articulación de Movimientos Sociales (perteneciente a la plataforma opositora Unidad Nacional Azul y Blanco), según la cual entre enero y julio 24 personas opositoras habrían sido asesinadas, especialmente en el departamento de Jinotega. Sin embargo, estas cifras difieren significativamente de las ofrecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo según el cual, entre abril de 2018 y septiembre de 2019, 328 personas murieron, tres estaban desaparecidas, 130 permanecían encarceladas y más de 88.000 habían abandonado el país. Según la CIDH, la gran mayoría de dichas cifras se registraron en 2018. Sin embargo, el Gobierno reconocía solamente la muerte de 199 personas. Por otra parte, organizaciones y organismos de derechos humanos –como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Consejo

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional o varias organizaciones nicaragüenses—denunciaron en varios momentos del año violaciones continuas y masivas de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, detenciones arbitrarias, hostigamiento y agresiones a colectivos opositores, desapariciones, condenas desproporcionadas, falta de garantías procesales en los juicios, ataques a colectivos específicos, como estudiantes, periodistas o personas religiosas, etc. A finales de año, por ejemplo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos declaró haber recibido más de 3.000 denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas o alentadas por el Estado. En diciembre, 70 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, en la mayor parte de ocasiones el Gobierno consideró que tales informaciones y acusaciones eran sesgadas o estaban motivadas políticamente. Así, el Ejecutivo rechazó la resolución condenatoria del Consejo de Derechos Humanos emitida en abril o el informe presentado por parte del mismo organismo en el que presentaban 250 recomendaciones al Gobierno, del mismo modo que negó la entrada a personal de la OEA para tratar de conocer la situación del país de primera mano. Por su parte, el Gobierno negó buena parte de estas acusaciones y a su vez declaró estar recabando pruebas sobre los crímenes cometidos por determinados manifestantes durante las protestas que podría elevar al Tribunal Internacional de Justicia.

Bolivia atravesó la crisis política y social más intensa de los últimos tiempos, que se saldó con la muerte de 35 personas, centenares de personas heridas y el asilo político de Evo Morales

América del Sur

Bolivia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Aunque la renuncia y salida del país del presidente Evo Morales a finales de 2019 se precipitaron tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales celebradas ese mismo año, el país está inmerso en una situación de polarización política y social prácticamente desde que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se exiliara en EEUU en 2003 tras la represión de unas protestas antigubernamentales en las que más de 100 personas murieron. Tras un periodo de incertidumbre en el que dos presidentes asumieron el poder de forma interina, Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005, convirtiéndose en el primer mandatario indígena del país. Sin embargo, su acción de Gobierno, especialmente la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos o la aprobación de una nueva Constitución, se vio obstaculizada por la férrea oposición por parte de varios partidos políticos y de las regiones orientales del país que, lideradas por el

departamento de Santa Cruz, exigen mayor autonomía. En paralelo a lucha política entre el Gobierno y la oposición, en los últimos años Bolivia ha enfrentado uno de los mayores índices de conflictividad social de todo el continente, con movilizaciones de distinto signo vinculadas a demandas laborales sectoriales, a la actividad de las empresas extractivas o a los derechos de los pueblos indígenas. La crisis política se agudizó especialmente en 2016 después de que el oficialismo perdiera por estrecho margen de votos —la primera derrota electoral de Evo Morales— un referéndum de reforma constitucional para permitir o no a Evo Morales una nueva reelección y concurrir así a las elecciones presidenciales de 2019.

Bolivia atravesó la crisis política y social más intensa de los últimos tiempos, que se saldó con la muerte de 35 personas, centenares de personas heridas y el asilo político en México del presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera.

La crisis se inició poco después de que se hicieran públicos los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, en los que Morales aventajaba a su contrincante, Carlos Mesa, por un margen que obligaba a que hubiera segunda vuelta en los comicios. Sin embargo, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) detuviera el escrutinio durante 24 horas, la distancia que separaba a ambos contendientes se había ampliado significativamente y superaba, por escasas décimas, el margen necesario como para proclamar a Evo Morales vencedor de los comicios en primera vuelta. La OEA declaró

que las explicaciones del TSE sobre los motivos que habían llevado a interrumpir el escrutinio fueron confusas e insuficientes, mientras que tanto Carlos Mesa como la oposición en su conjunto y algunos gobiernos denunciaron fraude electoral. La OEA y la UE pidieron una repetición de los comicios. Las protestas masivas y los enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno se iniciaron en varias provincias del país al día siguiente de las elecciones, incluso antes de que el TSE diera como vencedor oficial de las elecciones a Evo Morales, el día 24 de octubre. Las protestas, enfrentamientos, disturbios, quema de edificios públicos, cortes de carretera y bloqueo de ciudades se prolongaron y se intensificaron en las semanas siguientes, especialmente en departamentos como Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija o Sucre, con un saldo final de algunas personas muertas y muchas otras heridas. La OEA inició una auditoría del proceso electoral y sus resultados el 31 de octubre y presentó su informe preliminar el día 10 de noviembre, identificando graves irregularidades e instando al Gobierno a repetir las elecciones. Morales aceptó tal recomendación, pero a las pocas horas, tras la presión por parte del jefe de las Fuerzas Armadas, se exilió en México junto con su vicepresidente. Dos días más tarde, en ausencia de los diputados oficialistas del MAS, la Asamblea Legislativa designó a la hasta entonces vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, como presidenta interina del país. Esta declaró su intención de convocar nuevas elecciones y de pacificar el país. Tras esta decisión y las declaraciones de Evo Morales desde México

calificando de golpe de Estado su salida del poder, se iniciaron movilizaciones masivas por parte de seguidores del antiguo presidente en varias partes del país. Al día siguiente de que Añez aprobara un decreto por el que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en la contención de las protestas, nueve manifestantes murieron en Cochabamba y otros 10 en El Alto, todos ellos por heridas de bala. Finalmente, ante las críticas a tal decreto y la magnitud que estaban tomando las protestas, el decreto fue derogado a finales de noviembre. **La Defensoría del Pueblo señaló que desde el inicio de la crisis, pero en especial tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, habían muerto 35 personas y otros varios centenares habían resultado heridas.** En el plano político, a finales de noviembre el Parlamento aprobó una ley –con el apoyo del partido del anterior Gobierno, el MAS– que anulaba las elecciones del mes de octubre, estipulaba un periodo de 120 días para la convocatoria de nuevos comicios y conformaba una nueva autoridad electoral para tal fin. En paralelo, el nuevo Gobierno interino presentó una querrela criminal contra Morales ante la Fiscalía por sedición y terrorismo por sus presuntos mensajes de incitación a la violencia. Además, también trascendió que el nuevo Ejecutivo tendría la intención de acusar a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad por incitar a colectivos sindicales a cercar determinadas ciudades y evitar la llegada de alimentos. Por su parte, Morales también acusó de tales crímenes al Gobierno interino por incitar a las Fuerzas Armadas a reprimir las protestas de manera violenta. A principios de diciembre la OEA presentó un informe más detallado sobre lo que consideró irregularidades y manipulaciones graves en el proceso de recuento de votos en las elecciones de octubre, concluyendo que un análisis pormenorizado de la evolución del escrutinio hacía estadísticamente improbable la victoria de Morales en la primera vuelta.

Chile	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Si bien el detonante de las masivas movilizaciones y numerosos episodios de violencia que se registraron en 2019 fue el incremento del precio del metro, tanto analistas como entidades que convocaron protestas sostienen que las causas reales del descontento social que existe en el país tienen que ver con el modelo político y económico que ha regido en el país en las últimas décadas. Algunos de los aspectos de la gobernabilidad política y económica del país que fueron objeto de crítica durante las movilizaciones fueron la precariedad del sistema de salud o de educación, la creciente privatización del sistema de pensiones, del agua o de otros sectores de la economía, el incremento del precio de la vivienda, los medicamentos o el transporte público, la creciente percepción de la corrupción o el aumento de la desigualdad y las tasas de pobreza.

Chile experimentó las protestas más virulentas y masivas de las últimas décadas, con un saldo final de 26 personas fallecidas, 12.600 heridas y miles de personas detenidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas cifras difieren ligeramente de las ofrecidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que reportó el mismo número de víctimas mortales, unas 3.400 personas civiles hospitalizadas, más de 220 personas con traumas oculares severos y más 8.800 personas detenidas. Todos los informes publicados por organismos y organizaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas) identificaron graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de seguridad del Estado. A modo de ejemplo, la CIDH denunció violencia sexual, tortura y otros tratos degradantes y humillantes en el marco de la detención de manifestantes. De igual modo, el INDH declaró a mediados de noviembre tener conocimiento sobre 346 acciones judiciales, de las que 246 estaban vinculadas a denuncias de tortura y 58 de violencia sexual. A finales de octubre, la Fiscalía anunció la apertura de 840 investigaciones por presuntas violaciones de los derechos humanos. De entre estas, 597 estaban dirigidas contra Carabineros, 45 contra el Ejército, 16 contra la Policía de investigaciones y ocho contra la Armada.

Las protestas se iniciaron después de que el Gobierno anunciara, el 6 de octubre, un incremento en la tarifa del sistema de transporte público, que propició que centenares de personas, principalmente estudiantes, se organizaran para evadir el pago del billete del metro de la capital, Santiago. Dicha medida cada vez fue más secundada y derivó en los días siguientes en la paralización del sistema de metro y en enfrentamientos entre Policía y manifestantes. El 18 de octubre se expandieron las protestas y los disturbios a varias partes del país y el Gobierno impuso el Estado de emergencia, inicialmente en Santiago y posteriormente en 15 de las 16 capitales regionales y dispuso el despliegue de militares para controlar las protestas. En ciudades como Santiago, Valparaíso, o Coquimbo, además, se decretó el toque de queda. **Si bien al principio las protestas estuvieron motivadas por el incremento en el precio del transporte público, a medida que fueron pasando los días estas se fueron haciendo más multitudinarias y transversales, y el foco de las mismas se amplió para incluir el elevado coste de bienes y servicios, las bajas pensiones, la política económica y social del Gobierno de Sebastián Piñera o la crítica a la clase política y a las instituciones de representación democrática.** A finales de octubre, más de un millón de personas se concentró en la capital en protesta por todos estos temas y también contra la represión por parte del Estado, pues para entonces ya habían muerto 20 personas y varios centenares habían resultado heridas en el marco de las protestas y los disturbios que se registraron en varios puntos del país. A pesar de la retirada del estado de emergencia el 27 de octubre, de la destitución de

todo el Gobierno y de la presentación de un paquete de medidas económicas (pensiones, salud o salarios), siguieron registrándose importantes movilizaciones en el mes de noviembre. A mediados de mes, los poderes legislativo y ejecutivo anunciaron un acuerdo para llevar a cabo un plebiscito, en abril de 2020, sobre la conveniencia o no de elaborar una nueva Constitución. A pesar de que los niveles de movilización y de violencia se redujeron significativamente a partir del anuncio de dichas medidas, hasta finales de año continuaron registrándose importantes movilizaciones, cortes de carretera y disturbios de distinta intensidad en varias partes del país, provocando la muerte de como mínimo tres personas.

Colombia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Las movilizaciones multitudinarias que se registraron en 2019 están estrechamente vinculadas con el rechazo de una parte de la ciudadanía a la acción de gobierno del presidente Iván Duque, pero también a cuestiones más estructurales del sistema político y el modelo económico que ha regido en el país en las últimas décadas, como las críticas a la corrupción o impunidad judicial o la creciente percepción de que los altos niveles de crecimiento económico que ha experimentado el país no han supuesto una reducción de la desigualdad. Aunque sin alcanzar la magnitud de las protestas del 2019, en los últimos años se habían registrado algunas movilizaciones sectoriales significativas, como las masivas manifestaciones en contra de un proyecto de reforma de la educación superior en 2011 o bien el llamado Paro Nacional Agrario en 2013. Ya bajo mandato de Iván Duque se incrementaron los indicios de malestar social, como así lo evidenció la celebración de una consulta popular contra la corrupción en agosto de 2018; el llamado Paro Nacional Universitario entre octubre y diciembre de 2018, en el que también se registraron algunos enfrentamientos: la denominada “Marcha de las linternas” en enero de 2019, en la que se exigió la renuncia del fiscal general del Estado por varios casos de corrupción y por la percepción de impunidad respecto del asesinato de líderes sociales, o las recurrentes críticas a Duque por la ralentización de la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC.

El país vivió las protestas antigubernamentales más importantes de las últimas décadas, con un balance aproximado al finalizar el año de seis personas fallecidas, alrededor de 800 personas heridas –la mitad policías y la mitad civiles– y más de 250 personas detenidas. Las protestas, que se produjeron en varias partes del país, se iniciaron a finales de noviembre y al finalizar el año se mantenían muy activas. Los principales motivos de las movilizaciones fueron el rechazo a la política económica del Gobierno y, más en particular, a varias leyes de reforma tributaria, laboral y del sistema de pensiones. A medida que avanzaron

las manifestaciones, la agenda de la oposición se fue ampliando, tal y como ejemplifica el documento con trece demandas que el llamado Comité Nacional del Paro entregó al presidente, Iván Duque, en vistas al diálogo que este inició con varios actores políticos y sociales para contener el alcance de las protestas. Algunas de estas demandas incluyen el pleno cumplimiento del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, la tramitación de leyes anticorrupción, la implementación de compromisos adquiridos por el actual Gobierno y el anterior con diversos colectivos (estudiantes, indígenas, campesinos, etc.) o la depuración de la Policía y la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Las protestas se iniciaron el 21 de noviembre en varias ciudades colombianas, e incluyeron cortes de carreteras, afectación de mobiliario urbano y numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes. En los primeros días de las protestas, el Gobierno ordenó el cierre de pasos fronterizos con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, mientras que el alcalde de Cali decretó el toque de queda para prevenir lo que consideraba actos vandálicos por parte de los manifestantes. Además, Iván Duque acusó a determinados líderes de la oposición de orquestar y capitalizar las movilizaciones y criticó que los manifestantes quisieron lograr objetivos políticos haciendo uso de la violencia. Sin embargo, a medida que las protestas se fueron consolidando y expandiendo, el Gobierno ofreció un diálogo a las principales organizaciones sociales y sindicales del país. Por su parte, tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch criticaron el excesivo uso de la fuerza durante las protestas y exigieron una investigación para depurar responsabilidades.

Ecuador	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Si bien la crisis desatada a finales de 2019 está vinculada al acuerdo entre el Gobierno de Lenin Moreno y el FMI para reducir el déficit público a través de un decreto que recortaba drásticamente el gasto público e incrementaba la recaudación fiscal, en las décadas anteriores el país ya había registrado numerosas protestas y episodios de polarización política y social. De hecho, desde finales de los años noventa, ha habido tres presidentes (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Guitérrez) que no han finalizado sus mandatos por razones políticas. Durante los mandatos del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) también se produjeron importantes protestas vinculadas a la gestión gubernamental, a la aprobación de la nueva Constitución de 2008 y a su decisión de concurrir a un tercer mandato (el segundo bajo la nueva Carta Magna). Además, tanto en el mandato de Correa como en el de presidentes anteriores se produjeron movilizaciones recurrentes y brotes de violencia esporádicos vinculados al impacto que estaban teniendo determinados proyectos de minería y de exploración de petróleo en el Amazonas y otras partes del país.

Ecuador vivió una de las movilizaciones más virulentas de los últimos años después de que decenas de miles de personas en todo el país llevaran a cabo protestas de distinto signo en la primera quincena de octubre, tras la aprobación de un decreto que, entre otras cuestiones, preveía la retirada de una subvención a los combustibles. Según un informe hecho público por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, **nueve personas murieron, más de 1.500 resultaron heridas y otras 1.382 fueron detenidas.** Por su parte la Defensoría del Pueblo cuantificó en 11 las víctimas mortales, en 1.340 las personas heridas y en 1.192 las personas detenidas. El 1 de octubre, el presidente, Lenin Moreno, anunció un decreto que preveía varias medidas tributarias y laborales, entre las que se incluía la eliminación de un subsidio a los combustibles que llevaba vigente más de 40 años y que provocó incrementos en el precio de la gasolina de más del 120%. Dicho decreto formaba parte de un acuerdo con el FMI alcanzado en marzo que preveía la reducción del déficit fiscal –a través del recorte en el gasto público y el aumento de la recaudación por parte del Estado– para poder acceder a créditos por valor de más de 4.200 millones de dólares. Según algunos analistas, el acuerdo con el FMI preveía alterar o eliminar programas y políticas que en los últimos años habían propiciado reducciones muy significativas de la pobreza y la extrema pobreza. El anuncio de Moreno provocó una huelga de transportistas y movilizaciones y cortes de carreteras en todo el país, lideradas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y su movimiento político vinculado, Pachakutik. El 3 de octubre, ante el estallido en Quito de numerosos disturbios y episodios de violencia, incluyendo pillaje y enfrentamientos entre manifestantes y Policía, el Gobierno decretó el estado de excepción, y días más tarde ordenó lo que la oposición calificó de toque de queda (el Gobierno, sin embargo, señaló que solamente había restringido la movilidad nocturna alrededor de edificios gubernamentales estratégicos y bases militares y policiales). Las manifestaciones se incrementaron en los días siguientes, de modo que, **ante la movilización de miles de personas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y el Palacio Presidencial, el Ejecutivo trasladó la capital de Quito a Guayaquil.** El Gobierno acusó al ex presidente Rafael Correa y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de orquestar las protestas con el objetivo de perpetrar un golpe de Estado, pero ambos negaron tales acusaciones.

Ante la intensificación de las protestas y la generalización de los cortes de carreteras (que afectaron a la Carretera Panamericana y a 17 de las 24 provincias), Moreno regresó a Quito el 9 de octubre y ofreció un diálogo a la oposición bajo los auspicios de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Ecuador. Aunque no trascendió el contenido de las conversaciones, el 14 de octubre el Gobierno retiró el decreto 883 (conocido popularmente como el Paquetazo), lo cual redujo sustancialmente la intensidad de las movilizaciones. El 23 de octubre la CONAIE anunció que abandonaba las conversaciones

con el Gobierno por considerar que este proseguía su estrategia de represión y hostigamiento contra líderes indígenas. Cabe destacar el inicio de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente de la CONAIE por mencionar en un acto público la creación de un ejército propio de movimientos indígenas. Ante las numerosas denuncias por represión y por ataques a la prensa (se registraron más de 100 agresiones a periodistas durante las dos primeras semanas de octubre), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita al país entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre. A finales de mes, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hizo público un informe en el que acusaba a las fuerzas de seguridad del Estado de utilizar la represión de manera innecesaria y desproporcionada. A principios de diciembre, sin embargo, el Gobierno criticó tal informe por considerar que reflejaba solamente la opinión de la oposición y que obviaba la intensidad, la cantidad y grado de coordinación y premeditación de los episodios de violencia protagonizados por los manifestantes. El Gobierno acusó a la CONAIE de utilizar tácticas de guerrilla urbana, declarando que en el marco de las protestas 435 policías fueron heridos, 108 vehículos afectados o 45 ambulancias atacadas. Finalmente, cabe destacar que a finales de noviembre la Defensoría del Pueblo anunció la creación de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia con el objetivo de evaluar las denuncias presentadas y hacer seguimiento de los casos de vulneración de los derechos humanos.

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

La crisis política, social y humanitaria que padece Venezuela se agudizó notablemente durante el año

e incluso vivió momentos de riesgo de confrontación militar después de que a principios de año el recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado del país y decenas de países (56 al finalizar el año, principalmente de América y Europa) le reconocieran. La autoproclamación de Guaidó se produjo pocos días después de la toma de posesión del cargo para un segundo mandato de seis años por parte de Nicolás Maduro, que no fue reconocida por numerosos gobiernos por considerar que emanaba de unas elecciones presidenciales –en mayo de 2018– que no cumplieron con los estándares internacionales. Guaidó, que había sido nombrado presidente de la Asamblea Nacional cinco días antes de la jura de Maduro, citó el artículo 233 de la Constitución. **EEUU y la mayor parte de países latinoamericanos reconocieron a Guaidó, y el Parlamento Europeo también votó a favor de reconocerlo como presidente interino. En cambio, países como China, Turquía o Rusia no lo hicieron.** En los días posteriores a la autoproclamación de Guaidó unas 40 personas murieron en el marco de las manifestaciones de cientos de miles de personas en todo el país. Posteriormente, en febrero, varias personas murieron y otros varios centenares resultaron heridos en los enfrentamientos que se produjeron con motivo de los intentos de EEUU y la oposición de hacer entrar al país convoyes de ayuda humanitaria, pero el Gobierno cerró todos los accesos fronterizos con Colombia y Brasil alegando que se trataba de una provocación y denunciando una posible invasión del país por parte de EEUU. Según reconoció el propio Ejecutivo, unos 400 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente de la Guardia Nacional, desertaron y cruzaron la frontera con Colombia. Sin embargo, la mayor parte de las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales al Gobierno. Según organizaciones de derechos humanos, en los disturbios que se produjeron a finales de febrero se reportaron ejecuciones sumarias y numerosos ataques contra manifestantes por parte de grupos paramilitares progubernamentales. **A finales de abril, Guaidó instó a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el Gobierno y derrocar a Maduro.** Aunque se registraron nuevas desertaciones, el Gobierno mantuvo el control de la situación y calificó de golpe de Estado la acción de la oposición. En los días siguientes al llamamiento de Guaidó se incrementaron los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Maduro. Por su parte, el Gobierno recrudesció la represión contra determinados sectores de la oposición. Durante el mes de mayo, 15 parlamentarios opositores fueron arrestados, abandonaron el país o se refugiaron en embajadas de diversos países. Durante el resto del año la oposición continuó denunciando represión policial y militar, violaciones de los derechos humanos y hostigamiento contra políticos opositores. Según varios medios, tanto este último fenómeno como el intento de sobornos a

La crisis que padece Venezuela se agudizó e incluso vivió momentos de riesgo de confrontación militar después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente encargado del país y decenas de países le reconocieran

políticos opositores arreció a finales de año en vistas a la sesión de la Asamblea Nacional de principios de enero de 2020 en la que se debía votar (como finalmente acabó sucediendo) la prolongación del mandato presidencial de Guaidó durante un año más. Durante el segundo trimestre también se mantuvo la tensión y la retórica belicista entre el Gobierno de Maduro y EEUU. Sin embargo, a finales de 2019 el Congreso de los EEUU aprobó una ley en la que descartaba cualquier tipo de acción militar en el país y en cambio abogaba decididamente por las negociaciones políticas entre Maduro y la oposición. La tensión política entre Venezuela y los países vecinos de Brasil, Colombia y Perú también se incrementó a finales de año después de que Maduro acusara a dichos países de apoyar un asalto a un cuartel militar en el Estado de Bolívar en el que fueron sustraídos más de 100 fusiles y cuantiosa munición y en el que se tomaron varios rehenes e incluso una persona falleció. Según el Gobierno, tal acción militar tenía motivaciones políticas y pretendía asaltar unidades militares en Táchira, Zulia, Barinas, Aragua, Distrito Capital y Sucre, aunque algunos medios de comunicación desmintieron tal versión.

La crisis política y social transcurrió en paralelo a un claro deterioro de la situación humanitaria del país. En octubre, Naciones Unidas declaró que **desde el año 2015 más de 4,5 millones de personas habían abandonado el país, aunque el número real era muy superior porque esta cifra no incluía a las personas que habían huido del país por cruces fronterizos ilegales.** En abril, Naciones Unidas alertó de que siete millones de personas necesitaban asistencia, aunque algunas organizaciones locales señalan que dicha cifra podría ser muy superior. Algunas fuentes advirtieron sobre el desabastecimiento crónico de productos, sobre el riesgo de colapso del sistema sanitario o bien sobre los cortes de luz, que fueron muy frecuentes durante todo el año. A mediados de abril, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Federación Internacional de la Cruz Roja para la distribución masiva de ayuda de emergencia. En cuanto a la situación de derechos humanos, durante todo el año se registraron denuncias sobre violaciones masivas de derechos humanos. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó enviar una misión al país para investigar las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Finalmente, cabe destacar que, según el Estudio Global de Homicidios 2019 de Naciones Unidas, hecho público a mediados de año, y que recoge y analiza datos del 2017, Venezuela tuvo una tasa de 57 homicidios cada 100.000 habitantes –la segunda en América Latina, por detrás de El Salvador, con 62–, siendo claramente el país latinoamericano en el que esta se ha incrementado más en las últimas décadas, pasando de 13 en 1991 a 57 en 2017. La situación en la capital, Caracas, es especialmente alarmante, pues tuvo una tasa de homicidios de 122.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), entre 1999 y 2018 se registraron más de 333.000 homicidios, y la tasa de impunidad es del 92%. Según este observatorio (la única fuente disponible ante la inexistencia de datos oficiales al respecto), en 2018 se registraron 23.047 homicidios, lo cual situó a Venezuela como el país con una mayor tasa de homicidios de América Latina (81,4 cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 51 registrados en El Salvador). En cuanto al número de protestas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló que en los seis primeros meses de 2019 se habían registrado 10.477 protestas callejeras –fundamentalmente, reivindicaciones políticas y sociales–, un 97% más que en el mismo periodo del año anterior.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Tayikistán	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:

La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del país) contra las fuerzas gubernamentales heredadas del régimen soviético (norte y sur). El acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la presencia de algunos señores de la guerra y ex combatientes opositores no desmovilizados en algunas zonas del país, el autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, las tensiones con sus vecinas Uzbekistán y Kirguistán, la inestabilidad asociada a su frontera con Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados yihadistas.

Se mantuvo la tensión en el país en torno a varios ejes, con nuevos incidentes violentos reivindicados por ISIS, así como un incremento de la tensión con choques violentos en zonas de la frontera con Kirguistán en el valle de Ferghana. Por una parte, Tayikistán se vio afectado en 2019 por diversos episodios de violencia que las autoridades atribuyeron a ISIS y que el grupo reivindicó, si bien algunos análisis subrayaron la escasa información sobre los mismos, en un contexto de restricciones a la libertad de prensa, lo que dificultaba

el contraste sobre la autoría de los hechos. Entre los incidentes, en mayo **unos disturbios en una prisión de máxima seguridad en el distrito de Vahdat (junto a la capital) resultaron en la muerte de 29 presos y tres guardias de seguridad. ISIS reivindicó en junio los hechos**, afirmando que los atacantes eran miembros del grupo. Según el Ministerio de Interior de Tayikistán, 17 de los 29 fallecidos eran miembros de ISIS y otros tres eran integrantes del Partido del Renacimiento Islámico (PRI) –actor partícipe del conflicto armado de los años noventa y del acuerdo de paz de 1997, y partido político objeto de represión institucional desde 2015, a través de su ilegalización en 2015 y su designación como organización terrorista en 2016. El Ministerio de Justicia afirmó que entre los instigadores de los disturbios se incluía Gulmurod Halimov, hijo de Behruz Gulmurod, ex coronel de operaciones especiales de Tayikistán y comandante de la Policía que en 2015 desertó y se unió a ISIS pasando a ser jefe militar de la organización en 2016. Según el Gobierno, otros presos involucrados pertenecían a grupos ilegalizados como Jamaat Ansarullah y el Movimiento Islámico de Turkestán. Los disturbios letales estuvieron precedidos de otros disturbios en noviembre de 2018 en otra cárcel de alta seguridad en Khujand (norte), reivindicados también por ISIS, con 25 presos y dos guardias de seguridad muertos –cifra que algunas fuentes elevaban al medio centenar. Los disturbios de mayo llevaron a algunos activistas a cuestionar de nuevo la situación de las cárceles en el país, con graves condiciones de sobrepoblación y denuncias de torturas, sentencias contra personas sin vínculos con violencia, así como de la necesidad de programas de rehabilitación para personas condenadas con cargos relacionados con terrorismo y extremismo.

La tensión se incrementó de nuevo en noviembre, cuando se produjo un ataque contra un puesto fronterizo cerca de la frontera con Uzbekistán. Según las autoridades, una veintena de combatientes de ISIS llevaron a cabo el ataque, y dieron un balance de 15 atacantes, un policía y un guardia fronterizo fallecidos, así como de otros cinco combatientes detenidos. Asimismo, las autoridades afirmaron que el grupo habría cruzado desde Afganistán. ISIS reivindicó el ataque y cifró en 10 los guardias fronterizos muertos. La zona estuvo bloqueada al acceso a prensa. Algunos análisis señalaron los interrogantes en torno a lo sucedido. Por otra parte, el Gobierno anunció en abril el retorno de más de 80 menores y adolescentes desde Iraq, hijos de madres encarceladas por las autoridades iraquíes acusadas de pertenecer a ISIS. Según el Gobierno tayiko, unas 1.900 personas de nacionalidad tayika se habían unido a ISIS en Siria e Iraq, y algunas fuentes cifraban en un centenar los combatientes de Tayikistán actualmente en Afganistán en diversos grupos armados. Por otra parte, aumentó la tensión en el Valle de Ferghana –área entre Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, con numerosos enclaves y tramos fronterizos en disputa. Durante el año se produjeron choques violentos intercomunitarios entre población de Tayikistán y Kirguistán, con participación

de guardias fronterizos de ambos países,²⁸ en torno a Vorukh –enclave de Tayikistán en Kirguistán–, la región kirguiza de Batken que lo rodea, y en torno a los distritos de Bobojon Ghafurov (Tayikistán) y Leylek (Kirguistán). La decena de choques violentos durante el año causaron diversas víctimas mortales y varias decenas de heridos. Tras los choques de julio, que llevaron a Kirguistán a evacuar a unos 600 residentes de la región de Batken, los presidentes de ambos países se reunieron en la zona en disputa. En los choques de septiembre, Tayikistán denunció el despliegue de unas 300 tropas kirguizas. Algunos análisis alertaron de que el uso de armas por parte de población civil en los choques suponía un salto cualitativo con respecto a choques fronterizos intercomunitarios en años anteriores.

Asia Meridional

Bangladesh	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)

Síntesis:

Desde la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971 tras su secesión de Pakistán en un conflicto armado que ocasionó tres millones de muertes, el país ha vivido una complicada situación política. Las elecciones de 1991 dieron paso a la democracia tras una sucesión de gobiernos militares autoritarios que dominaron el país desde la independencia. Los dos principales partidos, BNP y AL, se han sucedido desde entonces en el poder después de diferentes elecciones, siempre contestadas por la formación perdedora, dando lugar a gobiernos que no han dado respuesta a los principales retos del país como la pobreza, la corrupción o la baja calidad de la democracia, y que han respondido a intereses partidistas. En 2008, la AL accedió al poder después de un periodo de dos años dominado por un Gobierno interino militar que trató de poner fin sin éxito a la crisis política que había sumido al país en una situación de violencia en los meses previos y que llevó incluso al encarcelamiento de las líderes de los dos partidos. La convocatoria de elecciones para 2014 en un contexto político muy frágil y con una fuerte oposición del BNP a las reformas emprendidas por la AL, como la eliminación del Gobierno interino para supervisar los procesos electorales, derivaron en una grave y violenta crisis política durante el año 2013. En paralelo, el establecimiento en 2010 de un Tribunal para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971, instrumentalizado por el Ejecutivo para acabar con la oposición islamista, en particular el partido Jamaat-e-Islami, agravó la situación en el país.

Se mantuvo la tensión en el país en torno a diferentes cuestiones, aunque disminuyeron los niveles de violencia

con respecto a años anteriores. El primero de los focos de tensión fueron las elecciones. Tras la proclamación de los resultados de los comicios parlamentarios celebrados el 30 de diciembre de 2018 que otorgaron la victoria al partido gobernante Awami League, con 288 de 300 escaños, se sucedieron las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición, sobre todo por el partido BNP. Además, actores internacionales como la UE, EEUU y el Reino Unido expresaron su preocupación por el posible fraude electoral. En marzo se celebraron elecciones locales en un clima de violencia. Al menos siete personas murieron en episodios de violencia vinculados al proceso electoral. Además, las elecciones fueron boicoteadas por el principal partido de la oposición, el BNP, y se registraron enfrentamientos entre integrantes de esta fuerza política y del partido en el Gobierno. Las diferentes elecciones dejaron en manos del partido gubernamental el control casi total de las diferentes instituciones del país. En paralelo, persistían las tensiones entre el Gobierno y el BNP por el encarcelamiento de la dirigente opositora y antigua primera ministra, Khaleda Zia, que tuvo que ser trasladada de prisión a un hospital y cuya excarcelación continuó exigiendo el BNP. El segundo de los focos de tensión fue la estrategia de contrainsurgencia impulsada por el Gobierno, que se intensificó tras los atentados en Sri Lanka. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo numerosos arrestos durante el año de personas acusadas de pertenecer a diferentes organizaciones armadas de carácter islamista y se registraron algunos enfrentamientos y acciones de grupos armados. El Gobierno señaló que la presencia de ISIS no era significativa en el país, pero esta organización armada difundió en varias ocasiones mensajes y vídeos de adhesión de insurgentes bangladeshíes. Cabe señalar que la situación política regional también tuvo impactos en la crisis bangladeshí. En primer lugar, la crisis humanitaria de la población refugiada rohingya en Bangladesh, procedente de Myanmar, continuó sin resolverse. Fracasaron los intentos de retorno de esta población a Myanmar, y crecieron de manera preocupante los discursos que trataron de vincular a la comunidad rohingya con la insurgencia islamista. Por otra parte, la aprobación en la India de legislación que daba lugar a que población procedente de Bangladesh y que profesara religiones diferentes a la musulmana pudieran acceder a la nacionalidad india deterioró las relaciones entre ambos países.²⁹

India	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

28. Véase el resumen sobre Kirguistán en este capítulo.

29. Véase el resumen sobre India e India (Assam) en este capítulo.

Síntesis:

En mayo de 2014, el partido nacionalista hindú BJP ganó las elecciones y asumió el Gobierno del país, encabezado por Narendra Modi como primer ministro. En 2019, Modi renovó su victoria electoral. Desde entonces, el Ejecutivo ha promovido un programa de gobierno nacionalista hindú acompañado de un discurso, medidas y políticas discriminatorias contra la población musulmana. Las tensiones entre hindúes y musulmanes en la India se habían acrecentado en las décadas previas, especialmente a raíz de los graves episodios de violencia en Gujarat en el año 2000, cuando tras el incendio de un tren en el que viajaban peregrinos hindúes y en el que murieron 58 personas, se desataron violentos disturbios en los que murieron cerca de 800 musulmanes y más de 250 hindúes, aunque organizaciones de la sociedad civil sostienen que las cifras fueron mucho mayores. Modi, ministro jefe de Gujarat en ese momento y miembro de la organización ultranacionalista hindú RSS, fue acusado de connivencia e incluso incitación a la violencia contra la población musulmana. En 2019, el Gobierno de Modi aprobó varias medidas consideradas muy perjudiciales para la comunidad musulmana, como la retirada del estatus especial de autonomía y la condición de estado a Jammu y Cachemira; el Registro Nacional de Ciudadanía en Assam, que excluía de la ciudadanía india a dos millones de musulmanes; y la aprobación de la Ley de Ciudadanía, excluyendo a la población musulmana procedente de Afganistán, Pakistán y Bangladesh de la posibilidad de acceder a la ciudadanía india.

India fue escenario de intensas protestas sociales en el mes de diciembre tras la aprobación por parte del parlamento de la Ley de Ciudadanía, que generó enorme controversia social al establecer que podían acceder a la nacionalidad india la población inmigrada al país procedente de Afganistán, Pakistán y Bangladesh que fueran hindúes, cristianas, sijs, budistas, jainitas o parsis, excluyendo a la población musulmana. Las protestas, en las que participaron centenares de miles de personas, se iniciaron en el estado de Assam, en el nordeste del país, y se expandieron a otros estados.³⁰ Las protestas estuvieron protagonizadas por sectores de la sociedad civil que apuntaron al carácter discriminatorio de la legislación contra la población musulmana, señalando que se trataba de una violación al carácter secular de la Constitución india. Por otra parte, la ley también generó el rechazo de amplios sectores de la población de Assam, que se oponen a la nacionalización de la población inmigrante procedente de Bangladesh al señalar que pone en grave peligro el frágil equilibrio demográfico del nordeste de la India. Las protestas fueron especialmente intensas en el estado de Uttar Pradesh —el 20% de la población de este estado es musulmana—, donde **murieron al menos 19 personas en enfrentamientos con la Policía.** Otras cinco personas murieron en Assam tras ser tiroteadas por las fuerzas de seguridad en diferentes manifestaciones. Además, se produjeron miles de detenciones. Las protestas se acrecentaron después de que la Policía llevara a cabo una violenta operación contra los estudiantes que se manifestaban

Al menos cinco personas murieron en el estado indio de Assam en las protestas por la Ley de Ciudadanía, que se expandieron al resto del país

en la Universidad Jamia Millia Islamia en Delhi, deteniendo a más de 100 personas, y la Universidad Aligarh Muslim University en Uttar Pradesh, donde también se produjeron decenas de detenciones. El Gobierno impuso el estado de emergencia en amplias zonas de la capital. Además, se anunció que se llevaría a cabo un Registro Nacional de Ciudadanía, de manera similar al elaborado en Assam, que generó enormes críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos, señalando las graves discriminaciones que había ocasionado contra la población musulmana.

India (Assam)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB-IKS, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT

Síntesis:

El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de Assam de la colonización india y establecer un Estado soberano. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la violencia y que se interrumpirá en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen bodo, como el NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria asamesa. Desde 2011 se ha producido una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos armados han entregado las armas o iniciado conversaciones con el Gobierno.

Se redujo notablemente la actividad armada de los grupos insurgentes en Assam y a finales de año se especulaba con la firma de un acuerdo entre Gobierno y gran parte de las organizaciones insurgentes que aún continuaban activas en el estado.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el centro de investigación South Asia Terrorism Portal, dos insurgentes murieron durante 2019 como consecuencia del conflicto. Uno de los hechos más graves de violencia se produjo en mayo, cuando la explosión de una granada —en un atentado reivindicado por el grupo armado ULFA (I)— ocasionó heridas a seis personas. Posteriormente, la dirigencia del grupo armado señaló que se comprometía a no utilizar bombas en espacios públicos, después de que en el atentado resultaran heridos varios civiles. Además, durante el año varios dirigentes insurgentes se entregaron

30. Véase el resumen sobre India (Assam) en este capítulo.

a la Policía y se especuló con que el comandante en jefe, Paresh Baruah, había perdido contacto con los integrantes del grupo. La situación se habría agravado para el grupo armado tras un operativo lanzado por las Fuerzas Armadas de Myanmar contra el grupo armado naga NSCN-K en Taga, una zona en la que otros grupos armados operativos en la India también tienen sus bases, entre ellos el ULFA(I) y el NDFB-S. En esta operación habría muerto el dirigente del ULFA-I Jyotirmoy Asom. A finales de año, el Gobierno indio extendió la ilegalización del ULFA (incluyendo todas sus facciones) por un plazo de cinco años.

En paralelo, **se agravó la crisis por la aprobación en diciembre de la Ley de Ciudadanía** que contemplaba otorgar la ciudadanía india a las personas inmigrantes procedentes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán que fueran hindús, cristianas, sijs, budistas, jainitas o parsis, excluyendo a la población musulmana. **La aprobación de esta legislación derivó en intensas protestas sociales que posteriormente se expandieron al resto del país.**³¹ Assam ya había sido escenario de numerosas protestas en torno a la cuestión de la ciudadanía, con importantes tensiones sociales entre población autóctona de Assam y población originaria de Bangladesh, debido al frágil equilibrio demográfico del estado y el temor a la nacionalización de inmigrantes procedentes de Bangladesh. A esto se sumaron las protestas de las organizaciones de derechos humanos y población musulmana que señalaron que se trataba de una legislación claramente discriminatoria e islamófoba. De hecho, dos millones de personas quedaron excluidas del Registro Nacional de Ciudadanía después de que en los últimos cuatro años 33 millones de personas hubieran tenido que probar su nacionalidad para ser incluidos en el registro. Esto dejó fuera a muchas personas carentes de los documentos necesarios para realizar los trámites burocráticos, que con la nueva legislación podría demandar la nacionalidad. Organizaciones assamesas señalaron que el Gobierno indio estaba instrumentalizando la cuestión religiosa, frente a las demandas de prohibición de la inmigración ilegal por parte de algunos sectores de la sociedad assamesa, independientemente de la religión profesada por la población inmigrante. **Al menos cinco personas murieron tiroteadas por la Policía en las manifestaciones de protesta a pesar del toque de queda impuesto por el Gobierno y centenares fueron detenidas.**

La violencia en Jammu en Cachemira llevó a un incremento de la tensión entre India y Pakistán acrecentando el temor a un nuevo conflicto armado entre los dos países

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera *de facto* entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se trasladó al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera de facto que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que estos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

Las relaciones entre India y Pakistán se deterioraron gravemente durante el año como consecuencia de diferentes episodios de violencia en el estado indio de Jammu y Cachemira, objeto de disputa entre los dos países desde la independencia y partición de 1947.

Cerca de un centenar de personas murieron como consecuencia de diferentes hechos de violencia en el marco de la disputa entre los dos países. Un grave atentado en febrero que causó la muerte a 45 soldados indios derivó en acusaciones por parte del Gobierno indio de complicidad pakistaní con los hechos y llevó a una escalada de la tensión militar y diplomática entre los dos países. Las Fuerzas Aéreas indias señalaron que habían llevado a cabo ataques aéreos preventivos contra un campo de entrenamiento de Jaish-e-Mohammad en territorio pakistaní, hecho negado por Pakistán. A su vez, el Gobierno pakistaní anunció la captura de un piloto militar indio –que fue puesto en libertad posteriormente en un gesto que Pakistán calificó de “buena voluntad”– y el derribo de aviones indios en territorio pakistaní y el Gobierno indio alegó el derribo de otro avión pakistaní en territorio indio. Además, el Gobierno indio amenazó con cortar el cauce de los ríos que vierten en el Indo, poniendo en peligro la continuidad del Tratado del Río Indo entre ambos países que garantiza el reparto de los recursos hídricos, indispensable para la supervivencia de la población y la economía local, fundamentalmente agrícola. En marzo la tensión se rebajó levemente con el regreso a las embajadas respectivas de los altos comisionados de cada país. Además, se produjo una reunión conjunta de carácter técnico para facilitar los desplazamientos de

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

31. Véase el resumen sobre India en este capítulo.

peregrinos sijs de la India que visitan lugares sagrados en Pakistán, aunque el Gobierno indio señaló que no se trataba de la reanudación del diálogo bilateral. **En agosto la tensión escaló gravemente con la retirada a Jammu y Cachemira de su estatus constitucional especial.**² Esta situación derivó en que el Consejo de Seguridad de la ONU, a propuesta de China –que se hizo eco de una demanda histórica de Pakistán– celebrara una reunión a puerta cerrada sobre la situación en Cachemira por primera vez en décadas en el mes de agosto. Aunque no se consensuó ninguna declaración conjunta, diversos diplomáticos hicieron llamamientos a que las partes restringieran al máximo cualquier acción unilateral de respuesta a la crisis. En diciembre debía celebrarse una nueva reunión también a petición de China que fue aplazada puesto que la misión de Naciones Unidas sobre el terreno no presentó su informe. Como consecuencia de los enfrentamientos armados entre los dos Ejércitos en la Línea de Control (frontera que separa *de facto* India y Pakistán) murieron unas 50 personas a lo largo de todo el año, en su mayoría soldados. No prosperaron los llamamientos al diálogo que se hicieron a lo largo del año y en septiembre, en un discurso ante Naciones Unidas, el primer ministro pakistaní, Imran Khan, advirtió a la India de que sus acciones podían derivar en una nueva guerra.

Sri Lanka	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles, grupo armado National Towheed Jamaat (NTJ)

Síntesis:

En 1983 el grupo armado de oposición independentista tamil LTTE inició el conflicto armado que asoló Sri Lanka durante casi tres décadas. El proceso de creciente marginación de la población tamil por parte del Gobierno, integrado fundamentalmente por las elites cingalesas, tras la descolonización de la isla en 1948 llevó al grupo armado a reclamar la creación de un Estado tamil independiente por la vía armada. Desde 1983, cada una de las fases en las que se desarrolló el conflicto finalizó con un proceso de paz fallido. En 2002 se iniciaron negociaciones de paz con mediación noruega, después de la firma de un acuerdo de alto el fuego, el fracaso de las cuales llevó a la reanudación con gran virulencia del conflicto armado en 2006. En mayo de 2009 las Fuerzas Armadas vencieron militarmente al LTTE y recuperaron todo el territorio del país tras dar muerte al líder del grupo armado, Velupillai Prabhakaran. En los años posteriores, miles de tamiles permanecieron desplazados y no adoptaron medidas para avanzar en la reconciliación. Además, el Gobierno se negó a investigar los crímenes de guerra del conflicto armado, negando la comisión de este tipo de delitos. No obstante, en 2015 las elecciones presidenciales y parlamentarias resultaron en la formación de un nuevo Gobierno, que dio lugar al inicio de algunas reformas políticas y a tímidos avances en la investigación de los crímenes durante el conflicto armado.

La situación de Sri Lanka sufrió un grave deterioro y fue escenario de un gravísimo episodio de violencia. Más de 320 personas murieron –en su mayoría población local y al menos 40 personas extranjeras– y 500 resultaron heridas como consecuencia de varios atentados simultáneos el domingo de Pascua, en iglesias en las inmediaciones de Colombo –capital del país– y Batticaloa y tres hoteles de lujo en Colombo.

Los atentados fueron cometido por un grupo islamista desconocido hasta ese momento, National Towheed Jamaat (NTJ) y reivindicados por ISIS, lo que supondría el ataque más mortífero en el exterior y el episodio más grave de violencia en Sri Lanka desde la finalización del conflicto armado en 2009. Con posterioridad al ataque se produjeron más de 1.800 detenciones de musulmanes y en una de las redadas policiales murieron al menos 15 personas, entre ellas seis menores, como consecuencia de los enfrentamientos que se desencadenaron con la Policía y la detonación de explosivos por parte de suicidas. Investigaciones parlamentarias posteriores determinaron graves fallos de seguridad por parte de las autoridades de Sri Lanka, ya que el jefe de los servicios de inteligencia habría recibido informaciones sobre el elevado riesgo de ataque con anterioridad a los atentados sin que se hubiera dado una respuesta adecuada a estas amenazas. Además, el máximo responsable de los atentados, el predicador extremista Mohamed Zahran, había sido investigado por los servicios de inteligencia previamente a los atentados. El jefe de la Policía y el antiguo secretario de Defensa fueron detenidos por negligencia y no haber prevenido los atentados. Posteriormente a los ataques se produjeron diferentes episodios de violencia contra la comunidad musulmana en el país, como agresiones contra mezquitas y negocios propiedad de personas de confesión musulmana.

En lo que respecta al ámbito político, en noviembre se celebraron elecciones presidenciales en las que resultó victorioso por una amplia mayoría el candidato del partido SLPP, Gotabaya Rajapaksa, hermano del ex presidente Mahinda Rajapaksa. Gotabaya se desempeñó como secretario de Defensa entre 2005 y 2015 y fue el máximo responsable de las Fuerzas Armadas durante los últimos años del conflicto armado y durante las operaciones militares que dieron fin al conflicto en 2009 y al grupo armado LTTE, con acusaciones al Ejército de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra contra la población civil tamil, como los bombardeos intencionados contra población civil, hospitales y centros de atención humanitaria. Tras su elección se produjo la renuncia del primer ministro Ranil Wickremesinghe, del partido opositor UNP, lo que derivó en la toma de posesión como primer ministro de Mahinda Rajapaksa. El retorno al control gubernamental del país por parte del clan Rajapaksa incrementó la preocupación entre amplios sectores de la sociedad civil y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como por parte de

32. Véase el resumen sobre India (Jammu y Cachemira) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

algunos países. Gotabaya había anunciado durante la campaña electoral que no daría continuidad a los compromisos del Ejecutivo de Sri Lanka con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en materia de reconciliación y rendición de cuentas con respecto a las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Por otra parte, previamente a la configuración del nuevo Gobierno, el nombramiento del general Shavendra Silva como comandante de las Fuerzas Armadas había sido objeto de condenas por parte de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por su implicación en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

En Sri Lanka, la victoria electoral de Gotabaya Rajapaksa incrementó la preocupación de las organizaciones de derechos humanos ante la interrupción de la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado

algunos análisis sostienen que la situación política en Hong Kong supone el mayor reto para China desde la llegada al poder de Xi Jinping. Según algunos balances hechos públicos a finales de año, dos personas murieron, unas 2.600 resultaron heridas y más de 7.000 habían sido detenidas durante las movilizaciones, que se iniciaron a finales de marzo y se prolongaron durante todo el año. Efectivamente, a finales de marzo, miles de personas protestaron contra los intentos del Parlamento regional hongkonés de aprobar un proyecto de ley de enmienda a las leyes de extradición y que permitiría, entre otras cuestiones, la entrega de personas fugitivas a la jurisdicción china. Según algunos análisis, este proyecto alentó el temor entre buena

parte de la ciudadanía de que se pudiera menoscabar la autonomía regional de Hong Kong y de que Beijing pudiera utilizar la cobertura legal de la nueva legislación para extraditar a líderes políticos que se oponen al actual estatus quo de la región. Si bien en su fase inicial las protestas pivotaron fundamentalmente alrededor de la retirada del proyecto de ley, a medida que avanzaban las protestas se incluyeron nuevas exigencias –como la investigación de los presuntos abusos policiales durante las manifestaciones y la renuncia de la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam–, o bien demandas ciudadanas que ya se habían planteado en el pasado, como la introducción del sufragio universal en la elección del Consejo Legislativo o del Gobierno regional. A pesar de las protestas de finales de marzo, Carrie Lam declaró su intención de proseguir con el mencionado proyecto de ley, auspiciando nuevas y más masivas movilizaciones a finales de abril, cuando más de 100.000 personas se concentraron en las inmediaciones del Parlamento regional.

Las protestas vivieron un punto de inflexión en el mes de junio, cuando el Gobierno regional de Hong Kong anunció la suspensión de las controvertidas enmiendas a la legislación de extradición después de que cientos de miles de personas –un millón según los organizadores– se movilaran y se registraran los episodios de violencia más importantes de las últimas décadas en enfrentamientos entre Policía y manifestantes, lo que comportó el cierre de edificios públicos durante varios días. Tras el anuncio de Lam, cientos de miles de personas –hasta dos millones según algunas fuentes– siguieron movilizándose para la completa retirada del proyecto de ley. El 1 de julio, con motivo del 22º aniversario de la cesión de soberanía de Reino Unido a China, decenas de manifestantes irrumpieron en la sede del Consejo Legislativo, mientras que a finales de mes se registraron nuevos enfrentamientos con la Policía después de que varias personas, incluyendo pasajeros, fueran atacadas en una estación de tren. A principios de agosto una huelga general obligó a cancelar unos 200 vuelos, mientras que días más

Asia Oriental

China (Hong Kong)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En 1997, tras más de 150 años de dominio británico y varios años de negociaciones que culminaron en un acuerdo chino-británico en 1984, China recuperó la soberanía sobre Hong Kong al amparo del principio “un país, dos sistemas”. Bajo este principio, Beijing se comprometía a respetar –durante 50 años– la idiosincrasia institucional y el autogobierno del enclave, garantizando su estatus de región especial administrativa y una “ley básica” que prevé un gobierno regional relativamente autónomo con competencias ejecutivas, legislativas y judiciales. Desde entonces, el movimiento ciudadano y los partidos políticos que abogan por una mayor democratización y autonomía de Hong Kong y que rechazan la interferencia del Gobierno central en los asuntos domésticos del enclave han incrementado notablemente su fortaleza institucional, su apoyo popular y su capacidad de movilización. Aunque tanto las autoridades centrales como las regionales declaran ser sensibles a las demandas de la mayor parte de la ciudadanía y en ocasiones han presentado propuestas de reforma política, la magnitud de las protestas se incrementó notablemente en las dos décadas posteriores a la devolución de Hong Kong por parte de Reino Unido. En la segunda mitad de 2014, cientos de miles de personas participaron en protestas multitudinarias –popularmente conocidas como la Revolución de los Paraguas o “Occupy Central”– contra una serie de reformas electorales propuestas por Beijing. Desde entonces hasta el estallido de las movilizaciones masivas en 2019 también se produjeron numerosas protestas antigubernamentales y episodios recurrentes de tensión entre ciudadanos hongkoneses con visiones distintas sobre el estatus político de la región y su relación con el resto de China.

En 2019 se registraron las protestas más multitudinarias e intensas de las últimas décadas, hasta el punto de que

tarde, entre el 12 y el 14 de agosto, miles de personas ocuparon el aeropuerto internacional, provocando la cancelación de más vuelos y graves enfrentamientos entre manifestantes y policías. El 1 de septiembre, los manifestantes volvieron a concentrarse en el aeropuerto. Durante el mes de agosto, el transporte público se vio afectado por las movilizaciones, y miles de estudiantes de secundaria y universidad decidieron no asistir a clase para participar en las protestas. A pesar de que Carrie Lam anunció la retirada definitiva de su proyecto de ley, las protestas prosiguieron durante el mes de septiembre e incluso se incrementaron a principios de octubre con motivo de la conmemoración del 70º aniversario de la fundación de la República Popular China y de la prohibición decretada por el Gobierno regional de portar máscaras durante concentraciones colectivas en lugares públicos. En el mes de noviembre se registraron algunos de los enfrentamientos más virulentos de todo el año, especialmente después de que miles de manifestantes ocuparan varias universidades. Tuvo especial impacto mediático el sitio de la Policía a la Universidad Politécnica durante dos semanas, en el que unas 1.100 personas fueron detenidas. El 24 de noviembre se celebraron elecciones a los consejos distritales, que tuvieron una participación récord de un 71% y que fueron catalogados por algunos analistas como un referéndum sobre las protestas que estaban teniendo lugar. Los partidos calificados de pro-democracia obtuvieron el mejor resultado de su historia, logrando el control de 17 de los 18 distritos en liza y triplicando el número de escaños (de 124 a 388), mientras que los partidos próximos a Beijing sufrieron una severa derrota y perdieron más de 242 escaños. Las protestas se reanudaron a principios de diciembre, con reivindicaciones que iban más allá de la retirada de las enmiendas a la ley de extradición, y se mantenían muy activas al finalizar el año.

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ³³	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia
Síntesis:	La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron

conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea del Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

Tras un año en el que el buen avance de las negociaciones intercoreanas y entre Corea del Norte y EEUU sobre la desnuclearización de la península coreana propiciaron una reducción a la mínima expresión de las tensiones militares, estas volvieron a incrementarse sustancialmente tras el fracaso de la cumbre entre los mandatarios de EEUU y Corea del Norte en el mes de febrero. Más allá de las acusaciones sobre la culpabilidad del bloqueo de las mencionadas negociaciones, la confrontación militar y la retórica belicista se evidenciaron a partir del mes abril, coincidiendo con los ejercicios militares conjuntos que históricamente llevan a cabo EEUU y Corea del Sur. Según Pyongyang, estos contravienen el compromiso de facto que ambos países habrían asumido en 2018 en el marco de la distensión de relaciones que se produjo durante ese año. Pocos días después de la finalización de tales ejercicios, Corea del Norte lanzó misiles balísticos de corto alcance, los primeros desde diciembre de 2017. El Gobierno de EEUU trató de minimizar dichos lanzamientos asegurando que no suponían una violación de los compromisos adoptados por Pyongyang en 2018 –y que según Washington afectarían solamente a los ensayos nucleares y a los misiles balísticos intercontinentales–, pero a la vez los criticó por considerar que sí suponían una clara violación de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Gobierno norcoreano siguió llevando a cabo lanzamientos de misiles de corto alcance en julio, agosto, octubre y noviembre. A finales de año incluso varios medios de comunicación especularon con la posibilidad de que Corea del Norte hubiera ensayado un nuevo tipo de misiles capaces de ser disparados desde submarinos. La tensión fue especialmente alta en el mes de agosto, coincidiendo con los nuevos ejercicios militares conjuntos que EEUU y Corea del Sur llevaron a cabo durante prácticamente todo el mes o en el mes de noviembre y con la presentación de la nueva estrategia de defensa de Corea del Sur, y que prevé un incremento sustancial del gasto militar surcoreano. En noviembre, a pesar de que EEUU y Corea del Sur acordaron posponer las maniobras militares previstas para principios de mes en aras de la reanudación del diálogo entre EEUU y Corea del Norte, bloqueado desde febrero, las Fuerzas Armadas norcoreanas dispararon varios proyectiles de artillería cerca de la frontera marítima en disputa en dirección a Corea del Sur. En paralelo a estas acciones, en varios momentos del año el Gobierno norcoreano advirtió sobre la posibilidad de reanudar los ensayos de su programa nuclear y misiles balísticos si para finales del año 2019 no había un cambio significativo en la

33. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano.

estrategia negociadora de EEUU. Finalmente, también cabe destacar el incidente militar que se produjo en el mes de julio, cuando las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur lanzaron cientos de disparos de advertencia a aviones rusos que patrullaban la región conjuntamente con aviones chinos y que, según Seúl, habían violado su espacio aéreo al sobrevolar las islas Dokdo (Mar Oriental o Mar del Japón).

Sudeste Asiático y Oceanía

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

Se incrementaron notablemente tanto los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición OPM y las Fuerzas Armadas como las protestas y disturbios en la región de Papúa (administrativamente dividida en las provincias de Papúa y Papúa Occidental), con un saldo final de decenas de personas muertas y decenas de miles de personas desplazadas de manera forzosa. En cuanto a los enfrentamientos entre el OPM y las Fuerzas Armadas, la violencia en el distrito de Nduga (y regiones aledañas como Puncak, Puncak Jaya o Lanny Jaya) se incrementó exponencialmente desde diciembre de 2018 después de que 17 personas fueran asesinadas por el OPM en un solo ataque. Esta acción, la de mayor envergadura en la región en los últimos años en Papúa, propició el inicio de una campaña de contrainsurgencia por parte de las Fuerzas Armadas y la

Policía con bombardeos aéreos y artillería pesada que provocó la muerte de unos veinte civiles y un número indeterminado de combatientes y soldados. No trascendió la mortalidad asociada al conflicto en 2019, pero según informaciones publicadas en prensa alrededor de 30 soldados y combatientes podrían haber fallecido en el marco de los mencionados enfrentamientos. Además, en octubre una red de ONG locales denunció que 189 personas que habían abandonado sus hogares a causa de la violencia habían fallecido entre principios de diciembre de 2018 y octubre de 2019, principalmente por enfermedades y desnutrición. Un informe hecho público por las autoridades locales del distrito de Nduga en el mes de abril señaló que más de 20.000 personas habían abandonado sus hogares a causa de la violencia, aunque algunas ONG elevaban dicha cifra a más de 32.000 y el Gobierno la reducía a unas 3.500. Si bien a finales de 2018 las Fuerzas Armadas ya habían sido acusadas de numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso de fósforo blanco, durante el año prosiguieron tales acusaciones. Ya en enero, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, declaró haber solicitado autorización para visitar la región y llevar a cabo una investigación sobre tales acusaciones. En marzo, un representante del Comité Nacional para Papúa Occidental declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que las Fuerzas Armadas estaban cometiendo numerosas violaciones de los derechos humanos en Papúa, principalmente dirigidas contra población papú.

En cuanto a las protestas vinculadas al conflicto político en Papúa, cabe destacar principalmente las que se produjeron en los meses de agosto y septiembre. En agosto, como mínimo 10 personas murieron en Jayapura y el distrito de Deiyai en el marco de las protestas que se registraron en más de 30 ciudades de toda Indonesia después de que estudiantes papús fueran atacados y hostigados en Surabaya y Malang el 17 de agosto, Día de la Independencia en Indonesia. Decenas de personas fueron arrestadas en relación a dichos incidentes, que provocaron que el Gobierno desplegara miles de efectivos policiales y militares en las regiones más afectadas por las protestas, como Manokwari, Sorong, Timika o Wamena. En algunas de estas ciudades, varios edificios fueron incendiados. **En septiembre, se registró la espiral de violencia más intensa de todo el año, cuando 43 personas (33 según Human Rights Watch) murieron en la ciudad de Wamena y otras varias más en ciudades como Jayapura.** Los incidentes se iniciaron después de que un grupo de estudiantes universitarios papús fuera atacado en su residencia (uno murió y otros dos resultaron heridos) y de que, días después, un profesor de una escuela profiriera insultos racistas contra un estudiante papú en la misma ciudad de

En Papúa Occidental se incrementaron notablemente tanto los enfrentamientos armados como las protestas y disturbios, con un saldo final de decenas de personas muertas y decenas de miles de personas desplazadas de manera forzosa

Wamena. A finales de septiembre, decenas de personas habían muerto y más de 16.000 habían abandonado la ciudad –según datos proporcionados por el Gobierno– por la espiral de violencia que afectó principalmente a personas provenientes de otras partes de Indonesia. Tras estos incidentes, en los que numerosos edificios públicos, comercios y vehículos fueron incendiados, algunos analistas advirtieron que organizaciones islamistas en Indonesia habían hecho un llamamiento a defender a la población musulmana no papúa residente en la región de Papúa, exacerbando así el riesgo de enfrentamientos comunitarios o de índole religiosa. En Jayapura, donde murieron cuatro personas, y en otras ciudades también se registraron incidentes de violencia. A finales de año, con motivo del Día de la Independencia de Papúa, decenas de personas fueron detenidas en el marco de las movilizaciones de conmemoración de la efeméride. **En el plano político, cabe destacar que en el mes de octubre, después de la mencionada espiral de violencia, el presidente Widodo visitó la región de Papúa y mostró su disposición a reunirse con los líderes del movimiento secesionista papúa**, principalmente el Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental, que en ocasiones anteriores había pedido que tales conversaciones contaran con una observación y facilitación internacional. En el mes de abril, un grupo de abogados había solicitado a la Corte Suprema que revisara la legalidad del referéndum de 1969 tras el que Indonesia se anexionó la región de Papúa y que según varias organizaciones de derechos humanos no cumplió con los estándares mínimos de transparencia, a pesar de estar organizado y supervisado por Naciones Unidas.

2.3.4. Europa

Europa occidental

España (Cataluña)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, identidad Interna
Actores:	Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, actores políticos, sociales y judiciales de Cataluña y España, jefatura de Estado

Síntesis:

El conflicto sobre el estatus de Cataluña gira en su fase actual en torno al choque entre, por una parte, las aspiraciones de independencia para Cataluña de un sector político y social amplio de su población y, por otra parte, la defensa por el Estado español y otro sector político y social amplio de España y Cataluña de la integridad territorial de España y –en diverso grado– su defensa de la unidad nacional, la soberanía nacional española y/o la interpretación de que el marco normativo vigente imposibilita el ejercicio de autodeterminación de Cataluña. Así, el conflicto tiene diversos niveles, principalmente entre actores de Cataluña y España y dentro de Cataluña, y también ramificaciones internacionales. Existen narrativas

e interpretaciones diferentes sobre los orígenes y causas de fondo, así como su evolución y posibles vías de solución. Entre otros elementos, se esgrime el derecho de autodeterminación y la defensa de la integridad territorial estatal, se apela a agravios acumulados en ámbitos como recursos, competencias y reconocimiento identitario y nacional, así como a la diversidad de aspiraciones dentro de Cataluña y a los límites de la legalidad. El independentismo tomó mayor fuerza, política y social a partir de 2012, dos años después de la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña –que había sido aprobado en 2005 por todas las fuerzas políticas del Parlamento catalán (excepto el Partido Popular), finalmente recortado en el Congreso español, y ratificado posteriormente en referéndum catalán (2006) con un 74% de votos (49% de participación)– y en un contexto de crisis económica, recortes en derechos y gasto público, y convulsión social. Se inició entonces lo que se ha denominado el “proceso soberanista”, con acciones políticas y sociales de múltiples actores para ejercer la autodeterminación y lograr la independencia, cuestionadas y/o perseguidas a su vez por otros actores desde el ámbito político y judicial en Cataluña y España. Entre las acciones, una consulta popular el 9 de octubre de 2014, en la que participaron 2,3 millones de personas y el 80,76% de ellas votó a favor de que Cataluña sea un Estado independiente. En las elecciones parlamentarias catalanas de 2015, presentadas como plebiscitarias por los partidos pro-independencia, estos obtuvieron el 47,74% de los votos y una mayoría parlamentaria (72 de 135 escaños). En 2017 escaló la tensión, con una sucesión de acontecimientos, entre ellos la aprobación en el Parlamento catalán de la ley del referéndum de autodeterminación y de la ley de transitoriedad jurídica en un procedimiento exprés en que la oposición denunció la vulneración de sus derechos y de la legalidad estatutaria y constitucional, por lo que en su mayoría se ausentó de la votación; la celebración el 1 de octubre de un referéndum (43% de participación y 90% favorable a la independencia) suspendido previamente por el Tribunal Constitucional y las cargas policiales contra participantes pacíficos, un millar de lesionados y el cierre del 14% de los colegios electorales, según el Gobierno catalán; la asunción de los resultados favorables a la independencia y la suspensión de la independencia por la propia Presidencia catalana el 10 de octubre, y una declaración de constitución de república independiente ese mismo día por los partidos pro-independencia; una declaración de constitución de república catalana e inicio de un proceso constituyente aprobada en el Parlamento catalán el 27 de octubre (70 votos a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y 53 ausencias); la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por la que el Gobierno estatal intervino la autonomía catalana; el encarcelamiento preventivo e inicio de un macroproceso judicial contra líderes sociales y políticos catalanes, que concluyó en octubre de 2019 con graves penas de prisión. En estos años se han sumado otros procedimientos judiciales contra cargos políticos, policiales y activistas, en una tendencia de judicialización de la disputa política, en el marco de la cual dirigentes políticos, incluyendo el entonces presidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, salieron de España y residen desde entonces en el extranjero. Figuras en el exterior, como Puigdemont, han promovido la internacionalización del conflicto, incluyendo a través de la creación del llamado Consejo por la República Catalana. El conflicto ha generado crispación política y parálisis gubernamental y polarización social y mediática, y también amplia movilización de diferente signo. Por otra parte, entre 2018 y 2019 el Gobierno español y el catalán llevaron a cabo intentos de diálogo, que incluyeron la Declaración de Pedralbes (2018), si bien afrontaron numerosos obstáculos.

Se incrementó la tensión en torno al conflicto sobre el estatus de Cataluña, principalmente de la mano de la sentencia dictada contra líderes sociales y políticos independentistas, que ahondó en la brecha entre instituciones del Estado, Gobierno y partidos políticos de ámbito estatal, por un lado, y un amplio sector político y social de Cataluña por otro. La tensión transcurrió en 2019 en diversos ámbitos, incluyendo el judicial, social, político y mediático en Cataluña y España y, como en años anteriores, abarcó también la esfera internacional. En el ámbito judicial, la dinámica de judicialización del conflicto de años anteriores desembocó en la sentencia del llamado “juicio del proceso”, relativo a hechos acontecidos en Cataluña en torno al referéndum del 1 de octubre, tras la fase oral entre febrero y junio de 2019. El Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de octubre, condenando a penas de entre nueve y 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por delito de sedición –y en algunos casos también por malversación– a los dos líderes sociales independentistas Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural) y Jordi Sànchez (presidente de Asamblea Nacional Catalana, ANC), así como a seis miembros del Gobierno catalán destituido que facilitó la consulta (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolores Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull) y a la entonces presidenta del Parlamento (Carme Forcadell). Tres ex miembros del Ejecutivo catalán (Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó) fueron condenados por desobediencia a multas y un año y ocho meses de inhabilitación. La sentencia causó gran conmoción en el independentismo y otros sectores de población de Cataluña contrarios a la judicialización del conflicto e incrementó la tensión política y social en el último trimestre del año. Desencadenó numerosas movilizaciones en múltiples localidades catalanas, incluyendo una marcha masiva al aeropuerto de Barcelona el mismo día de la sentencia, organizada por la plataforma Tsunami Democràtic –que causó la cancelación de 110 de los 780 vuelos programados, según Aena–; así como marchas masivas de varios días desde diversas localidades (Berga, Castelldefels, Girona, Tarragona, Tàrraga y Vic) y que confluyeron en Barcelona el 18 de octubre en una manifestación multitudinaria en una jornada en que algunos sindicatos convocaron huelga general en Cataluña. Se sucedieron también varias noches de disturbios en las ciudades de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, con motivaciones diversas entre sus participantes, según informaciones de prensa. Organizaciones de derechos humanos denunciaron uso excesivo de la fuerza durante las cargas policiales y actuaciones que contribuían a aumentar la tensión, tanto de Policía Nacional como de Mossos d’Esquadra, policía autonómica. El Ministerio de Interior cifró en cerca de 200 las personas detenidas en los primeros siete días de protestas, así como en 600 los heridos, de los cuales –según las mismas fuentes– 289 eran agentes de policía. Hubo diversos heridos de gravedad, incluyendo entre otros un joven atropellado por un furgón de los Mossos y varios civiles que perdieron la visión de un ojo. 70 periodistas resultaron heridos, un 69% de ellos a causa de actuaciones de los cuerpos

policiales, según el observatorio de medios Mèdia.cat. La comisaria para los derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, expresó preocupación por las numerosas denuncias de agresiones contra periodistas, por manifestantes y por agentes de la Policía, y por el contexto de inseguridad para los periodistas que cubrían el conflicto, así como por las alegaciones de uso desproporcionado de la fuerza y de uso inapropiado de armas antidisturbios. La comisaria condenó con firmeza los ataques violentos y los actos de vandalismo y al mismo tiempo instó a las autoridades españolas a reconsiderar el uso de balas de goma y balas de foam. En los últimos meses del año hubo nuevas protestas. Entre ellas, en noviembre, varios miles de manifestantes convocados por Tsunami Democràtic cortaron la autopista AP-7 en La Jonquera y bloquearon durante 24 horas el paso fronterizo con Francia, en rechazo a la sentencia y apelando a la comunidad internacional a que inste al Gobierno español a dialogar sobre el conflicto de Cataluña. 20 personas fueron detenidas, 19 de ellas por la Gendarmería francesa, y posteriormente puestas en libertad, algunas con cargos y medidas cautelares. Tsunami Democràtic también convocó una acción de protesta antes y durante el partido de fútbol entre los clubs FC Barcelona y Real Madrid CF el 18 de diciembre, en defensa de “derechos, libertad y autodeterminación” e instando al Gobierno español al diálogo.

En una declaración pública el 19 de noviembre, la ONG internacional de derechos humanos **Amnistía Internacional expresó su preocupación por la definición del delito de sedición del Código Penal español, que consideraba muy general, así como por la interpretación extensiva de ese delito realizada por el Tribunal Supremo, lo que para Amnistía Internacional suponía una vulneración del principio de legalidad** –contenido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos–, permitiendo la criminalización de actos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica. En el caso de Sànchez y Cuixart, Amnistía Internacional consideró que la sentencia condenatoria restringía excesiva y desproporcionadamente sus derechos de libertad de expresión y libertad pacífica y urgió a las autoridades españolas a que fueran puestos en libertad y que garantizaran fórmulas que permitieran anular la condena. Respecto a los ex miembros del Gobierno y del Parlamento, señaló que pudieron haber cometido algún delito legítimamente condenable en virtud del cargo que ejercían, pero que debido a la vaga definición del delito que se les imputaba y la interpretación excesiva de este, la sentencia vulneraba el principio de legalidad. Por ello, instó a las autoridades españolas a que en los eventuales recursos legales que planteen las personas condenadas, se tenga en cuenta debidamente la vulneración del principio de legalidad.

Durante el año continuaron en marcha otros procesos judiciales. Así, el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, se enfrentó a una pena de inhabilitación en el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusado de un delito de desobediencia por no retirar

una pancarta con lazos amarillos, símbolo en defensa de la libertad de los presos independentistas, en el Palau de la Generalitat en precampaña electoral, desoyendo la orden de la Junta Electoral Central. En noviembre Torra asistió a la primera vista del juicio. Por otra parte, la Audiencia Nacional fijó para enero de 2020 el inicio del juicio al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el exdirector de los Mossos, Pere Soler, el exsecretario general de Interior, César Puig, acusados de delito de rebelión, y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana, acusada de sedición, por no haber impedido el referéndum del 1 de octubre ni las protestas ante la Consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre de 2017. A su vez, entre otros procesos judiciales en marcha, en noviembre se suspendió el juicio contra los ex miembros de la Mesa del Parlamento y la ex diputada Mireia Boya, que estaba previsto empezase ese mes. Se enfrentan a acusaciones de delito de desobediencia por permitir la tramitación de las leyes del referéndum y de transitoriedad del 6 y 7 de septiembre de 2017. La condición de aforado de Joan Josep Nuet tras resultar elegido como diputado en el Congreso llevó a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) remitiese su caso al Tribunal Supremo, mientras el TSJC mantuvo su competencia para juzgar al resto de acusados y ordenó un nuevo señalamiento para llevar a cabo el juicio oral, que se celebraría en 2020.

En el ámbito judicial internacional, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre que Oriol Junqueras, líder político independentista y candidato electo en las elecciones del Parlamento europeo de mayo de 2019 –en prisión preventiva desde noviembre de 2017– tenía inmunidad como parlamentario europeo desde la proclamación de los resultados, lo que requería su excarcelación. No obstante, la Corte señaló que correspondía al Tribunal Supremo apreciar los efectos aparejados a la inmunidad en otros procedimientos, en referencia a la causa judicial contra Junqueras por el referéndum del 1 de octubre, con sentencia desde el 14 de octubre. A partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal Supremo decidirá cómo aplicarla, lo que se preveía para inicios de 2020. A su vez, horas después de la sentencia de la corte europea, el Parlamento europeo autorizó en diciembre la entrada del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del ex consejero de Salud Toni Comín, ambos elegidos como europarlamentarios en los comicios de mayo –retirando su prohibición impuesta desde la reactivación de la euroorden–, por lo que su toma de posesión de los escaños tendrá lugar en enero de 2020.

En el ámbito político, en el marco de las negociaciones para la investidura de un nuevo gobierno en España tras las elecciones parlamentarias de noviembre de 2019, el año finalizó con previsión de acuerdo de investidura entre los partidos ERC y PSOE, a ratificarse en los primeros días de enero de 2020, que incluiría la constitución de una mesa de diálogo entre gobiernos y una consulta a la población de Cataluña sobre los acuerdos que se alcancen en esa mesa, según trascendió a finales de

diciembre. Como parte del acuerdo, a través de su abstención ERC facilitaría la investidura de un gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Por su parte, JxCAT advirtió de que este partido no se sentía vinculado al acuerdo entre PSOE y Podemos y acusó a ERC de debilitar el independentismo. En relación al diálogo entre los gobiernos catalán y español, ambos ejecutivos dieron por roto el diálogo en febrero de 2019 e intercambiaron acusaciones cruzadas. El 20 de diciembre de 2018, tras una breve reunión entre los presidentes de los Gobiernos español y catalán, Pedro Sánchez y Quim Torra, en el Palau de Pedralbes, ambos gobiernos habían emitido la llamada Declaración de Pedralbes. Según el texto, ambos gobiernos convenían en afirmar que existía un conflicto sobre el futuro de Cataluña; defendían un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con apoyo amplio en la sociedad catalana; que debían potenciarse espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica; y que la vía del diálogo requiere del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos difirieron en la valoración sobre el alcance de la declaración y sus acentos.

Precedían a la declaración meses de acercamientos y desencuentros entre los dos ejecutivos tras la llegada en junio de 2018 al Gobierno del PSOE después de una moción de censura contra el Partido Popular, apoyada por las formaciones independentistas ERC y PDeCAT. En enero de 2019 se produjeron varias reuniones a nivel ministerial, que debían permitir avanzar en el despliegue de la Declaración de Pedralbes, incluyendo la propia arquitectura del diálogo. Las negociaciones abordaban la creación de una mesa de diálogo entre partidos para canalizar los asuntos más políticos, que se complementaría con la comisión bilateral Generalitat-Estado, enmarcada en el Estatuto de Cataluña y reactivada el 1 de agosto de 2018 –paralizada desde julio de 2011. Trascendieron desacuerdos entre los dos gobiernos sobre la composición de la mesa de partidos en que iba a consistir el esquema de diálogo basado en la declaración de Pedralbes. Aun así, a principios de febrero el Gobierno español aceptaba la inclusión de una figura que “diera fe” de que lo pudiese ocurrir en la mesa de partidos, en referencia a la demanda de ERC y JxCAT de un relator. Las discusiones en torno a una figura intermediaria y, en su conjunto, el diálogo entre ejecutivos, generaron fuertes críticas de los partidos PP y Ciudadanos, que lo calificaron como una traición a la unidad de España y convocaron una manifestación contraria al diálogo sobre Cataluña, que tuvo lugar el 10 de febrero y que congregó 45.000 personas según la Policía –200.000 según los convocantes.

Además de las presiones de los partidos de la oposición política, el diálogo transcurría influido por el contexto político de negociaciones para la aprobación de los presupuestos estatales –y la posición de enmienda a la totalidad de los presupuestos por parte de ERC y

PDeCAT–, así como de la situación de prisión preventiva de los líderes sociales y políticos catalanes y el inicio de la fase oral del juicio contra ellos. Ya antes de la celebración de la manifestación, los gobiernos catalán y español dieron por fracasadas las negociaciones. El Gobierno español del PSOE responsabilizó al Gobierno catalán de la suspensión del diálogo por rechazar el marco en que se había planteado el diálogo y que, según el Gobierno español, excluía desde el principio la autodeterminación de Cataluña y un referéndum contrario al marco constitucional. El Gobierno no dio por terminadas de forma definitiva las conversaciones, pero insistió en que el único marco posible de diálogo era dentro de la legalidad y de la Constitución española. Por su parte, el Gobierno catalán acusó al Gobierno español de abandonar el diálogo y lo atribuyó a las presiones de los partidos de la derecha política. El Ejecutivo catalán reiteró su posición de que la mesa de partidos del esquema de diálogo debía materializarse al nivel estatal. Además, achacó al Gobierno español falta de valentía para concretar en la práctica los mecanismos de diálogo, así como prisas por cerrar un acuerdo que aún no estaba listo. Señaló que seguirían sentándose en la mesa de negociaciones. Por otra parte, durante el año se celebró solo una reunión, en febrero, de la mesa de diálogo de los partidos catalanes, convocada por primera vez en noviembre de 2018 por el presidente de Cataluña como un espacio paralelo al de las negociaciones entre los gobiernos español y catalán, y en la que rehusaron participar el PP, Ciutadans y la CUP. En la reunión de febrero de este espacio de diálogo, el presidente catalán hizo público el documento de 21 puntos que había entregado al presidente del Gobierno español en la breve reunión que mantuvieron ambos en diciembre de 2018. Entre otros puntos, el documento reclamaba el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña y hacerlo efectivo, una mediación internacional y el fin de las amenazas de la aplicación del artículo 155, entre otras.

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj

Síntesis:

La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre esta y su vecina Armenia. El

conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego.

La situación de seguridad en torno a la línea de alto el fuego mejoró significativamente,

en consonancia con la evolución de finales de 2018, y en contraste con años anteriores, reduciéndose los niveles de tensión entre Armenia y Azerbaiyán. Según la base de datos de ACLED, en 2019 hubo una quincena de víctimas mortales relacionadas con el conflicto –lo que supone una reducción frente al medio centenar del año anterior–, así como diversos heridos. Las víctimas, miembros de las fuerzas de seguridad de ambos países, se produjeron por violaciones del alto el fuego en torno a la militarizada Línea de Contacto. Durante el año los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán se comprometieron a fortalecer el alto el fuego y el mecanismo de comunicación directo adoptado en 2018 para facilitar la prevención de incidentes. No obstante, no hubo aún compromiso para un acuerdo práctico de ampliación del limitado equipo de observadores de la OSCE que supervisa el alto el fuego. En algunos momentos del año se registraron incrementos de incidentes de seguridad, como en junio, lo que llevó a los co-mediadores a instar a las partes a abstenerse de acciones provocativas, incluyendo el uso de francotiradores. En medio de la carrera armamentística que aún afecta a la región (gasto militar del 4,8% del PIB en 2018 en Armenia, 3,8% en 2017; 3,8% en Azerbaiyán, igual que en 2017), ambos países llevaron a cabo ejercicios militares, criticándose mutuamente. Entre ellos, en marzo Azerbaiyán movilizó a 10.000 tropas, 500 tanques y 300 sistemas de misiles, entre otro equipamiento militar, en ejercicios de gran escala durante cinco días, poco antes de la cumbre de marzo entre los líderes armenio y azerbaiyano, lo que generó críticas del Gobierno armenio.

Por otra parte, se incrementó la tensión política en algunos momentos en torno a visitas a Nagorno-Karabaj de cargos políticos de Armenia, como el viaje en febrero del director del Servicio Nacional de Seguridad, que expresó su apoyo a nuevos asentamientos armenios en Nagorno-Karabaj –política muy criticada por Azerbaiyán por las dificultades que añade para un eventual acuerdo sobre el estatus del territorio y para el retorno de la población azerbaiyana de Nagorno-Karabaj desplazada por la guerra. La visita en agosto del primer ministro armenio, Nikol Pashinian, a Nagorno-Karabaj, en el marco de la cual Pashinian afirmó que Nagorno-Karabaj era una región armenia, también desencadenó críticas de Azerbaiyán. Por su parte, el presidente azerbaiyano, Ilhan Aliyev, afirmó en noviembre que Nagorno-Karabaj siempre había sido territorio de Azerbaiyán y acusó a Armenia de genocidio durante la guerra. Por otra parte, Nagorno-Karabaj celebró elecciones locales en septiembre, sin reconocimiento internacional. Asimismo,

se deterioraron las relaciones entre las autoridades de Nagorno-Karabaj y el Gobierno de Armenia.

Rusia (norte del Cáucaso) ³⁴	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interno
Actores:	Gobierno federal ruso, gobiernos de las repúblicas de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)
Síntesis:	El norte del Cáucaso es escenario de diversos focos de tensión, incluyendo en forma de conflictividad armada que enfrenta a fuerzas de seguridad federales y locales, por un lado, y a actores insurgentes yihadistas, por otro. La violencia es resultado de un cúmulo de factores, incluyendo la regionalización e islamización de la insurgencia procedente de Chechenia –república escenario de dos guerras, entre 1994-1996 y entre 1999 y principios del siglo XXI–, así como del impacto de políticas de persecución contra el islam salafista, graves violaciones de derechos humanos, déficits de gobernabilidad y malestar social. A lo largo de los años se establecieron estructuras armadas locales en repúblicas como Daguestán, Chechenia, Ingushetia y Kabardino-Balkaria, conectadas regionalmente a través del llamado Emirato Caucásico. A partir de finales de 2014 diversos comandantes del norte del Cáucaso proclamaron su lealtad a ISIS, escindiéndose del Emirato Caucásico y estableciendo una rama caucásica vinculada a ISIS (Vilayat Kavkaz). Además, una parte de la insurgencia se desplazó a Siria e Iraq, uniéndose a diversos grupos armados. Los niveles de violencia han ido fluctuando en las diversas repúblicas, considerados como conflicto armado en el caso de Daguestán entre los años 2010 y 2017, y en el conjunto del norte del Cáucaso la violencia armada ha remitido en los últimos años. A la violencia armada se añaden otros ejes de tensión, como las graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, así como las disputas en torno a cuestiones fronterizas, tensiones interétnicas, rivalidades por el poder político y violencia de corte criminal.

El norte del Cáucaso continuó afectado por múltiples ejes de tensión, incluyendo conflictividad armada entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia vinculada a ISIS, con un descenso en las víctimas mortales respecto a años anteriores. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo numerosas operaciones contrainsurgentes en la región y declararon medidas de régimen antiterrorista, mientras la insurgencia perpetró diversos ataques, incluyendo contra puestos de policía. El balance de víctimas fue de una treintena entre enero y noviembre, según el portal independiente Caucasian Knot. A diferencia de años anteriores, en los que Daguestán era la república con mayor número de fallecidos, en 2019 Kabardino-Balkaria fue la más afectada en términos de mortalidad, con una docena de fallecidos, en su práctica

totalidad miembros de la insurgencia regional. Le siguió Daguestán, con una decena de insurgentes fallecidos, y Chechenia, con ocho víctimas mortales. La mitad eran insurgentes y la otra mitad, miembros de las fuerzas de seguridad. En otras zonas, como Ingushetia y la región de Stavropol, también hubo fallecidos y heridos. ISIS reivindicó diversos ataques, incluyendo contra varios policías en la capital de Chechenia en junio y contra un puesto de Policía en julio en el distrito de Achkhoy-Martan (Chechenia), que causaron varias víctimas mortales y heridos. Las autoridades rusas detuvieron a diversas personas acusadas de pertenecer a ISIS y planificar ataques. A su vez, un ex comandante checheno de la segunda guerra de Chechenia, Zelimkhan Khangoshvili, fue asesinado en Berlín en agosto. Círculos próximos a la víctima apuntaron a una conexión entre su muerte y los servicios de seguridad rusos. Por otra parte, en noviembre fue asesinado en Moscú el jefe del Centro para el Combate contra el Extremismo de Ingushetia, ataque que algunos medios atribuyeron a un conflicto entre la víctima y sectores próximos al jeque Batal-Khadji, uno de cuyos líderes fue asesinado en 2018.

Por otra parte, **la región continuó afectada por la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias y secuestros, con nuevas denuncias sobre abusos en 2019.** El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa condenó en marzo el uso extendido de tortura y malos tratos contra personas detenidas en Chechenia. Asimismo, la organización rusa Red LGTBI denunció en enero detenciones y tortura por parte de las autoridades chechenas contra hombres gays y mujeres lesbianas, con cifras de 40 detenidos y dos personas fallecidas. Por otra parte, en junio fue puesto en libertad, tras 18 meses en prisión, el director de la rama chechena de la organización de derechos humanos Memorial, Oyub Titiyev, sentenciado en marzo a cuatro años de cárcel con cargos denunciados como falsos por organizaciones de derechos humanos. Por otra parte, se incrementó la tensión política y social en torno al pacto de 2018 entre Chechenia e Ingushetia para la demarcación fronteriza. Miles de ciudadanos ingushetios protestaron en marzo, reclamando un referéndum sobre el pacto y la dimisión del presidente ingushetio Ynus-Bek Yevkúrov, con varios heridos en choques con las fuerzas de seguridad, redadas y detenciones. Yevkúrov dimitió en junio. Las negociaciones paralelas entre Chechenia y Daguestán para su demarcación fronteriza también se vieron afectadas por la tensión en Ingushetia y protestas en Daguestán, y ambas autoridades anunciaron la suspensión del proceso en abril. Asimismo, también hubo tensión social en Daguestán en torno a las movilizaciones en Meusisha contra la construcción de un nuevo canal, con varios heridos en choques con la Policía y el servicio federal de seguridad. Por otra parte, la situación de conflictividad en el norte del Cáucaso transcurrió en un contexto general de tensión política

34. En anteriores ediciones de este informe se analizaban por separado las tensiones Rusia (Daguestán) y Rusia (Chechenia).

y social en Rusia en 2019 en torno a las elecciones locales de septiembre, con protestas masivas en julio y agosto en Moscú y detenciones de gran escala.

Sudeste de Europa

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional ³⁵
Actores:	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX

Síntesis:

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia.

La tensión entre Serbia y Kosovo se mantuvo elevada, en un contexto de proceso de diálogo paralizado y en el que Serbia puso a su Ejército en alerta de combate junto a la frontera, mientras en Kosovo se incrementó la inestabilidad política. Kosovo mantuvo en vigor en 2019 la imposición de aranceles del 100% a la importación de productos de Serbia. Esta medida, adoptada en 2018 en protesta por la campaña de Serbia contra el reconocimiento internacional de Kosovo, desencadenó a finales de 2018 el incremento de tensión entre ambos, la paralización de las negociaciones, así como la dimisión de los alcaldes serbokosovares de las cuatro localidades de mayoría serbia del norte de Kosovo, generando un vacío de poder. El mantenimiento de los aranceles en 2019 profundizó la disputa entre Kosovo y Serbia y entre Kosovo y las áreas serbias de Kosovo. Las autoridades kosovares convocaron elecciones

La tensión entre Serbia y Kosovo se mantuvo elevada, en un contexto de cancelación del diálogo bilateral y de inestabilidad política en Kosovo

extraordinarias municipales en el norte de Kosovo para el 19 de mayo. La negativa de la Comisión Electoral Central en abril a validar las candidaturas del partido serbokosovar Lista de Serbia generó críticas de los afectados y del Gobierno de Serbia, mientras la medida fue finalmente revocada. La Lista de Serbia obtuvo el 90% de los votos en los cuatro municipios kosovares de mayoría serbia. En julio los comercios serbokosovares de los cuatro municipios llevaron a cabo una huelga de dos días en protesta por los aranceles. A su vez, el primer ministro kosovar, Ramush Haradinaj, cesó en abril al ministro serbokosovar de Administración del Gobierno local, Ivan Todosijevic, tras describir éste a la población albanokosovar como terrorista y acusarla de denunciar falsos crímenes en la guerra.

La tensión entre Kosovo y Serbia también se incrementó tras una operación en mayo de la policía de Kosovo contra el contrabando y la delincuencia organizada en diversas zonas del norte de Kosovo, que se saldó con 29 detenidos, incluyendo 19 policías locales y dos funcionarios de la misión de la ONU en Kosovo, UNMIK, en el marco de la cual resultaron heridas una docena de personas, incluyendo 10 civiles. En respuesta **el Gobierno de Serbia denunció que la operación estaba diseñada para intimidar a la población serbia del norte de Kosovo y que constituía una amenaza a la estabilidad y la paz. Además, ordenó a las tropas del Ejército serbio junto a la frontera situarse en alerta de combate** para proteger a la población serbia si la tensión escalaba. El presidente serbio advirtió de que si se producía una escalada del conflicto o un ataque contra la población serbia, el Estado serbio resultaría victorioso. El presidente kosovar instó a la población serbokosovar a mantener la calma y apoyar a la Policía. Por su parte, la misión de la OTAN en Kosovo, KFOR, llamó a la calma y afirmó que seguía de cerca la situación. La ONU señaló que en la detención de los dos funcionarios de la UNMIK –liberados posteriormente– no se había respetado la inmunidad que les aplica y anunció una investigación sobre los hechos. La tensión se mantuvo elevada en meses posteriores. Trascendió la supuesta negativa de la Policía de Kosovo de permitir la entrada a Kosovo a personas con pasaporte de Serbia. El ministro de Defensa de Serbia denunció en julio que las autoridades kosovares le habían impedido entrar en Kosovo. El Gobierno kosovar negó que hubiera ninguna medida de prohibición.

También aumentó la incertidumbre política en Kosovo. **El primer ministro Ramush Haradinaj dimitió en julio tras ser citado por las Salas Especializadas y la Fiscalía Especializada, órganos del sistema judicial de Kosovo, de composición internacional y con sede en La Haya, que investigan crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes cometidos en el**

35. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

periodo del conflicto armado, entre 1998 y 2000, relativos a las alegaciones contenidas en un informe del Consejo de Europa sobre crímenes perpetrados por combatientes de la guerrilla albanokosovar ELK. Desde 2018 y hasta noviembre de 2019, la Fiscalía Especializada había citado en torno a un centenar de ex combatientes para ser interrogados, incluyendo Haradinaj. La coalición en el Gobierno rechazó la designación de un nuevo primer ministro, lo que llevó a la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas en octubre. El partido nacionalista albanokosovar Vetevendosje (Autodeterminación) obtuvo la victoria (26% de los votos). Se ordenó el recuento en la mitad de los colegios electorales de Kosovo y se invalidaron más de 3.700 votos depositados en Serbia. Los resultados supusieron un vuelco del mapa político de Kosovo, quedando el PDK fuera de la opción de gobierno por primera vez desde la declaración de independencia de Kosovo en 2008.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Irán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando Ahmadinejad fue reelegido en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persisten.

Durante 2019 Irán registró la mayor convulsión interna de la última década, después de que multitudinarias protestas motivaran una durísima represión por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas. Las movilizaciones populares contra un alza en el precio de los combustibles se iniciaron a mediados de noviembre y hasta finalizar el año se contabilizaban 304 víctimas mortales, según un balance hecho público por Amnistía Internacional a

mediados de diciembre. El Gobierno anunció el 15 de noviembre un sorpresivo aumento de 50% en el precio de los combustibles, alentando manifestaciones masivas en diversas ciudades de Irán, en las que participaron unas 200.000 personas, según cifras oficiales, y que involucraron bloqueos de carreteras y ataques a tiendas y bancos, entre otras acciones. El régimen respondió con un bloqueo casi total de internet y con una dura represión, que supuso numerosas muertes en pocos días. Medios de prensa informaron que solo en una localidad, en Mahshahr (noroeste), un centenar de personas murieron –incluyendo muchas personas de la minoría árabe que habita la zona– después de que las fuerzas de seguridad dispararan directamente a los manifestantes. **Naciones Unidas denunció violaciones a los derechos humanos y a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, alertó sobre la falta de transparencia sobre las víctimas de la represión y expresó su preocupación por las al menos 7.000 personas arrestadas** en 28 de las 31 provincias iraníes desde mediados de noviembre. Respecto a esto último, se alertó sobre posibles maltratos físicos, vulneraciones al debido proceso, confesiones forzadas y por la posibilidad de que muchas de las personas detenidas enfrenten cargos y penas castigadas con la pena de muerte en Irán. Amnistía Internacional también denunció intimidaciones, amenazas e incluso extorsiones a las familias de las víctimas.

Diversos análisis resaltaron la dura respuesta del régimen a las movilizaciones, más contundente que la de otros episodios de contestación recientes: unas 70 personas murieron en el marco de las protestas del llamado Movimiento Verde contra la reelección de Mahmoud Ahmadinejad en 2009 y unas dos docenas fallecieron en las protestas que denunciaron la situación económica del país entre diciembre de 2017 y enero de 2018. **Las autoridades iraníes denunciaron las recientes movilizaciones como producto de una conspiración de enemigos externos**, subrayando la coordinación en algunos de los ataques a infraestructuras clave –incluyendo puertos, silos y refinerías– considerados como no habituales en el modus operandi de las protestas en el país. La reacción del régimen iraní se enmarca, por tanto, en el clima general de pugnas geoestratégicas y de tensiones internacionales y regionales que protagoniza Teherán y que se materializa en diversos enfrentamientos indirectos.³⁶ En esta línea, las autoridades iraníes también subrayaron la coincidencia con las protestas y convulsión durante 2019 en Iraq y Líbano –países en los que Teherán tiene un destacado ascendiente–, alimentando las sospechas de que se trataba de una campaña orquestada para desestabilizar la zona de influencia iraní.³⁷ Algunos análisis puntualizaron que si bien no se puede descartar una intervención externa en la convulsión en Irán, existe desde hace años frustración por un sistema político que percibe el disenso como traición y una extendida preocupación

36. Véase los resúmenes sobre Irán – EEUU, Israel y el de Israel-Siria-Líbano en este capítulo y el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

37. Véase resúmenes sobre Iraq y Líbano en este capítulo.

social por la situación económica del país, con una elevada inflación y problemas de desempleo. Condiciones económicas que se han deteriorado en el último período, además, tras la decisión del Gobierno de EEUU de intensificar su política de sanciones al régimen iraní. En este contexto, algunos análisis alertaron también sobre las consecuencias de las políticas represivas en las provincias que albergan minorías como la árabe o kurda. Otros recordaron que Irán se encuentra en fase preelectoral, con comicios legislativos y presidenciales previstos para febrero de 2020 y 2021, respectivamente.

Multitudinarias protestas en Irán a partir de noviembre motivaron una durísima represión por parte de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 300 personas fallecidas

Irán (noroeste)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Komala, KDP, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)

Síntesis:

A pesar de la naturaleza heterogénea y multiétnica de Irán, las minorías que habitan el país, entre ellas los kurdos, han sido sometidas a décadas de políticas centralistas y de homogeneización y han denunciado discriminación por parte de las autoridades de la República Islámica. En este contexto, desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a Teherán en un intento por obtener una mayor autonomía para la población kurda, que se concentra en las provincias del noroeste del país. Grupos como el Partido Democrático Kurdo (PDKI) y Komala encabezaron esta lucha durante décadas. Desde 2004 es el Partido por la Vida Libre en Kurdistan (PJAK), vinculado al PKK de Turquía, el que protagoniza el conflicto con Teherán, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, se enfrenta periódicamente con las fuerzas iraníes, en particular miembros de la Guardia Revolucionaria. Según trascendió, en 2011 el PJAK y el Gobierno iraní habrían pactado un cese el fuego que comprometería al grupo armado a cesar sus ataques y a las autoridades a suspender la ejecución de prisioneros kurdos, pero las hostilidades y los enfrentamientos de baja intensidad persisten.

Las informaciones sobre el conflicto entre Irán y grupos kurdos que operan en el noroeste del país y en la zona fronteriza con Iraq apuntaron a un relativo descenso en los niveles de violencia en comparación con el año anterior. **Si en 2018 las hostilidades provocaron la muerte de unas 60 personas, los datos relativos a 2019 indican que los diversos hechos de violencia habrían dejado en torno a una decena o quincena de personas fallecidas, según diferentes balances a partir de informaciones de prensa.** Cabe destacar que los incidentes se concentraron principalmente en los meses de verano y que en ocasiones los balances fueron ambiguos o contradictorios. En julio, informaciones de la prensa oficial indicaron que las fuerzas iraníes

habían dado muerte a dos militantes en el área de Chaldoran (provincia Azerbaiyán Occidental). Aunque no se identificó al grupo al que pertenecían, en la zona suelen producirse incidentes protagonizados por el grupo armado kurdo PJAK y fuerzas iraníes. Una semana más tarde se conoció que un ataque armado contra un vehículo militar causó la muerte a tres miembros de la Guardia Revolucionaria en la localidad de Piranshahr (provincia Azerbaiyán Occidental). Días más tarde, en aparente represalia a esta última emboscada, tuvo

lugar una operación en la zona fronteriza que incluyó el uso de cohetes, aviones no tripulados y fuego de artillería. Fuentes oficiales iraníes informaron que en ella habían ejecutado o herido a un gran número de militantes. En agosto, el PJAK reconoció que cuatro de sus combatientes habían fallecido en escaramuzas con las fuerzas iraníes, entre el 8 y el 11 de julio en la provincia de Kermanshan. En estos choques habría muerto también un soldado iraní y otro más habría perdido la vida en nuevas hostilidades registradas en la zona a finales de julio. En este contexto, las autoridades iraníes lanzaron advertencias al Gobierno Regional del Kurdistan sobre el uso de su territorio por parte de grupos armados como base, centro de entrenamiento y espacio desde donde lanzar ataques sobre Irán.

Cabe destacar que, paralelamente, de acuerdo con informaciones de prensa, durante 2019 grupos de la oposición kurda y representantes del gobierno iraní habrían mantenido una serie de reuniones secretas en Oslo en lo que podría ser un primer paso para identificar condiciones para unas negociaciones. Los contactos involucrarían a representantes de dos ramas del Komala Party of Iranian Kurdistan –una tercera facción de Komala, comunista, no tomó parte de la iniciativa– y de dos facciones rivales del Kurdistan Democratic Party (KDP). Según trascendió, los encuentros en Oslo habrían tenido lugar en mayo, junio y agosto en el marco de una iniciativa que estaría siendo facilitada por el Norwegian Center for Conflict Resolution (NOREF). Algunos análisis destacaron que Teherán pretendería disuadir a sectores kurdos de una escalada en Irán, en un contexto geopolítico de crecientes tensiones y en el que se sospecha que la insurgencia kurda estaría recibiendo ayuda de Arabia Saudita y EEUU.

Irán (Sistán Baluchistán)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Guardia Revolucionaria (Pasdaran), grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán

Síntesis:

Sistán Baluchistán es una provincia iraní limítrofe con Afganistán y Pakistán –la población baluchi vive a ambos lados de la frontera– y de mayoría sunní, en contraste con el resto del país, donde predomina la rama chií del Islam. La zona se caracteriza por altos índices de pobreza y es escenario de rutas de contrabando y de tráfico de drogas. Desde 2005 el grupo Jundollah (Soldados de Dios) ha llevado a cabo una campaña insurgente en esta región. La organización, que también se autodenomina Movimiento de Resistencia del Pueblo, fue creada en 2002 y denuncia una persecución sectaria por parte de Teherán. Jundollah asegura que su objetivo es la defensa de los derechos, la cultura y la religión de los baluchis y niega tener una agenda separatista y vínculos con el exterior, como le acusa el Gobierno iraní, que le atribuye conexiones con EEUU, Reino Unido, Pakistán, Arabia Saudita y con la red al-Qaeda. Ante la posibilidad de desestabilización de esta zona, Teherán ha reforzado sus dispositivos de control y ha condenado a muerte a decenas de militantes de Jundollah. Las acciones del grupo insurgente se han reducido desde 2010, tras la captura y ejecución de su líder, pero nuevos grupos armados con una agenda similar a la de Jundollah, entre ellos Jaish al-Adl (Ejército de la Justicia) han continuado operando en la zona y protagonizando esporádicos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La tensión protagonizada por las fuerzas de seguridad iraníes y grupos insurgentes en la provincia de Sistán Baluchistán continuó motivando periódicos hechos de violencia en 2019 con un saldo de víctimas mortales superior al del año anterior. **La región fue escenario de un episodio especialmente cruento a principios de año, en febrero, cuando un ataque suicida provocó la muerte de 27 miembros de la Guardia Revolucionaria y dejó heridos a otros 13.** La ofensiva, la más cruenta en años, fue reivindicada por el grupo armado Jaish al-Adl o Ejército de Justicia. Previamente, en enero, otro incidente que involucró a un escuadrón de desactivación de explosivos en la capital de la provincia, Zahedan, dejó a tres militares heridos –un segundo artefacto estalló mientras intentaban neutralizar el primero. Tras los hechos de febrero el Gobierno iraní amenazó con venganza, acusó a los perpetradores del ataque de mercenarios e insistió en vincular las actividades de grupos insurgentes en el país con el apoyo de potencias foráneas. Funcionarios iraníes señalaron principalmente a EEUU, Arabia Saudita e Israel y destacaron que el ataque se produjo el mismo día en que el Gobierno estadounidense celebraba una conferencia sobre Medio Oriente en Polonia en la que participaron 60 países y que estuvo centrada en la discusión de fórmulas para intensificar las presiones a Irán. En los meses siguientes y tras un período de tensiones e intercambio de acusaciones mutuas por sucesivos ataques armados en la zona fronteriza, **Irán y Pakistán anunciaron en abril la formación de una fuerza conjunta de reacción rápida para actuar contra milicias insurgentes que operan en la zona.** En marzo, Teherán había solicitado a Islamabad que actuara decisivamente para neutralizar la actividad de grupos insurgentes responsables de ofensivas en

Irán. Según trascendió, entre los perpetradores del atentado de febrero el Gobierno iraní identificó a tres ciudadanos pakistaníes, entre ellos el atacante suicida. En abril, después de un ataque contra un autobús que dejó 14 personas fallecidas en la provincia pakistaní de Baluchistán por parte de un nuevo grupo armado baluchi (Balochi Raji Aajori Saangar o BRAS), el Gobierno de Islamabad había asegurado contar con evidencias de que la organización poseía campos de entrenamiento en territorio iraní. A mediados de año, un nuevo hecho de violencia en la zona de Saravan dejó otros dos militares fallecidos, un miembro de la Guardia Revolucionaria y otro de la milicia Basij.

Irán – EEUU, Israel³⁸

Intensidad: 3

Evolución: ↑

Tipología: Sistema, Gobierno Internacional

Actores: Irán, EEUU, Israel

Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Khomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015. En los últimos años la retirada de EEUU del acuerdo en 2018 y la intensificación de su política de sanciones, el progresivo alejamiento de Irán de los compromisos adquiridos en el acuerdo y un convulso contexto regional han agravado la tensión y dificultaban la búsqueda de una salida a esta disputa.

Tras la intensificación de la tensión en 2018 debido a la decisión de EEUU de retirarse del pacto en torno al programa nuclear iraní –el Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) suscrito en 2015–, la situación se agravó significativamente en 2019. **Durante el año se constató una ampliación de la política de sanciones unilaterales a Irán por parte de EEUU, un progresivo alejamiento de Teherán de algunos de los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo y una**

38. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

serie de incidentes en Oriente Medio que propiciaron un escenario volátil y peligrosamente favorable a una escalada militar. Durante el año el régimen iraní intentó presionar a los países que permanecen adheridos al pacto, conocidos como P4+1 (Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania) para conseguir medidas que permitieran aliviar las sanciones económicas impuestas por Washington. Teherán dictó en mayo un ultimátum de 60 días y amenazó con aumentar el enriquecimiento de uranio. En julio se conoció que Irán había superado las reservas de uranio enriquecido permitido por el JCPOA. Teherán lanzó un nuevo ultimátum, advirtiendo con nuevas vulneraciones al acuerdo. Estas amenazas se concretaron en los meses siguientes en el levantamiento a los límites en investigación y desarrollo nuclear y la activación de las centrifugadoras en la planta de Fordow (al sur de Teherán). En este contexto, la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) encendió la alerta en noviembre, al informar que el país había acumulado más agua pesada del límite previsto en el acuerdo. La UE y los países europeos involucrados en el acuerdo rechazaron los sucesivos ultimátum de Irán y a finales de año alertaron sobre la posibilidad de activar el mecanismo de resolución de disputas previsto en el JCPOA, que podría desembocar en nuevas sanciones a la república islámica. Irán advirtió que si se ponía en marcha este mecanismo reconsideraría sus compromisos con la ONU en materia nuclear.³⁹

Durante 2019 escaló la tensión vinculada al programa atómico iraní a causa de la política de sanciones a Irán por parte de EEUU, el progresivo alejamiento de Teherán de compromisos adquiridos en el acuerdo sobre sus actividades nucleares y una serie de hechos de violencia en Oriente Medio

Paralelamente, a lo largo de 2019 EEUU amplió las sanciones contra la república islámica, incluyendo contra el líder supremo, Alí Khamenei, y en abril designó al cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) como organización terrorista. La medida fue respondida por Teherán, que situó en su lista negra al Comando Central de EEUU (CENTCOM) para Oriente Medio y Asia Central. Los debates y tensiones en torno a la implementación del acuerdo sobre el programa nuclear iraní estuvieron condicionados por el convulso contexto regional y por numerosos incidentes, en particular en las aguas del Golfo. En mayo fueron atacados cuatro barcos en la costa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) –dos saudíes, un noruego y uno de EAU– en acciones no reivindicadas y en una ofensiva con drones en territorio saudí contra instalaciones petroleras reivindicada por el grupo armado yemení al-houthistas, que motivó acusaciones contra Irán. En junio se encendieron las alarmas por el ataque a dos barcos petroleros (uno japonés y otro noruego) en el Golfo de Omán y el derribo de un avión no tripulado estadounidense, hechos que EEUU atribuyó a Irán.

Teherán negó responsabilidad en el primer incidente y respecto al segundo aseguró que la nave de EEUU había violado su espacio aéreo. **Medios de prensa informaron entonces que el presidente estadounidense había aprobado ataques militares contra Irán en respuesta al derribo del dron, pero que se retractó horas después.** Donald Trump explicó posteriormente su decisión por el impacto desproporcionado que habría tenido el ataque estadounidense. En julio se informó del derribo de otro avión no tripulado, esta vez iraní, por parte de EEUU.

Uno de los hechos con mayor repercusión se produjo en septiembre, cuando las instalaciones de la planta petrolera operada por la compañía estatal saudí Aramco en Abqaiq y Khurais (Provincia Oriental) resultaron seriamente dañadas por un ataque con misiles y drones, forzando temporalmente la suspensión del 50% de la producción petrolera saudí. Aunque el grupo armado yemení al-houthistas reivindicó la ofensiva, EEUU, Arabia Saudita y los países europeos del E3 (Alemania, Francia y Reino Unido) responsabilizaron a Irán de la agresión. Teherán negó tener ningún vínculo con la ofensiva y amenazó con represalias masivas en caso de ataques. En diciembre, una nueva escalada de violencia entre Washington y Teherán, que se materializó en una serie de hechos de violencia en Iraq y en un ataque aéreo estadounidense que resultó en la muerte del alto general iraní,

Qassem Suleimani, en los primeros días de enero de 2020, encendieron aún más las alarmas sobre la deriva de esta confrontación.⁴⁰

Cabe destacar que a lo largo de 2019 EEUU anunció también un mayor despliegue de fuerzas en Oriente Medio –incluyendo fuerzas aéreas, navales y sistemas de defensa antimisiles– con el argumento de una mayor percepción de amenaza por parte de Irán y promovió un nuevo esquema de seguridad marítima para la zona, al que se sumaron Reino Unido, Australia y Bahrein. Irán, por su parte, lanzó en septiembre su propia iniciativa de seguridad marítima para la zona, apostó por fortalecer los lazos regionales y mantuvo reuniones con EAU sobre asuntos marítimos. En este contexto de tensiones crecientes, el International Institute for Strategic Studies (IISS) publicó un estudio en el que destaca que el balance en términos de fuerzas militares convencionales es favorable a EEUU y sus aliados en la región, pero que el balance efectivo de fuerzas se decanta a favor de Irán debido a su capacidad para recurrir a terceros actores armados no estatales en varios países de la zona. IISS subraya que a través de esta política Irán ha evitado una confrontación directa con sus adversarios y que su capacidad de movilización de distintas milicias le permitiría contar con una fuerza de unos 200.000 efectivos.

39. Véase el resumen sobre Irán (nuclear) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020, Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria: Barcelona, 2020.

40. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

La situación en Egipto continuó caracterizándose por la **consolidación de la deriva autoritaria del Gobierno de Abdel Fattah al-Sisi y la persistente persecución y represión de las voces disidentes**, en un contexto marcado también por el estado de emergencia vigente en el país desde 2017 debido al conflicto en la península del Sinaí.⁴¹ Durante 2019 el Gobierno impulsó unos polémicos cambios constitucionales que fueron ratificados en abril en un referéndum denunciado por diversas voces por falta de garantías y acusaciones de fraude. **Las modificaciones legales introducidas suponen que al-Sisi puede extender su actual mandato de cuatro a seis años y optar a otros dos períodos, permitiendo su permanencia en el poder hasta 2034.** Adicionalmente, la reforma constitucional permitió a al-Sisi la designación de una serie de autoridades y altos cargos de la judicatura, mermando así el margen de independencia del Poder Judicial y ampliando el poder de los sectores militares en la vida política egipcia. Durante el año el Gobierno también promovió cambios en la cuestionada ley que regula la actividad de las ONG en el país, pero las modificaciones fueron consideradas cosméticas entre sectores de la sociedad civil. ONG internacionales de derechos humanos como

Human Rights Watch (HRW) denunciaron que la nueva normativa mantenía la mayor parte de las restricciones a las ONG. A modo de ejemplo, la ley prohíbe a las ONG realizar investigaciones o estudios de opinión sin autorización del gobierno y participar en actividades percibidas como “políticas” o “lesivas para la seguridad nacional”, y permite el estricto seguimiento de las ONG por parte de las fuerzas de seguridad.

Paralelamente, en 2019 se mantuvo el clima de acoso y persecución a las voces críticas y disidentes, incluyendo a personas del mundo académico, periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas. En los primeros meses del año hubo detenciones de manifestantes que se movilizaron para denunciar la negligencia de las autoridades tras un accidente de tren en el que murieron una veintena de personas. En vísperas del referéndum sobre la reforma constitucional también se produjeron detenciones de al menos 160 activistas que cuestionaron los cambios, según datos de HRW. En un contexto regional marcado por las masivas movilizaciones en países como Sudán o Argelia, al-Sisi advirtió públicamente a la población egipcia sobre los riesgos de las protestas. Durante el segundo semestre, los arrestos masivos se intensificaron después de que un empresario egipcio radicado en España, Mohamed Ali, difundiera en redes sociales críticas contra al-Sisi por mala gestión y abuso de recursos públicos. Las acusaciones –negadas por el mandatario en una alocución televisada– alentaron multitudinarias protestas antigubernamentales en diversas ciudades del país, entre ellas El Cairo, Alejandría, Damietta y Suez y una repuesta represiva de las fuerzas de seguridad. Así, según diversas fuentes, **entre septiembre y diciembre más de 4.000 personas habían sido arrestadas.** A lo largo de todo el año también se registraron detenciones de personas acusadas de apoyo, financiación o pertenencia a grupos terroristas y **se denunció el extenso uso de la pena de muerte en el marco de juicios colectivos y por cargos vinculados supuestamente con violencia política.** Cientos de personas habrían sido condenadas a la pena capital en procesos militares y civiles, según HRW. Durante el año, al menos 15 personas detenidas por cargos políticos fueron ejecutadas, de acuerdo a los datos del Frente Egipcio por los Derechos Humanos. Expertos de la ONU también alertaron sobre ejecuciones arbitrarias en el país, en al menos nueve casos con indicios de confesiones bajo torturas o juicios irregulares. Durante 2019 **se continuó alertando sobre la situación de las personas detenidas, entre ellas el ex presidente y líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, que murió en prisión en junio.** Expertos de la ONU indicaron que las condiciones de su detención podrían haber conducido al fallecimiento del dirigente islamista. Adicionalmente, Egipto continuó siendo uno de los países más peligrosos para los y las periodistas –una treintena de reporteros permanecían detenidos a finales de 2019, algunos acusados de difundir noticias

41. Véase el resumen sobre Egipto (Sinaí) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

falsas– y las autoridades continuaron con su política de bloqueo a webs de noticias, políticas o de derechos humanos –más de 600 sitios habrían sido cerrados desde 2017, según HRW. Cabe mencionar también que persistió el acoso a activistas por los derechos de las mujeres –incluyendo prohibiciones de viajar fuera del país– y al colectivo LGTBI –personas transgénero fueron detenidas y acusadas de terrorismo, entre otros casos.

Iraq	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Interno internacionalizado Gobierno
Actores:	Gobierno, oposición política y social, Irán, EEUU

Síntesis:

La invasión internacional de Iraq liderada por EEUU en 2003 derivó en el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein y en la configuración de un nuevo sistema político. El nuevo sistema instaurado a instancias de Washington dividió el gobierno en función de líneas sectarias. En este contexto, en los últimos años ha crecido la desafección y frustración ante una clase dirigente percibida como corrupta y motivada por intereses personales y de grupos, a expensas de la calidad de vida de la ciudadanía. Así, desde 2015, se han sucedido las manifestaciones populares –protagonizadas mayoritariamente por jóvenes– que denuncian la corrupción endémica, los déficits de gobernanza, los graves problemas en la provisión de servicios, el desempleo y la falta de perspectivas de futuro. En 2019, las movilizaciones antigubernamentales masivas y la severa represión de las fuerzas de seguridad expusieron la seria crisis política que afronta el país, la falta de legitimidad de sus autoridades y los recelos ante la influencia de actores externos –y en particular a la creciente ascendencia de Irán– en los asuntos iraquíes.

Durante 2019 **Iraq fue escenario de una grave tensión como consecuencia de masivas protestas contra el sistema político, la corrupción, el nepotismo y el mal manejo económico de la clase dirigente que fueron duramente reprimidas, resultando en la muerte de más de 400 personas y en más de 20.000 heridas.** Aunque el país ha vivido periódicas movilizaciones populares desde 2015, los hechos vinculados a las manifestaciones del último año fueron considerados por algunos analistas como los más graves desde la invasión estadounidense del país en 2003. Las protestas – mayoritariamente pacíficas y que en ocasiones congregaron hasta 200.000 personas– fueron también más sostenidas e involucraron a colectivos diversos, entre ellos desempleados, estudiantes, activistas de la sociedad civil y miembros de tribus. La situación puso en evidencia la fragilidad y falta de legitimidad del sistema de gobierno instaurado tras el derrocamiento de Saddam Hussein, el descontento con un modelo de poder basado en divisiones sectarias y la irritación por

la creciente influencia de Irán en algunos sectores de la población iraquí, incluyendo entre shíes. Si bien hubo protestas contra la corrupción que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el sur del país en los primeros meses del año –Najaf, en mayo, y Basora, en junio–, los hechos más significativos se concentraron en el segundo semestre. Las manifestaciones antigubernamentales se intensificaron a principios de octubre y el detonante habría sido la decisión del primer ministro, Adel Abdul Mahdi, de degradar a un popular general, considerado por algunos sectores como un héroe por su papel en la lucha contra ISIS. El hecho de que el general perteneciera a Servicio de Contrterrorismo (CTS) y la relación de competencia del CTS con el conglomerado de milicias de Hashd al-Shaabi –las más poderosas de las cuales están vinculadas con Irán– fue interpretado por algunos sectores como una rendición ante los grupos paramilitares de Hashd.

Las protestas rápidamente ampliaron sus demandas y pusieron el foco de sus críticas en la corrupción, la falta de empleos y las graves carencias en los servicios públicos. **Las movilizaciones en Bagdad y en diversas ciudades del sur del país –que luego se expandieron a otras zonas del norte y centro del país– fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y armas de fuego para dispersarlas.** Manifestantes también atacaron sedes de partidos islamistas shíes y de grupos paramilitares. Así, tan solo en la primera semana de protestas el balance de fallecidos fue de 149 manifestantes y ocho miembros de las fuerzas de seguridad. La dura respuesta de las autoridades no sofocó el movimiento, como tampoco el paquete de medidas anunciado por el gobierno de Mahdi (creación de empleos, castigo a corruptos, ayudas a la población más pobre, cambios en el gabinete) y las movilizaciones continuaron en las semanas siguientes. En este contexto, la mayor autoridad shí del país, el ayatollah Ali al-Sistani –que suele pronunciarse solo en situaciones de grave crisis– denunció la represión y exigió una investigación de los hechos, mientras que el dirigente político y clérigo shí Moqtada al-Sadr expresó su apoyo a los manifestantes y exigió la renuncia del gobierno. Informaciones de prensa aseguraron que el máximo líder de la unidad al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Qassem Soleimani, viajó en noviembre a Bagdad para conseguir un acuerdo que permitiera la continuidad del gobierno. A mediados de ese mes, en tanto, la misión de la ONU en Iraq (UNAMI) propuso una hoja de ruta para resolver la crisis –apoyada públicamente por al-Sistani– que incluía cuestiones como el fin inmediato de la violencia, la liberación de personas detenidas, una investigación sobre la desaparición y excesivo uso de la fuerza contra manifestantes y reformas electorales, entre otras medidas.⁴²

A finales de noviembre, manifestantes incendiaron el consulado de Irán en Najaf, evidenciando el componente crítico a la influencia de Teherán en Iraq entre algunos

42. Véase el capítulo sobre Oriente Medio en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*, Icaria: Barcelona, 2020.

de los sectores movilizados, incluso en zonas de mayoría shíí. Las fuerzas de seguridad y milicias respondieron con dureza y abatieron a 44 personas en Najaf y Nassiriya. Tras estos hechos, al-Sistani pidió al Parlamento que retirara su apoyo a Mahdi. El primer ministro presentó su renuncia y hasta finales de año las fuerzas políticas no habían conseguido acordar la formación de un nuevo gobierno. En diciembre las movilizaciones continuaban, en paralelo a denuncias de ataques y muertes de manifestantes –algunos de ellos a puñaladas– presuntamente a manos de simpatizantes de milicias pro-iraníes o de colaboradores de las fuerzas estatales. La UNAMI alertó de denuncias creíbles sobre asesinatos, secuestros y detenciones arbitrarias a manos de “milicias”, “terceras partes”, “entidades armadas” o “saboteadores” y denunció continuos y severos abusos a los derechos humanos. Según el balance de la UNAMI, desde el 1 de octubre y hasta el 9 de diciembre, la violencia durante las protestas había causado la muerte de 424 personas y heridas a unas 8.758, incluyendo integrantes de las fuerzas de seguridad, aunque esta última cifra se eleva a casi 20.000 si se contabiliza a las personas afectadas por heridas causadas, por ejemplo, por la inhalación de gas. La UNAMI denunció que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, las autoridades iraquíes no permitieron el acceso a estadísticas oficiales hospitalarias sobre los afectados en las manifestaciones ni las visitas para entrevistar a las víctimas. Diversos análisis intentaron aportar claves para entender las dinámicas del movimiento de protesta en Iraq y las dificultades para una pronta solución a la crisis en el país. Entre ellas, se mencionó la extendida desconfianza hacia la clase política y los mecanismos democráticos – en parte a causa de las experiencias de fraude electoral, nepotismo, clientelismo y uso de partidos para proyectos personalistas, entre otros factores–; el elemento generacional –la mayor parte de los manifestantes son menores de 30 años, que representan el 67% de la población y experimentan una frustración creciente ante los fallos de gobernanza en el país–; la respuesta cortoplacista de las autoridades –vinculada a su incapacidad para ofrecer un proyecto de futuro atractivo–; y las dificultades del movimiento de protesta para canalizar sus demandas, orientadas a cambios profundos y estructurales en un sistema político que perciben como corrupto e incapaz de mejorar las condiciones de vida de la población pese a las riquezas petroleras del país. En este contexto, **la escalada de hostilidades entre Washington y Teherán a finales de año, que se materializó en una serie de hechos de violencia en Iraq y la muerte del general iraní Qassem Soleimani en un ataque estadounidense en Bagdad amenazaban con desestabilizar aún más el escenario interno iraquí.**⁴³

Iraq fue escenario de una grave tensión como consecuencia de masivas protestas contra el sistema político, la corrupción, el nepotismo y el mal manejo económico de la clase dirigente que fueron duramente reprimidas, resultando en la muerte de más de 400 personas

Israel – Siria – Líbano

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en el Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

En línea con lo observado el año anterior, la tensión internacional histórica que involucra a Israel, Siria y Líbano, y progresivamente de una manera más directa a Irán, motivó diversos incidentes que habrían costado la vida a casi un centenar de personas –94 fallecidas a partir de recuentos informales. **La mayor parte de los hechos de violencia vinculados a esta tensión se produjeron en territorio sirio y afectaron la zona de los Altos del Golán –ocupados por Israel desde la guerra árabe israelí de 1967–, pero también otras zonas, como Quneitra, Deir al-Zour, Aleppo, Hama e incluso Damasco.** Así, en enero, ataques aéreos israelíes en el sur de la capital siria sobre instalaciones que pertenecerían a Irán y milicias afines fueron seguidos, en una aparente represalia, por ataques sobre la zona del Golán ocupada por Israel. Las fuerzas israelíes respondieron con un nuevo ataque contra fuerzas de al-Quds –la unidad militar iraní encargada de operaciones extraterritoriales– que habría causado la muerte a 12 personas. Pese a las advertencias de Rusia a Israel sobre sus operaciones en Siria, fuerzas israelíes atacaron nuevamente en febrero un puesto de observación de Hezbollah en Quneitra (sur) y en marzo lanzaron una operación aérea contra un presunto depósito de armas iraníes en Aleppo que habría causado la muerte a varios combatientes iraquíes e iraníes. En abril los ataques israelíes afectaron infraestructuras del régimen sirio en Hama, mientras que en mayo Damasco informó

43. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

de la intercepción de misiles israelíes lanzados desde los Altos del Golán que pretendían alcanzar objetivos iraníes en la capital siria. Los meses de verano fueron escenario de los incidentes más cruentos: ataques aéreos israelíes contra fuerzas progubernamentales sirias, activos iraníes y de Hezbollah en Altos del Golán, Homs y Damasco entre junio y julio habrían causado la muerte de 35 personas, entre ellos al menos siete civiles. En septiembre, un presunto ataque israelí en el este, cerca de la frontera con Iraq, habría provocado la muerte de otros 18 combatientes iraníes e iraquíes. En noviembre, tras interceptar cuatro cohetes lanzados desde el Golán hacia Israel, las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva contra objetivos sirios e iraníes en los que habrían muerto otras 23 personas. En diciembre, otros dos incidentes contra milicias pro-iraníes en la provincia siria de Deir al-Zour dejaron diez fallecidos, en hechos que Hezbollah atribuyó a Israel. Durante el año se informó de otros ataques de Israel destinados a evitar ofensivas con drones desde Siria sobre territorio israelí.

El ataque israelí sobre posiciones de Hezbollah en la capital libanesa, en agosto, encendió las alarmas en 2019

Los incidentes vinculados a esta tensión también afectaron a territorio libanés. **La acción que provocó más alarma durante 2019 fue la ofensiva israelí contra Hezbollah en Beirut, en agosto. Dos aviones no tripulados israelíes lanzaron una ofensiva contra posiciones de Hezbollah en la zona de Dahiyah, bastión del grupo shií al sur de la capital libanesa.** Un día después se informó de otra acción israelí en el este de Líbano contra el Frente Popular de Liberación Palestino (FPLP), organización que también recibe apoyo de Irán. La ofensiva sobre Beirut fue considerada por las autoridades libanesas como una “declaración de guerra” –en palabras del presidente libanés– y como la acción más grave desde la guerra desde 2006, por lo que hicieron un llamamiento a la comunidad internacional a denunciar la flagrante violación de la soberanía del país. El líder de Hezbollah, en tanto, señaló que esta acción hostil ponía en entredicho los términos vigentes desde 2006. En septiembre, de hecho, se produjeron los primeros intercambios de artillería entre Israel y Hezbollah en años, aunque no se registraron víctimas. **Durante 2019 las partes también intercambiaron declaraciones amenazantes. Así, por ejemplo, el líder de Hezbollah alertó sobre la posesión de numerosos misiles con capacidad de golpear a Israel, mientras que altos cargos militares israelíes subrayaron que en una próxima confrontación bélica no deberían hacerse distinciones entre el Gobierno libanés y Hezbollah.** En esta línea, cabe destacar que tras la conformación del nuevo gobierno libanés a principios de año, las autoridades libanesas emitieron una declaración que reivindicaba el derecho de los libaneses a la resistencia frente a la ocupación y agresiones de Israel, en lo que se consideró como una cobertura para las estructuras militares de Hezbollah.

Cabe agregar que los sucesivos informes de la ONU sobre las operaciones de la UNIFIL y la implementación de la resolución 1701 (2006) constataron las sistemáticas

violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel y también informaron sobre las acciones israelíes para cerrar túneles que atravesaban la llamada Línea Azul, entre otras acciones. Si bien no se registraron avances en las demarcaciones fronterizas, se produjeron algunos contactos destinados a resolver las disputas de límite marítimo entre Líbano e Israel, a instancias de EEUU. Finalmente, cabe destacar que en las dinámicas de esta tensión durante 2019 también influyeron otros posicionamientos de Washington, en particular el decreto firmado en marzo por el Gobierno de Donald Trump que reconoció soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Siria y Líbano rechazaron la medida y Naciones Unidas aseguró que la declaración estadounidense no cambiaba el estatus del Golán.

Líbano	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

A diferencia de años previos en los que la tensión estuvo determinada sobre todo por la influencia del conflicto armado en la vecina Siria y en particular por hechos de violencia en las zonas fronterizas, **durante 2019 la situación en Líbano estuvo marcada especialmente por masivas movilizaciones antigubernamentales que se intensificaron en la segunda mitad del año.** 2019 se inició con el anuncio del primer ministro, Saad Hariri, sobre la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional después de nueve meses de bloqueo tras las elecciones parlamentarias. Tras la aprobación del nuevo Ejecutivo por el Parlamento en febrero, la atención se centró en las reformas económicas y la propuesta de presupuesto del nuevo gobierno, hecho

que activó las primeras protestas contrarias a las medidas de austeridad en mayo. A partir de entonces, se sucedieron las movilizaciones de veteranos militares y funcionarios, entre otros colectivos, y se produjeron algunos choques entre las personas manifestantes y las fuerzas de seguridad. **Las protestas se intensificaron a finales de septiembre y adquirieron una dimensión masiva en octubre, después de que Hariri anunciara un impuesto al uso de la red social WhatsApp como parte del paquete de medidas de austeridad de su gobierno. Las movilizaciones –consideradas como las mayores de la última década– se iniciaron en Beirut, pero se extendieron por todo el país,** denunciando la corrupción y el mal manejo económico de la clase dirigente y exigiendo la renuncia del gobierno. Los manifestantes ocuparon los espacios públicos para sus debates y denunciaron el sistema político confesional imperante en el país. Algunos análisis destacaron como elementos característicos de estas protestas su masividad y naturaleza descentralizada, el apoyo a las manifestaciones en todas las regiones y comunidades, el hecho de que las movilizaciones trascendieran las divisiones confesionales, entre otros elementos.⁴⁴ También se destacó el papel de las mujeres en el movimiento de contestación.⁴⁵

Líbano fue escenario de masivas movilizaciones antigubernamentales, consideradas las mayores de la última década

En el marco de las protestas se produjeron diversos incidentes que derivaron en la muerte de cinco personas. Entre ellas dos refugiados sirios que fallecieron en un edificio que se incendió durante las protestas, dos personas tiroteadas por los guardaespaldas de un parlamentario que intentó sumarse a las protestas y fue atacado por los manifestantes, y otra que recibió el disparo de un soldado que intentaba dispersar las protestas. Paralelamente, decenas de personas resultaron heridas en enfrentamientos diversos entre la policía y manifestantes, entre manifestantes y partidarios del presidente Michel Aoun, entre manifestantes y

seguidores de Hezbollah y su grupo aliado Amal, y entre miembros de estas dos organizaciones y del partido cristiano Fuerzas Libanesas. Cabe destacar que el líder de Hezbollah inicialmente respaldó las protestas, pero luego rechazó las demandas de renuncia del gobierno y atribuyó las movilizaciones a interferencias externas. El mismo discurso que asumieron las autoridades iraníes tras el estallido de protestas en ese país y la coincidencia de intensas movilizaciones en Líbano e Iraq durante el último trimestre de 2019.⁴⁶ Las protestas antigubernamentales forzaron la renuncia de Hariri a finales de octubre. Las facciones políticas negociaron durante semanas hasta consensuar la designación del ex ministro de Educación, Hassan Diab, como nuevo primer ministro. Diab asumió a mediados de diciembre y prometió formar un gobierno de tecnócratas en un plazo de seis semanas, pero las movilizaciones –incluyendo peticiones de renuncia del nuevo primer ministro– continuaron. La incertidumbre política persistía a fines de 2019, en medio de una severa crisis económica, la peor en el país desde la guerra civil (1975-1990), según analistas. Cabe destacar algunos otros hechos relevantes durante el año. Entre ellos, dos incidentes ocurridos en junio: un ataque perpetrado por un presunto “lobo solitario” del grupo armado ISIS, que dejó cinco personas fallecidas en Trípoli, y la agresión al convoy de un ministro en las afueras de Beirut protagonizado por dos facciones drusas rivales que dejó dos muertos y motivó varias semanas de parálisis en el gabinete. En este sentido, cabe mencionar que los informes de la ONU sobre la situación en Líbano informaron de la detención de decenas de personas vinculadas a ISIS y al ex Frente al-Nusra en 2019 y también subrayaron que no se han observado progresos tangibles en el desmantelamiento y desarme de milicias libanesas, según lo previsto en los Acuerdos de Taif (1989) y en la resolución 1554 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU.

44. Anis Chérif-Alami, “Twenty Days of Lebanese Protests: Between Continuity, Innovation and Uncertainty”, *Arab Reform Initiative*, 6 de noviembre de 2019.

45. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

46. Véase los resúmenes sobre Iraq e Irán en este capítulo.

